

31669

DIAGNOSTICO SOCIAL DE LA ZONA OESTE
DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA

Leonardo Silvio Vaccarezza

Colaboró en este trabajo el lic. Juan Carlos Serra en las etapas de formulación del diseño, el relevamiento de información secundaria, el trabajo de campo y en algunas etapas del análisis. Sus sugerencias aportadas en discusiones que suscitó la interpretación de los datos fueron de extrema utilidad.

También participó el lic. Hernán Carlino en el relevamiento de información y análisis de los aspectos educativos.

Sin embargo, las afirmaciones expuestas en el presente informe son responsabilidad exclusiva del autor.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CATALOGADO

1986

1

6.
F. 313
V 11
II

INDICE

Introducción	1
I. Aspectos demográficos	4
II. Aspectos sociales de la producción agrícola	27
III. Aspectos ocupacionales	50
IV. Salud y nutrición	57
V. Educación	73
VI. Infraestructura física y social	79
VII. Conclusiones	87

DIAGNOSTICO SOCIAL DE LA ZONA OESTE DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA

En el marco del Programa de Desarrollo Integral de la Zona Oeste de la Provincia de La Rioja el presente diagnóstico pretende servir como una base inicial para la discusión respecto a políticas globales y soluciones concretas. El Programa como tal no se concibe aquí como un producto intelectual acabado con definiciones más o menos precisas acerca de las acciones a desarrollar, sino como un espacio social de participación de la comunidad respecto a las necesidades, líneas posibles de acción y alternativas de solución a los problemas identificados. En tal sentido, el Programa es una construcción dinámica, que partiendo de parámetros globales, va desarrollandose, especificando sus componentes, evaluando sus resultados y ajustandose en una relación continua entre diagnóstico, propuesta, implementación y evaluación.

Partiendo de tal concepción del planeamiento, el diagnóstico que aquí se presenta no pretende más que identificar las características más sobresalientes de la zona sujeta a estudio. El debería servir como base inicial de aproximación a la realidad de la zona, no solo para los agentes externos a la misma que actúan en ella, sino para sus mismos habitantes, autoridades locales y dirigentes de instituciones comunitarias. No es contradictorio suponer que los mismos sujetos de la situación que se estudia puedan avanzar en su propio conocimiento mediante un diagnóstico construido desde la externalidad respecto a la zona en que se ubica su autor. En cierta forma, al margen de la certidumbre del diagnóstico realizado y de la veracidad o utilidad de la interpretación elaborada respecto a su realidad -tópicos que son motivos de discusión-, el valor del diagnóstico reside en su calidad de ordenamiento de hallazgos, conjeturas, preguntas y ponderación de los problemas que no necesariamente se encuentra sistematizado en los mismos sujetos de la situación.

De hecho, su elaboración fue realizada sobre la base de dos tipos de información: entrevistas a autoridades locales, funcionarios provinciales, directivos de organizaciones comunitarias, agentes sociales de la comunidad y, en general, a residentes en la zona que por su ubicación en la estructura social tuvieran un punto de mira respecto a la situación más allá de lo que circunscriben sus intereses particulares. Un segundo tipo de información es la proveniente de fuentes secundarias (censos, estadísticas, estudios elaborados, etc.). Sobre uno y otro tipo de información, contrastándolas, iluminando o cuestionando uno con el otro, se intentó abordar una tarea interpretativa de la realidad social de la zona.

En tal sentido, un diagnóstico no se concibe como una descripción pasiva de la situación que puede transmitir la información recogida. Tampoco puede limitarse a señalar el

"estado de cosas" que aquella presenta. Por una parte, el diagnóstico se elabora sobre la base de la tarea interpretativa, entendiendo por tal el esfuerzo de destacar caracteres ocultos por detrás de los datos bajo análisis, mediante la comparación de la información y la asignación de un sentido causal -siquiera a nivel de conjetura- de los hechos que describen los datos. En el mismo sentido, el análisis de las entrevistas a informantes deben partir de una "desconfianza metodológica", no de la información fáctica que aporta, sino de las explicaciones que, implícita o explícitamente, incorpora a su discurso para justificar el hecho consignado. Tal esfuerzo de interpretación involucra el riesgo necesario del error en la medida que un estudio de esta naturaleza no incorpora los parámetros metodológicos para la prueba de hipótesis; pero de otra forma la tarea resultaría más estéril: circumscribta a reproducir deshilvanadamente una suma de hechos y transcribir las explicaciones aportadas por los entrevistados, con frecuencia contradictorias entre los de unos y otros.

Por otra parte, el interés del diagnóstico reside más que en la descripción de situaciones estáticas, o el estado de situación de la zona en sus distintos aspectos, en la identificación de procesos dinámicos que explican, por un lado, aquel estado y permiten avisorar, por el otro, la tendencia futura. Por procesos entendemos aquí no solo los que se desarrollan sobre la linealidad temporal, sino también aquellos interaccionales entre sujetos, sectores sociales, instituciones y organizaciones que dan razón de las conductas de éstos.

Somos conciente que la tarea interpretativa reclama un marco de referencia teórico que organice el sentido de los hallazgos y descripciones. No fue el caso en este trabajo. A lo largo del análisis quizá puedan identificarse distintos cuerpos teóricos no explicitados, algunos de alcance más global y otros más específicos. No fue nuestra intención enfatizar este aspecto de la investigación, en parte porque su cometido está muy lejos de ser académico y en parte porque concebimos al estudio como una exploración de una realidad compleja e ignorada por nosotros mismos donde los distintos fenómenos, procesos y cuestiones tienen un valor por sí mismo en la tarea de planificación. De tal forma no podíamos partir de un ordenamiento teórico inicial en el que desde las preguntas del conocimiento hasta las variables de análisis se encuentran jerarquizadas. Quizá pueda revisarse a partir del diagnóstico elaborado una relectura del análisis con el intento de construir modelos teóricos abarcativos de la situación social de la zona. No estamos seguros, sin embargo, que ello brinde mayor utilidad al destino del presente estudio, que pretende servir como un material de base para la búsqueda de soluciones a los mismos sujetos de la situación.

Por otra parte, nuestro enfoque no fue totalmente abarcativo de la realidad de la zona. Muchas cuestiones básicas del sistema productivo -sustento obvio donde se desenvuelven los procesos sociales- no fueron considerados, sino solo tangencialmente. Hemos intentado desbrozar algunos aspectos sociales relacionados

con la fase productiva de la zona, tales como el problema minifunditario y las pautas de solidaridad y cooperativización. Pero no hemos analizado la situación de otros sectores de la producción ni el rol y función de determinados agentes económicos como el sector financiero o el mercado de productos, etc. Tampoco manejamos información de detalle sobre la magnitud y calidad de los recursos naturales y económicos de la zona ni las estructuras de su puesta en uso.

Quizá por ello mismo el análisis interpretativo resulte por momentos excesivamente sectorizado y para algunas cuestiones no se haya podido avanzar mucho más allá de la simple descripción de situaciones. Entendemos que otras vertientes de análisis en desarrollo dentro del mismo Programa brindarán mayor luz a la interpretación de tales cuestiones a la par que podrían otorgar una visión más integrada de la problemática de la zona.

La tarea no se agota en el presente diagnóstico. Como dijimos éste quiere servir como apertura de polémica a distintos niveles institucionales. Además resta una identificación preliminar de líneas de acción que si bien serían deducibles del mismo análisis aún no fueron formuladas. Al igual que el diagnóstico tales líneas no deberían considerarse definiciones de la acción, sino tópicos de discusión, reformulación y prioritación por parte de los actores involucrados en la problemática de la zona Oeste.

1. Aspectos demográficos

Desde el punto de vista demográfico, los tres departamentos que componen la zona oeste de La Rioja configuran ejemplos de marcado subdesarrollo. Algunos indicadores claves dan la pauta de ello:

1) La densidad poblacional del total de la zona era, en 1980, de solo 0,4 hab/km² mientras que para el conjunto de la Provincia alcanzaba a 1,8. En tanto la superficie correspondiente a los tres departamentos equivale al 29% del total provincial, su población solo representaba menos del 7%. Considerando cada uno de las unidades departamentales, Gral. La Madrid (desde ahora GLM) y Gral. Sarmiento (desde ahora, GS) son las más despobladas de la Provincia, en tanto Felipe Varela (desde ahora FV) está entre los siete departamentos menos densos, con un valor de 0,8 hab/km².

2) La dinámica demográfica es otro rasgo relevante del subdesarrollo poblacional. Durante el último período intercensal (1970 a 1980) la Provincia de La Rioja creció un 19% en los 10 años. Este valor positivo se debió, no obstante, a solo 7 departamentos de los 18 que componen la Provincia. Pero particularmente, el crecimiento se concentró en tres de aquellos: Capital (37%) y Arauco y Chilecito (23%, cada uno). Los restantes perdieron toda población, ya sea en términos absolutos (o sea, disminuyendo el número de sus habitantes entre 1970 y 1980), ya sea en términos relativos a la generación de población propia (esto es, expulsando población generada durante el período sin llegar a eliminarla totalmente). A pesar del incremento demográfico de los tres nombrados, la Provincia en su conjunto creció menos de lo que hubiera sido posible de retener el total de su incremento vegetativo, manifestandose, por tanto, como una de las provincias argentinas expulsoras de población. Con todo, en descargo de esta imagen negativa, conviene destacar que los años 70 constituyeron un cambio significativo en la dinámica poblacional de la Provincia: en efecto, el 19% de incremento antes consignado supone la ruptura de la tendencia decreciente durante los últimos 70 años, durante los cuales las tasas de crecimiento intercensal fueron del 10% (1914 a 1947), del 11% (1947 a 1960) y del 6% (1960 a 1970).

Pero como fue dicho, tal relativa recuperación demográfica de la provincia solo beneficia a unas pocas zonas, dentro de las cuales no está, por supuesto, la zona Oeste. Durante la última década entre censos, ésta pierde población en términos absolutos: pasa de 11.056 habitantes en 1970 a 10.841 en 1980, un decrecimiento del orden del 2%. Aún más, uno de sus departamentos (GS) es el que sufre el mayor despoblamiento en toda la provincia, perdiendo casi el 8% de la población que tenía en 1970, más la que pudo haber generado durante el período.

3) Otro signo sintomático del subdesarrollo poblacional de la zona es la proporción de población en edad activa -tanto laboral demográficamente. Si tomamos un grupo amplio de edades -entre los 15 y los 39 años, edades claves de la migración y de la reproducción- los departamentos de la zona Oeste revelan también aquí su vulnerabilidad: mientras que para el conjunto de la Provincia, la participación de esas edades en el total poblacional alcanzaban, en 1980, al 36%, y para la zona demográficamente más dinámica -Capital- la misma proporción era del 39%, los valores correspondientes a los tres departamentos que nos ocupan eran notablemente menores: 32% (GLM), 31% (FV) y 31% (GS). Es obvio que la baja participación de estos grupos de edad no solo están indicando la intensidad del proceso emigratorio que aqueja a la población de estos departamentos, sino también su incapacidad creciente para asegurar su propio desarrollo poblacional. Vistos desde la óptica de los recursos humanos, los datos sugieren la limitación de la zona para inaugurar un proceso de recuperación económica.

4) Una expresión dramática de los problemas demográficos de la zona es la proporción de viviendas desocupadas. Esto es indicación del despoblamiento agudo que aquella sufre e irónica contradicción, como veremos en otra sección, del problema habitacional que la aqueja. Para el total de la Provincia aquella proporción alcanzaba en el último censo al 14%; en cambio, en GLM llegaba al 29%, en FV, al 25% y en GS, al 28%.

Los rasgos señalados hasta ahora son continuación -y a la vez, resultado- de un antiguo proceso de deterioro demográfico. La zona en su conjunto vivió su momento de mayor esplendor a fines del siglo pasado sustentado principalmente en su función de área de tránsito y pastaje para el ganado vacuno y mular que, originario de Córdoba, se exportaba a Chile. Al compás de esta economía de invernada ganadera se desarrollaba una estructura productiva y ocupacional particularmente compleja. En el plano demográfico, el dinamismo de la época se manifiesta en el crecimiento de la población: un 54% entre 1869 y 1895, equivalente a un 2,1% anual. Luego el proceso se resiente notablemente: un 0,7% entre 1895 y 1914, un 0,1% entre 1914 y 1947, un 0,4% entre 1947 y 1960, hasta inaugurar la tendencia decreciente en el período siguiente: -0,15% en la década del 60 y -0,19% durante los años 70. La declinación, primero, y la interrupción, finalmente, del tráfico fronterizo de ganado (el último arreo consignado data de fines de la década de los 50) tiene indudable responsabilidad en este proceso. La importancia que adquirió la vitivinicultura a mediados del presente siglo supo mantener el caudal demográfico de la zona pero no fue suficiente para iniciar una nueva onda de crecimiento. La crisis de esta industria que arranca a mediados de la década pasada agudizó aún más el deterioro poblacional que -a decir de los informantes de la zona entrevistados- continuó acelerándose en lo que va de la presente década.

El proceso migratorio

Como fue dicho, la zona en su conjunto perdió un 2% de población entre 1970 y 1980. Tal como puede observarse en el cuadro Nro. 1, la evolución no fue pareja entre los departamentos que la componen. En el caso de GLM la magnitud demográfica se mantiene igual en ambas fechas (solo un 0,1% de incremento), mientras que los dos restantes disminuyen su población: -0,3 (FV) y -7,8% (GS). Así, la participación de cada departamento en el total zonal varió, aunque muy levemente, aumentando FV en detrimento de GS, el de mayor regresión demográfica.

La responsabilidad principal del deterioro poblacional correspondió al proceso emigratorio. Aún más, el impacto de éste fue tal a pesar del alto dinamismo que alcanzó el crecimiento vegetativo. En efecto (ver cuadro Nro.2), la estimación del proceso emigratorio durante la década del 70 señala una pérdida de población del 28% para el total de la zona. Ello se deduce de sumar el crecimiento intercensal (-2%) y la generación de población propia durante el período (26%).

En realidad, el impacto de la emigración sobre el potencial demográfico de la zona ha sido mayor de lo que consignan estos datos. En otras palabras, si no hubiera habido emigración (ni inmigración) la población habría crecido más que el 26% atribuido al incremento vegetativo, pues, como veremos, fueron principales protagonistas de la emigración aquellos habitantes con capacidad de reproducción. De haber sido éstos retenidos en la zona, el crecimiento vegetativo habría sido superior.

La comparación entre las décadas del 60 y del 70 indica una aceleración notable del drenaje migratorio: en la primera, éste fue del 19% contra un 28% de la década más reciente. Esta evolución es inversa a la experimentada por la Provincia en su conjunto la cual, siendo todavía expulsora de población, redujo notoriamente su caudal emigratorio entre ambas décadas: de un 13 a un 7%.

La tasa emigratoria fue elevada para los tres departamentos de la zona. En el caso de GS fue más pronunciada y sobre todo, significó una aceleración extrema, ya que de una tasa moderada en los años 60 (-11%) trepó al -32% en la década del 70. Los otros dos departamentos contaron con tasas próximas al -26%, lo cual representa una disminución de su ritmo (comparada con las de los años 60) para GLM -quizá evidenciando un efecto de saturación del proceso- y una aceleración para el caso de FV.

Es obvio que estos datos simplifican al extremo la compleja dinámica del fenómeno migratorio. Por empezar ellos miden, no la emigración efectiva, sino el saldo migratorio -esto es, la diferencia entre inmigrantes y emigrantes. Sabemos que los primeros no deben ser muchos en tanto la zona no muestra factores ponderables de atracción poblacional. Sin embargo, el desarrollo de los servicios públicos (especialmente educación y salud) absorbe generalmente recursos humanos externos a la zona.

Teniendo en cuenta el exiguo volumen poblacional de los departamentos en cuestión, la introducción de unos pocos maestros, médicos, etc. puede tener un efecto relativo como cuota de inmigración. No obstante, las magnitudes de emigración consignadas son tales que la eventualidad de ese efecto no cuestiona la imagen de una sociedad netamente expulsora de sus recursos humanos.

Tampoco los datos permiten analizar la dinámica migratoria interna a la zona. En efecto, como veremos luego, la distribución geográfica de la población ha variado durante el último período intercensal, existiendo localidades que aparentemente funcionaron como centros de atracción poblacional. Es dable sospechar, entonces, que la zona no actuó monolíticamente como expulsora de población, sino que se han producido desplazamientos internos entre departamentos y, aún, dentro de cada uno de ellos. Es posible, incluso que un departamento como FV haya recibido población de los otros dos al mismo tiempo que expulsó habitantes propios. De echo, éste es el proceso que sugieren los informantes zonales entrevistados, al cual haremos referencia más adelante.

Aunque solo hipotéticamente, podemos formular una "imagen" de la zona que surge de la comparación entre las tasas de emigración de los departamentos: como fue indicado en otro momento, la zona se presenta, geográficamente, como un "callejón sin salida" cuyo extremo cerrado está representado por el departamento GS y, particularmente, la localidad Jague. Es éste, por otra parte, el departamento más incomunicado y el que ha podido mantener su mayor autonomía relativa (como veremos luego, con un predominio mayor de lo que podríamos denominar el modo campesino de producción y de vida). Los años 70 habrían representado para este departamento el agotamiento definitivo de su propia autonomía y la mayor apertura o comunicación con el medio circunsdante. La emigración, de hecho, puede ser considerada, también un medio de comunicación social, proceso al que habían accedido más plenamente los otros departamentos en años previos. De ahí la elevación abrupta de la tasa de emigración entre la década del 60 y la del 70. A la inversa, el departamento de GLM, por su mayor antigüedad en la dinámica emigratoria, comenzó a experimentar durante esta última el agotamiento o saturación del proceso de despoblación, que se mantuvo con vigor durante los años 60. En el caso de FV, su estructura poblacional es más compleja, conformada con formaciones demográficas diferentes. Las explicaciones respecto al incremento de su tasa de migración entre las décadas pueden ser varias: una emigración de origen más urbano, una emigración fundamentalmente protagonizada por habitantes de pequeñas localidades, etc. Pero aquí, la importancia de la producción vitivinícola y la intensidad de su crisis desde mediados de la década pasada puede dar cuenta directa de la intensificación de su proceso de despoblamiento.

El crecimiento vegetativo

Hemos hecho referencia ya a la tasa relativamente elevada de

crecimiento vegetativo, equivalente a un 26% durante los años 70 aunque algo inferior al promedio provincial (27%). Al respecto, existe bastante homogeneidad entre los tres departamentos con un valor algo inferior en GS. Así como la tasa de emigración, se incrementó considerablemente entre la década del 60 y la del 70, la tasa de crecimiento vegetativo experimentó, también, un crecimiento destacable. Entre 1960 y 1970 fue del 17% y entre 1970 y 1980, del 26%. En esta cuestión, tal cambio fue paralelo a lo experimentado por la Provincia en su conjunto la cual también aumentó su dinámica de generación poblacional (20 y 27%, respectivamente, para las dos décadas).

De por sí, un crecimiento de la tasa de crecimiento vegetativo para la zona sorprende si se tiene en cuenta el contemporáneo crecimiento de la tasa migratoria. Una sociedad expulsora de población tiende a reducir su capacidad reproductiva al "resentir" la proporción de habitantes en edades más activas al respecto. Un aumento del crecimiento vegetativo puede deberse a dos factores: o un incremento de la natalidad o una disminución de la mortalidad general. Los datos sugieren como factor determinante al primero. En efecto, como puede observarse en los cuadros Nros. 3 y 4, la tasa de natalidad muestra una evolución ascendente en los años 70 respecto a la de los años 60. Tomando promedios quinquenales, a partir de una tasa relativamente alta entre 1961/65 se produjo un descenso pronunciado durante los 5 años siguientes. Entre 1971/75 vuelve a recuperarse el valor anterior y la tasa continúa ascendiendo durante la segunda mitad de la década del 70. Esta evolución resulta equivalente entre los tres departamentos y en el conjunto de la Provincia.

La importancia del crecimiento de la natalidad como determinante de los cambios en el crecimiento vegetativo es mayor si se considera que, paralelamente, la zona experimentó, también un aumento en los años 70 de la mortalidad general. Esta, obviamente, no implica, necesariamente, un deterioro de las condiciones de salud de la población. En gran parte, su valor está condicionado por la proporción de población envejecida que soporta el sistema. Y en efecto, si en 1960 el porcentaje de población de 65 y más años de edad alcanzaba al 4,7% para el total de la zona, en 1970 la misma proporción había trepado al 6,3%. O sea, por efecto de la emigración que afecta a la población más joven, la frecuencia de defunciones en relación a la población total se incrementó consecuentemente. También en el caso de la tasa de mortalidad la evolución fue concomitante para los tres departamentos, pero opuesta en relación a la tasa provincial, la cual, contrariamente, disminuyó durante la última década considerada.

Por lo tanto, se produjeron en la zona dos fenómenos de efectos contrarios sobre el volumen de población: un incremento en las funciones reproductoras y un incremento en la eliminación biológica de sus habitantes. Esto último es congruente con el peso proporcional de la población de mayor edad. En efecto, la proporción de población de 65 años y más aumentó entre 1970 y 1980 (ver cuadro Nro.5). Por otra parte, el aumento de la

natalidad se ve reflejada en el aumento de población infantil; justamente, como el ritmo de la natalidad se acelera durante la segunda mitad de los años 70, es el grupo de menores de 5 años los que incrementan notoriamente su participación en la estructura demográfica de 1980, pasando de un 14 a un 16%.

Es sabido que las variaciones en la tasa de natalidad pueden deberse ya sea a cambios en la magnitud relativas de mujeres en edad de procrear, ya sea a cambios en la fecundidad, esto es, la cantidad promedio de hijos por mujeres en aquella edad. En realidad, ambos procesos estuvieron vigentes: el porcentaje de mujeres en edad procreativa se incrementó, aunque muy levemente, para el conjunto de la zona (ver cuadro Nro. 6); la tasa de fecundidad pasó de un 16,2% en torno a 1970 a un 17,4% diez años después. En estos procesos, el comportamiento de los tres departamentos fue homogéneo.

Como síntesis de los procesos descriptos, podemos caracterizar a la zona como fuertemente expulsora de población y tendencia al envejecimiento de su estructura demográfica, habiendo recuperado durante los años 70 una cierta dinámica reproductiva por aumento de la fecundidad. No tenemos muchos elementos para explicar este aumento. Podemos indicar que entre los años 1973 a 1976 se formaron más parejas matrimoniales que en otras épocas: la tasa de nupcialidad aumentó considerablemente durante ese período (como puede verse en el cuadro Nro.7) para decaer en los años siguientes. No sería ajeno a este fenómeno la situación de bonanza económica en aquel período, no solo por la política de distribución de ingresos progresiva instaurada por el entonces gobierno constitucional, sino también, particularmente para la zona, por la buena coyuntura de precios de su producto principal, la vid. Lo cierto es que el aumento en el número de matrimonios entre 1973 y 1976 da cuenta del aumento de la natalidad entre 1975 y 1980, y por la misma razón, la disminución de la nupcialidad en los años posteriores, durante el proceso militar, explica la caída de la natalidad durante la presente década como veremos más adelante.

Características de los migrantes

Qué tipo de población participa en los contingentes de emigrantes de la zona? Un estudio sobre migraciones de la Provincia de La Rioja(*) señala a las edades de 17 a 29 años los límites dentro de los cuales se concentra el grueso de los emigrantes. También indica un leve predominio de las mujeres, para las cuales las edades claves son entre los 10 y 19 y entre los 30 y 39 años. Un dato destacable, sin embargo, es la aceleración de la emigración masculina a partir de 1976, lo cual no deja de ser coincidente con la crisis de la vitivinicultura antes mencionada.

Un análisis de la composición por sexos y edades de la emigración es posible utilizando las "tasas de supervivencia específicas". Si se compara cada grupo de edad en 1980 con el

grupo inmediatamente anterior en 1970 (considerando grupos con intervalos de 10 años), y a la diferencia entre ambos se le resta una estimación de las defunciones propias del grupo durante el período intercensal(**), el resultado indicará la cantidad de habitantes de tales edades que emigraron. Estos datos se indican en el cuadro Nro. 8.

En términos generales, la emigración femenina se anticipa, en edad, a la masculina. Con excepción del departamento más pequeño (GLM), la proporción de mujeres emigrantes en el cohorte que tenía 10 a 19 años en 1980 es mayor que la proporción correspondiente a los varones. En los tres departamentos, los porcentajes más altos de emigración para ambos sexos se da en el cohorte de 20 a 29 años, pero se observan porcentajes también considerables en el siguiente grupo de edad.

Pero además de estos rasgos generales, existen diferencias notables entre los departamentos. En los dos departamentos más chicos (GLM y GS), aún cuando la emigración de los jóvenes (20 a 29 años) es la más alta, también es elevada la tasa de emigración neta de los hombres de 30 a 49 años. Muy distinto es el caso del departamento más urbanizado (FV), donde siendo proporcionalmente más elevada la emigración de los jóvenes de 20 a 29 años (comparada con la de los otros dos departamentos), disminuye considerablemente entre los habitantes que superan tal edad.

No podemos dejar de destacar como base de tal diferencia la importancia relativa que en los dos primeros departamentos tiene la población con ocupaciones rurales y la que tiene en FV la población urbanizada. Sociológicamente ello tiene una importancia decisiva. Sugiere que el medio urbano tiene una capacidad de retención de recursos humanos en edades "maduras" pero es incapaz de retener a la juventud. No estaríamos alejados de la realidad si suponemos que un migrante con edades cercanas a los 40 años procedente del medio rural minifundista va a acotar su periplo migratorio en los límites de la zona. De ahí que la alta proporción de emigrantes de los departamentos más rurales de tales edades muy posiblemente se hayan radicado en la zona urbana de Villa Unión con el intento de insertarse en alguna actividad del sector secundario o de los servicios, como así también que el habitante urbano de la misma edad sea poco proclive a emigrar fuera de la zona. Esta interpretación indicaría la mayor crisis de la ocupación rural comparada con la urbana, y la situación particularmente crítica de la juventud urbana para ingresar en ocupaciones de su medio residencial. Congruente con ello, la transferencia de recursos humanos rurales a la zona urbana, prácticamente sin límite de edad -la cual habría continuado durante los años 80- ha sido con frecuencia mencionada por los informantes entrevistados. tal transferencia

También es destacable el hecho que de todas las zonas de la Provincia estudiadas en el trabajo citado, la región oeste es la que presenta el mayor porcentaje de emigrantes que contaban, antes de su emigración, con ocupación de carácter permanente (un 44%). Es cierto que dada la compleja trama de relaciones laborales que caracterizan al sector informal del empleo urbano, es difícil

reconocer, por medio de una encuesta como la realizada los límites reales entre un trabajo permanente y un trabajo transitorio. Pero con esta aclaración, es válido conjeturar que gran parte del importante porcentaje de emigrantes con ocupaciones previas permanentes corresponde a minifundistas los cuales, aún considerando la estacionalidad del trabajo en su propia finca y la muy baja productividad de su esfuerzo laboral, no por ello dejan de considerarse a sí mismos como estables productores rurales.

Por último, en cuanto al destino de la emigración originada en la región oeste, se deduce del mismo estudio citado que, comparada con otras zonas de La Rioja, aquella promueve en mayor proporción la migración dentro mismo de la Provincia. En efecto, un 44% de los emigrados de la zona en cuestión, contra un 16% correspondiente al total provincial, eligen como destino de su movimiento a otra localidad (generalmente la Capital) de la Provincia.

Emigración individual y emigración familiar

Según se trate predominantemente de una migración protagonizada por personas solas o por grupos familiares, el efecto sobre la estructura familiar de la zona será diferente. En el primer caso se observará una disgregación de los grupos domésticos, la reducción de su tamaño y una estructura incompleta de vínculos en el seno del grupo familiar. En el segundo caso, estas variaciones en la estructura familiar no se producirían en la medida en que las familias no migrantes mantendrían su composición, pero se observaría una reducción relativa de hogares.

Según el estudio citado el 80% de la emigración fue practicada por personas solas. Sin embargo, el método empleado para recoger la información (encuesta a hogares con miembros emigrados) supone un vicio sistemático en la selección de casos de emigración. Además, la preocupación del estudio parece estar centrada en la emigración fuera de la zona, y no tenemos seguridades de que se hayan tomado en cuenta los movimientos intrazonales e intradepartamentales, a los cuales atribuimos una importancia destacable. No podemos formular una hipótesis firme respecto a qué tipo de migración (familiar o individual) predomina en los traslados de corta distancia. Según algunos informantes son numerosos los grupos familiares de pequeñas localidades que se han concentrado en las localidades mayores. Según otros, la transformación de hijos de agricultores en trabajadores urbanos de éstas últimas conforman un caudal importante de migración individual.

Por otra parte, la estrategia emigratoria de un grupo familiar no necesariamente se ejecuta en un solo instante del ciclo vital de la familia. Con frecuencia, tal estrategia se desarrolla a lo largo de una prolongada onda temporal y asociada a los cambios vitales de aquella: es común que un primer hijo emigrado facilite la emigración de sus hermanos a medida que crecen y que el núcleo familiar de origen disgregado termine

Por lo tanto, toda indicación que tengamos a través de nuestros datos de emigraciones que involucren a todo el grupo familiar (por ejemplo, la cantidad de viviendas desocupadas) puede estar reflejando, tanto movimientos ejecutados por todo el grupo familiar en un momento del tiempo, o un largo proceso de disgregación de la familia en origen y recomposición -por supuesto con una estructura diferente- en el lugar de destino.

El tamaño medio de los hogares en la zona oeste disminuyó entre 1970 y 1980 (4,89 miembros por hogar censal a 4,77 en el último censo). Debe destacarse que tal disminución se produjo aún habiendo aumentado la natalidad en los últimos años de los 70, y consecuentemente, habiéndose elevado la proporción de población infantil, como antes fue indicado.

La disminución del tamaño medio de los hogares fue paralelo a lo experimentado por el total de la Provincia. Pero esta similitud puede esconder procesos diferentes. A nivel provincial, una cuota importante de responsabilidad en tal cambio puede deberse a transformaciones socioculturales en cuanto al "tamaño ideal" de la familia o a su composición en términos de vínculos (pasaje de la familia extensa a la nuclear, por ejemplo). En la zona, la magnitud del drenaje migratorio obliga a asignar a éste la explicación de por qué se ha reducido el tamaño familiar, a través del desgranamiento de sus miembros.

Resulta imposible, entonces, cuantificar -siquiera proporcionalmente- la emigración individual y la familiar. Como vimos al analizar las tasas de supervivencia, la mayor parte del movimiento migratorio corresponde a población joven, entre los 20 y 29 años. Aunque menor, tampoco es despreciable la magnitud de emigración de las edades inmediatamente inferiores. Con mucha probabilidad, una porción importante de estos dos grupos han migrado sin haber constituido su propia familia.

Como signos de que la emigración familiar es también un fenómeno significativo se destaca, como se recordará, que también muestran tasas de emigración -aunque más reducida- la población infantil, la cual difícilmente migre sin sus padres. La proporción de viviendas desocupadas es un indicador elocuente de que el drenaje afecta a muchos hogares completos. Por último, un indicador impreciso pero evidente de la emigración familiar es el que se construye computando el número de matrimonios celebrados durante la década del 70. Partiendo del supuesto -ciertamente relativo- de que un nuevo matrimonio conforma un nuevo hogar, la suma de los constituidos durante el período y los hogares existentes en 1970 alcanza a una cifra "teórica" de hogares en 1980(*). Pues bien, para el conjunto de la zona se habrían

(*) Los supuestos de esta afirmación son varios y discutibles: no necesariamente un hogar se constituye a partir de un matrimonio, entre otras razones por la posibilidad de uniones de hecho, los divorcios que puede implicar la división de hogares, etc. No necesariamente un matrimonio conforma un hogar en tanto puede//
(sigue pagina siguiente)

perdido un 26% de hogares, tal como muestra el cuadro Nro9, reflejándose el menor nivel de pérdidas en el departamento FV.

Las diferencias en el proceso migratorio entre los departamentos de la zona pueden sugerirse a partir de los siguientes datos: en cuanto al tamaño del grupo familiar, solo GLM aumenta, como vimos, en contradicción con el conjunto de la zona. Esto refuerza por vía indirecta el peso de la emigración sobre la estructura familiar, ya que fue justamente ese departamento en el que menos insidencia relativa tuvo aquel proceso.

Si retomamos nuestro análisis de las tasas de supervivencia hemos observado que en GLM y GS la emigración de adultos mayores de 30 años -incluidas mujeres- es mucho más significativo que en FV. Es fácil presumir que muchos de ellos eran jefes de hogar o cónyuges, lo cual estaría indicando, para los dos primeros departamentos, una importante corriente emigratoria compuesta por familias. Sintéticamente podríamos conjeturar que la emigración de GLM fue predominantemente familiar (**), en GS la individual y la familiar fueron igualmente intensas, y en FV predominó la individual, allí donde la estructura urbana logró retener a una población adulta con ocupaciones estables pero no pudo brindar ocupación a los jóvenes que intentaban ingresar al mercado laboral.

Distribución espacial de la población

Veamos, ahora, como afectaron estos movimientos poblacionales a la distribución espacial de la zona. Indudablemente, como muestra el cuadro Nro.1, se ha dado un proceso de concentración geográfica, aunque muy leve, que favoreció al departamento de FV. Ello no implica necesariamente que tal departamento haya ejercido realmente una función de atracción en el medio. Ya hemos insistido en la complejidad de los movimientos de población que no se transparentan fácilmente con la información secundaria. Las manifestaciones de los informantes han puesto en evidencia, sin duda, que esa atracción existió, especialmente hacia la localidad de Villa Unión, pero también se ha insistido sobre el drenaje de población que afectó a la misma localidad. De esta forma, el departamento en cuestión atrajo población originaria de otros

integrarse en un hogar preexistente. Supusimos que no se da desaparición de hogares por mortalidad de sus miembros pero ello es una posibilidad cierta aunque de menor magnitud que los valores de la mortalidad general referida a individuos. Sin embargo, y a pesar de las imperfecciones que los supuestos asumidos dan al indicador, la magnitud de su resultado es lo suficientemente importante como para reflejar la vigencia de un proceso cierto de emigración familiar.

(**) Recuérdese que este fue el único departamento donde aumentó el tamaño medio del hogar censal.

departamentos de la zona al mismo tiempo que expulsaba población propia, a un ritmo tal que aquella ganancia demográfica no lograba compensar sus propias pérdidas.

Como ya fue expresado más arriba, el departamento de GS, siendo el de más alta tasa emigratoria durante el periodo 1970 a 1980, bajó su participación demográfica en la zona: de contar con el 22% de la población zonal redujo su presencia a un 21%. No hace falta repetir nuestra hipótesis de que durante la década, la emigración -como comunicación social- alcanzó vigorosamente al extremo más aislado del sistema geográfico.

Pero más interesante es el análisis de la distribución de la población por localidades. Realmente la zona carece de una estructura urbana desarrollada. Ya sea que entendamos por ello la presencia de pueblos o ciudades con relativamente alta complejidad funcional, ya sea que la definamos en términos de la existencia de una red de centros complementarios e interdependientes, tal no es la particularidad de la zona. Más adelante anotaremos las cualidades de las formaciones urbanas

existentes en términos de infraestructura y funciones; baste ahora indicar que la de mayor tamaño -Villa Unión- alcanza solo a los 2356 habitantes (1980) y la segunda, 1351 (Guandacol). Solo una localidad más llega al umbral de los 1.000 habitantes (Vinchina), y con la excepción -como tal, relativa- de Villa Castelli (781 habitantes) las restantes (todas de menor tamaño) carecen de una forma de asentamiento de la población reconocible como urbana. En resumen, de las 17 localidades con más de 100 habitantes en el censo de 1980, una supera el límite convencional de los 2.000 pobladores, dos más se ubican por encima de los 1.000, tres están entre los 600 y 800 habitantes y 11 no alcanzan una población de 500.

El crecimiento intercensal 1970-80 ha sido sumamente heterogéneo (ver cuadro Nro.10). Tres localidades revelan un verdadero crecimiento demográfico: Villa Unión (32%), Guandacol (26%) y especialmente Vinchina con un incremento realmente sorprendente del 73%. Dos localidades más -Santa Clara y Aicuña- también aumentaron el número de sus habitantes, pero en una proporción más baja. Las restantes localidades disminuyeron su tamaño poblacional, algunas a ritmo suave o moderado (Villa Castelli, Los Palacios, Los Nacimientos, Potrero Grande), y otras con una intensidad de verdadero vaciamiento demográfico: El Horno, el Distrito Pueblo de GS, Valle Hermoso, Alto y Bajo Jaque, Pagancillo, etc. Exceptuando a las tres localidades mayores, entre las de menor tamaño no puede decirse que la intensidad del drenaje esté asociado al tamaño de la localidad. Solo puede afirmarse que aquel fue más acentuado en la mayoría de las localidades de GS que en las localidades pequeñas de FV (GLM solo cuenta con la localidad cabecera departamental).

Si consideramos el saldo migratorio durante el periodo, solo

dos localidades aparecen como beneficiarias (esto es, con crecimiento superior a la reproducción de sus propios habitantes): Villa Unión, con una atracción migratoria del 6%, y Vinchina con el 49% de ganancia demográfica por inmigración. Ciertamente, estos valores no son más que estimaciones discutibles. En la medida que la tasa migratoria de cada localidad está calculada en base al crecimiento vegetativo del departamento en su conjunto, estamos presuponiendo que tanto la natalidad como la mortalidad son homogéneas para todas las localidades y áreas rurales de aquel.

En realidad, ello no puede ser cierto. Es sabido que la composición de la población (por sexos y edades) varía entre las zonas rurales y urbanas. Si hemos afirmado que éstas han ejercido una atracción efectiva sobre su entorno rural, habrán incorporado una proporción relativamente mayor de población joven, con mayor capacidad reproductiva. De ser así, las localidades de Villa Unión y Vinchina habrían tenido una tasa de crecimiento vegetativo superior al resto de sus respectivos departamentos y, por lo tanto, su tasa de crecimiento inmigratorio habría sido menor a lo que indican los datos. En base a este argumento no sería difícil sostener que en el caso de Villa Unión, el incremento del 6% por "inmigración" indicado es, en realidad, solo expresión de una tasa de reproducción superior a lo calculado, y que, entonces, no hubo efectivamente un saldo migratorio positivo. Sin embargo, ello no desconoce el valor de atracción de la localidad, donde la inmigración y la emigración se compensan. Pero además, por medio de aquella atracción de población rural joven, puede "renovar" con mayor celeridad de lo que le posibilitarían sus recursos vegetativos, la porción de habitantes en edades procreativa e incrementar, así, su tasa de crecimiento vegetativo.

No tenemos dudas, en cambio, respecto a la importancia del proceso inmigratorio de la localidad de Vinchinas (departamento GS). Aún sosteniendo los mismos argumentos que para el caso de Villa Unión, el 49% de incremento migratorio estimado evidencia totalmente la presencia de inmigrantes. Además ello coincide con el hecho de que las localidades menores del departamento son las que sufren tasas más altas de emigración de toda la zona. También observamos, más arriba, que este departamento fue durante la década considerada el de mayores pérdidas de población. En consecuencia, este departamento ha experimentado durante el período un doble proceso con particular intensidad: el de expulsión de población fuera de sus límites, y el de concentración en la cabecera departamental. Como mínimo podríamos afirmar que la población involucrada en alguno de los dos procesos alcanzó a 1088 habitantes durante los 10 años (suponiendo que no haya habido entradas y salidas de migrantes en una misma localidad, lo cual elevaría aún más la cifra de personas móviles). Tal magnitud representa el 44% de la población existente en 1970. De los 1088 casos estimados de migrantes, el 28% circuló entre las localidades del interior del departamento y su cabecera, y el restante 72% emigro fuera de los límites departamentales.

En el caso de Guandacol, tercera localidad con crecimiento intercensal, el cálculo del saldo migratorio lleva a un valor cero: o sea que su ganancia demográfica se debió exclusivamente a factores vegetativos. Sin embargo, caben las mismas consideraciones hechas arriba sobre las diferencias en las tasas de natalidad y mortalidad entre zonas rurales y urbanas. Es posible que en Guandacol se haya producido una moderada emigración disimulada por una alta capacidad de reproducción de una población con predominio de las edades jóvenes. La importancia que tiene la actividad minera en sus cercanías (y que sobre todo tenía en 1980) se manifiesta en una cantidad considerable de trabajadores cuya magnitud no fue posible precisar en las entrevistas a informantes. La residencia de estos trabajadores y sus familias se localiza en Guandacol.

Algunos comentarios sobre la estructura y dinámica familiar

Como fue dicho, el intenso proceso emigratorio afecta sensiblemente la composición de los grupos familiares. Hemos observado para el conjunto de la zona una disminución en el tamaño medio de los hogares censales lo cual, teóricamente, puede responder a distintas causas. Una de ellas -típica de sociedades en procesos de modernización es la disminución de la natalidad de tal forma que se reduce el tamaño de la familia nuclear. Un segundo proceso es el tránsito desde la familia extensa, compuesta por miembros pertenecientes a más de dos generaciones y variados vínculos de parentesco, hacia la familia nuclear compuesta solo por padres e hijos. En este segundo caso, la disminución en el tamaño medio de las familias es concomitante al aumento en el número de hogares censales.

Un tercer determinante general es el desgranamiento de los núcleos familiares por emigración. Si bien el desgranamiento es un proceso propio del ciclo de vida de las familias, la emigración le otorga notas particulares: la salida de los hijos de la familia paterna se produce más anticipadamente, la composición interna del grupo presenta sistemas de roles desestructurados (por ejemplo, presencia de nietos con abuelos, en ausencia de padres) y la reducción en el tamaño de los grupos familiares no se acompaña con aumento de los hogares, sino con una disminución de los mismos.

Hemos observado que durante el período intercensal, la tasa de natalidad se incrementó notablemente. Ello descarta la primera causa indicada como explicación del achicamiento de las familias. Indudablemente, el intenso proceso emigratorio y la crisis de la economía campesina deben haber cuestionado la vigencia de la familia extensa. Pero ello no fue acompañado por un incremento de los hogares censales como podría ser el caso si la zona hubiera sufrido un proceso de modernización y nuclearización de la estructura familiar.

En realidad, la economía minifundista -como la definimos más adelante- no sustenta la vigencia de la familia extensa. Más bien, el bajo requerimiento en recursos humanos genera una dinámica de expulsión de miembros. Como veremos, el proceso de minifundización de la zona -y particularmente el deterioro del modo campesino de producción predominante en GS- debe haber cuestionado las bases de una estructura familiar de tipo extenso, llevando a la expulsión, no solo de hijos (no solo los menos aptos para la producción agrícola, sino prácticamente de todos ellos), sino también de otros miembros colaterales como hermanos, cuñados, tíos, etc. del jefe de hogar o titular de la finca. Pero dada la baja receptividad laboral de la zona, tal excedente demográfico de las familias no fijó su residencia en ésta sino que emigró fuera de sus límites. Esto, en consecuencia, habría generado un proceso de nuclearización de las familias, no por modernización de sus pautas de convivencia, sino por deterioro de sus bases económicas de subsistencia.

No obstante, el proceso no fue tan intenso como debería ser esperado debido a la escasez de viviendas. En efecto, a pesar del elevado número de viviendas desocupadas, el asinamiento familiar (presencia de más de un núcleo familiar en cada una de ellas) es elevado, particularmente en las zonas más urbanizadas. Marginalmente podemos anotar que la escasez de vivienda no deriva de la escasez de una oferta potencial sino de la rigidez del mercado habitacional: el abandono de la zona por parte de un grupo familiar (o de los herederos de los antiguos residentes) no motiva la venta del bien, quizá por la expectativa de retorno que alientan los emigrados o por el simple hecho de que las viviendas están generalmente asociadas a la explotación de un predio agrícola, cuyo mercado, en la zona, es particularmente engorroso por problemas de títulos.

Pero, si bien no tenemos información cuantitativa al respecto, un factor significativo en la reducción del tamaño de las familias, es la desestructuración de vínculos en el seno del grupo de convivencia. Ello se manifiesta de distintas formas: temprano abandono de adolescentes de la familia paterna, previo a cumplirse la etapa de desarrollo. Según los informantes -y en cierta forma lo corroboran los datos de emigración por edad y sexo antes analizados- ello afecta más a las mujeres que a los varones. En alguna medida, aquel abandono temprano está motivado por el ingreso a la educación media; en tal sentido, el último año ha significado un mejoramiento importante de tal situación si tenemos en cuenta la inauguración de escuelas secundarias en distintos distritos.

Otra manifestación de la desestructuración de los roles familiares es la emigración del jefe del hogar solamente, quedando en el lugar de residencia la cónyuge y los hijos. Ello implica dos procesos: la emigración estacional o golondrina de aquel, pauta que se habría intensificado desde el comienzo de la crisis viñatera, y la emigración anticipada del jefe de hogar hasta que su establecimiento en el lugar de destino posibilite la emigración del resto del grupo.

Por último, una manifestación elocuente de la desintegración familiar es la conformación de hogares compuestos por abuelos (u otros parientes sustitutos) y nietos. Tampoco tenemos información para evaluar la magnitud del fenómeno, pero un dato parcial da una idea del mismo: de los 23 alumnos de la escuela de Paso San Isidro (departamento FV), solo dos casos conviven con sus propios padres; el resto lo hacen con sus abuelos o en calidad de hijos de crianza. Ciertamente, es éste un caso extremo a decir del deterioro productivo que sufrió la localidad mencionada, mucho más intenso que el resto de la zona. Sin embargo, tipifica la tendencia a la que están sujetas las localidades y asentamientos más rurales.

En realidad, tal conformación familiar es consecuencia de la importancia estadística que reviste en la zona la maternidad en soltería. Ello ha sido insistentemente señalado por distintos informantes (médicos, sacerdotes, maestros) atribuible, por una parte, a la baja información en materia sexual y escasa difusión de prácticas anticonceptivas, y por la otra a la casi inexistencia de abortos (según lo estimado por profesionales de la salud). Una indicación cuantitativa indirecta de la importancia que tiene en la zona la figura de la madre soltera se refleja en la proporción de nacimientos ilegítimos (si bien también en ellos se incluyen hijos de parejas no formalizadas): un 45% promedio para los años 1982/83. Si se observa la evolución de tal porcentaje desde 1970, se concluye que el fenómeno mantiene un vigor constante. Considerando períodos trianuales, el porcentaje pasó de un 46% (1970/72) al 47% en trienio siguiente; bajó al 43% en 1976/78 y al 40% en 1979/81, para trepar nuevamente al 45% en 1982/83. Lo que sugieren estos datos es el impacto de la nupcialidad incrementada en los años 1973 a 1975 antes referida lo que contribuyó a una mayor legitimidad en los nacimientos entre 1976 y 1981. Por lo cual, el incremento de la natalidad registrado durante estos años se debió principalmente a las uniones legitimadas. Esta interpretación sugiere, también, que en términos absolutos los nacimientos ilegítimos se mantuvieron a un nivel prácticamente constante a lo largo de los 14 años considerados, y que el incremento de los servicios de educación, salud y parroquiales durante el período no han tenido una influencia significativa sobre la pauta de ilegitimidad en la procreación.

El crecimiento vegetativo y migratorio en los últimos años

Hasta ahora hemos acotado el análisis demográfico sobre al período que cierra en 1980, dado el valor de la información censal como marco de referencia para interpretar el comportamiento de las distintas variables de población. Aún cuando carecemos de tal referencia censal para los años posteriores a aquella fecha, vale la pena intentar una descripción de la dinámica demográfica más reciente.

Tal como puede apreciarse en el cuadro Nro. 11, la tasa de

natalidad dibuja una curva descendente entre 1980 y 1984, que por otra parte va en el mismo sentido que la tasa provincial (aunque el descenso de ésta es de menor intensidad). En realidad esta evolución no sorprende si tenemos en cuenta la aparente intensificación de la emigración durante los años más recientes y la ya anotada disminución en el número de matrimonios celebrados a partir de 1976. Por cierto que las variaciones en la tasa de nupcialidad están asociadas a la emigración: en la medida que ésta sea intensa entre los jóvenes se restarán casos de nuevos matrimonios en la zona. Pero también la nupcialidad parece ser sensible a otras condiciones de la sociedad: distribución del ingreso, mercado de trabajo dinámico especialmente para los jóvenes, difundida expectativa de progreso personal y de la sociedad en su conjunto, y cuestiones muy específicas como una oferta adecuada de viviendas son factores que influyen en la propensión de los jóvenes a formar nuevas familias. De ahí que la evolución señalada respecto a la tasa de nupcialidad de la zona sea bastante equivalente a zonas totalmente diferentes en el aspecto demográfico: por ejemplo, la Capital -con alto crecimiento inmigratorio- experimentó la misma caída de la nupcialidad a partir de 1976.

La tasa de mortalidad general marca un curso más errático a lo largo de los años 80: se incrementa en GLM, tiende a disminuir en GS y es ondulante en FV (cuadro Nro.12). En realidad, dada la crisis de la economía zonal en los años recientes -a decir de los informantes- y la presumible intensificación de la emigración, debería esperarse un ascenso en la tasa de mortalidad general, a no ser que durante el período se hubieran producido reducciones drásticas en la mortalidad infantil (por mejoramiento de condiciones sanitarias y atención médica de la zona, tema que abordaremos luego).

Como consecuencia de ambas variables, la tasa de crecimiento vegetativo entre 1980 y 1984 (ver cuadro Nro.13) marca una tendencia decreciente. Sin embargo, para el total del período resulta aún elevado, en especial para el caso de FV. Si suponemos que el proceso migratorio de la zona tiene la misma intensidad que durante los años 70 (algunos informante opinan, sin embargo, que aquella se intensificó durante la presente década), el crecimiento vegetativo de FV superaría su drenaje emigratorio. De esta forma, el departamento estaría experimentando un crecimiento absoluto de población (ver cuadro Nro. 13). Tal crecimiento sería, hasta 1984, del 2% . Los otros dos departamentos estarían perdiendo población aunque a una tasa moderada. Como resultado de esto, en 1984 la zona en su conjunto contaría con 10.930 habitantes, levemente superior a lo censado en 1980; el proceso de concentración en el departamento de FV indicado para los años 70, estaría todavía vigente, incluso con mayor intensidad. (*)

(*) La proyección de población indicada en el Anuario Estadístico de la Provincia de La Rioja (1983-1984) indica un proceso contrario, esto es el de disminución de población, aún en FV. La razón de tal disparidad reside en que la fuente citada, el

No obstante, el presumible crecimiento absoluto experimentado hasta el año indicado se resentiría en lo que resta de la década. Como vimos, la tasa de natalidad describe, ya, una curva descendente que compromete el crecimiento vegetativo futuro. Además, como mencionamos varias veces, la emigración sería actualmente mayor que en años pasados: no solo la prolongada crisis de la vitivinicultura, sino también la disminución de la actividad minera y el estancamiento de la construcción se constituyeron en factores de expulsión ineludibles, complementarios a la creciente demanda de mano de obra industrial en la Capital durante la presente década.

La tendencia observada para los años 70 de concentración de población en Villa Unión se habrá probablemente acentuado durante la presente década, entre otras razones por el incremento de la población dedicada a los servicios públicos y el empleo estatal. En consecuencia, se continuaría, en la segunda mitad de los 80 quizás con mayor intensidad, la doble tendencia al vaciamiento del conjunto de la zona y la concentración de su población cada vez más exigua en la principal localidad urbana.

crecimiento de población estimado se calcula como una extensión lineal de la tendencia registrada entre 1970 y 1980. En nuestro caso, en cambio, hemos tendido en cuenta el crecimiento vegetativo efectivamente ocurrido con posterioridad a 1980, suponiendo una tasa constante de emigración.

Cuadro Nro.1: Población, porcentaje de crecimiento intercensal y participación de cada departamento en el total demográfico de la Zona Oeste. 1970 y 1980

Departamentos	Población		% crecimiento 1970/80	% de participación	
	1970	1980		1970	1980
Gral. La Madrid	1110	1111	0,1	10,0	10,2
Felipe Varela	7478	7454	-0,3	67,6	68,8
Gral. Sarmiento	2468	2276	-7,8	22,3	21,0
Total Zona	11056	10841	-1,9	100,0	100,0

Fuente: Censos Nacionales de Población, 1970 y 1980.

Cuadro Nro.2: Crecimiento intercensal, crecimiento vegetativo y crecimiento vegetativo. Periodos 1960-70 y 1970-80

Departamentos	Crec. Intercensal		Crec. Vegetat.		Crec. Migratorio	
	60/70	70/80	60/70	70/80	60/70	70/80
Gral La Madrid	-16,9	0,1	14,0	25,6	-30,9	-25,5
Felipe Varela	-0,7	-0,3	18,2	25,9	-18,9	-26,3
Gral Sarmiento	4,7	-7,8	15,4	24,0	-10,7	-31,8
Total Zona	-1,5	-1,9	17,1	25,5	-18,6	-28,0
Provincia	6,6	20,5	19,7	27,3	-13,2	-7,1

Fuentes: Censo Nac. Pobl. 1980 y Diagnóstico de la Región Oeste

Cuadro Nro.3: Tasas de natalidad 1961 a 1980.Promedios quinquenales (o/oo)

Departamentos	1961/65	1966/70	1971/75	1976/80
Gral La Madrid	26,23	14,26	25,87	31,52
Felipe Varela	26,07	23,33	27,24	35,46
Gral Sarmiento	23,06	21,14	30,06	31,11
Total Zona	25,12	19,58	27,72	32,70
Provincia	29,53	25,34	30,01	35,03

Fuente: Diag.de la Región Oeste y Anuario Estadístico de la Provincia de La Rioja.

Cuadro Nro.4: Tasas de mortalidad general. Promedios quinquenales simples (en o/oo). 1961 1980.

Departamentos	1961/65	1966/70	1971/75	1976/77
Gral La Madrid	6,27	4,51	8,32	8,23
Felipe Varela	6,20	5,68	7,24	9,11
Gral Sarmiento	6,75	5,81	9,46	11,55
Total Zona	6,41	5,33	8,34	9,63
Provincia	8,20	8,29	8,00	7,66

Fuente: Diag. de la Región Oeste y Anuario Estadístico de La Provincia de La Rioja.

Cuadro Nro.5: Porcentaje de población menor a los 5 años y y mayor a los 64 años de edad. 1970 y 1980

Departamentos	0 a 4 años		65 y más años	
	1970	1980	1970	1980

Cuadro Nro.5: Porcentaje de población menor a los 5 años y
y mayor a los 64 años de edad. 1970 y 1980

Departamentos	0 a 4 años		65 y más años	
	1970	1980	1970	1980
Gral La Madrid	13,3	17,1		
Felipe Varela	14,1	16,3		
Gral Sarmiento	14,3	15,2		
Total Zona	14,1	16,1		

Fuente: CNP, 1980 y Diag. Región Oeste

Cuadro Nro.6: Porcentaje de mujeres de 15 a 44 años y tasas
de fecundidad (%). 1970 y 1980

Departamentos	Mujeres 15-44años		Incremento 1970/80 (%)	Tasa fecundidad	
	1970	1980		1970	1980
Gral La Madrid	16,0	17,8	15,7	15,8	15,0
Felipe Varela	17,9	18,5	6,0	15,6	17,1
Gral Sarmiento	18,0	17,9	-2,4	18,5	20,0
Total Zona	17,7	18,3	5,0	16,2	17,4

Fuente: C.N.P., 1970 y 1980. Anuario Estad. de la Prov. de La Rioja (elaboración propia)

Cuadro Nro.7: Tasas de nupcialidad, 1971 a 1980

Departamentos	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
Gral LaMadrid	7,1	4,4	7,1	9,8	10,7	12,5	9,8	8,1	4,5	5,4
Felipe Varela	3,8	5,4	6,5	6,5	9,5	10,0	7,2	10,3	6,3	6,3
Gral Sarmiento	7,8	3,7	4,2	9,2	8,9	5,1	10,3	8,6	3,0	2,6

Fuente: Anuario Estadístico de la Provincia de La Rioja.

Cuadro Nro.8: Tasas de emigración neta por cohortes de edad y sexos. (1970 a 1980)

Cohortes de edad(*)	Gral La Madrid		Felipe Varela		Gral Sarmiento	
	varones	mujeres	varones	mujeres	varones	mujeres
10 a 19	-32,7	-24,4	-17,6	-24,8	-10,6	-23,8
20 a 29	-46,6	-30,3	-53,0	-62,3	-55,1	-43,1
30 a 39	-36,6	-19,3	-16,6	-11,3	-34,6	-13,9
40 a 49	-27,1	-23,1	-9,0	-10,8	-38,1	-18,3

Fuente: C.N.F. 1970 y 1980 (elaboración propia)

Cuadro Nro.9: Total de matrimonios celebrados en 1970/80, estimación teórica y magnitud real de hogares en 1980 y comparación teórica y real.

Departamentos	Total hogares	Matrimonios 1971-1980	Hogares teóricos 1980	Hogares reales 1980	%teóricos/ reales
	1970				
Gral LaMadrid	232	98	330	228	-30,9
Felipe Varela	1506	539	2045	1537	-24,8
Gral Sarmiento	519	150	669	490	-26,8
Total Zona	2257	787	3044	2255	-25,9

Fuente: CNP 1970 y 1980 y Anuario Estad. de la Prov. de La Rioja

Cuadro Nro.10: Población por localidades en 1980, porcentaje de crecimiento intercensal y estimación del crecimiento migratorio 1970-80

Departamentos y localidades	Población 1980	crec.intercensal 1970-80 (%)	crec.migrat. 1970-80 (%)
GLM/ V.Castelli	781	-4,6	-30,2
resto	330	13,4	-12,5
FV/ Villa Unión	2356	31,7	5,8
Guandacol	1351	25,9	0
Pagancillo	739	-26,2	-52,1
Los Palacios	605	-8,4	-34,3
B. Florida	473	-15,1	-41,0
Sta.Clara	408	14,3	-11,6
Aicuña	189	15,2	-10,7
Los Nacimientos	189	-8,7	-34,6
resto	1144	-31,4	-57,3
GS/ Vinchina	1070	73,1	49,1
D.Pueblo	311	-32,4	-56,4
V.Hermoso	132	-34,0	-58,0
Potrero Gde.	115	-13,5	-37,5
El Horno	111	-58,1	-82,1
La Banda	108	-28,9	-52,9
Alto y Bajo Jague	429	-33,0	-57,0

Fuente: Diag. Región Oeste. Anuario Estadístico de la Provincia de La Rioja. (elaboración propia)

Cuadro Nro. 11: Tasa de natalidad, 1980 a 1984 (o/oo)

Departamentos	1980	1981	1982	1983	1984
Gral La Madrid	36.0	35.1	18.0	23.4	28.8
Felipe Varela	38.2	30.5	36.9	30.4	27.0
Gral Sarmiento	29.0	33.8	29.9	27.7	29.4
Total Zona	36.1	31.6	33.5	29.1	27.9
Provincia	33.2	31.0	30.8	29.4	28.5

Fuente: Anuario Estad. de la Prov. de La Rioja (elaboración propia)

Nota: la tasa del año 1984 fue calculada en base a nacimientos según lugar de ocurrencia, los restantes, según lugar de residencia de la madres.

Cuadro Nro12: Tasas de mortalidad general. 1980 a 1984

Departamentos	1980	1981	1982	1983	1984
Gral La Madrid	5.4	5.4	5.4	9.1	8.2
Felipe Varela	9.3	6.3	5.3	8.4	6.1
Gral Sarmiento	11.4	6.2	10.3	9.0	6.8
Total Zona					
Provincia	7.3	6.8	7.0	7.1	7.0

Fuente: Anuario Estad. de la Prov.de La Rioja.

Cuadro Nro.13: Tasa de crecimiento vegetativo 1980-84 y estimación de la población de 1984.

Departamentos	1980	1981	1982	1983	1984	Población 1984
Gral La Madrid						1105
Felipe Varela						7593
Gral Sarmiento						2232
Total Zona						10930
Provincia						177502

Fuente: Anuario Estad. Prov. de La Rioja (elaboración propia)

II. Aspectos sociales de la producción agrícola

La economía de la zona Oeste está basada fundamentalmente en la actividad agrícola. Tal es una afirmación, sin embargo, que ha tendido a desdibujarse en los últimos años al compás de una prolongada crisis en el sector y de la importancia que adquirieron los servicios sociales y comunales como formador del ingreso de la zona. Pero aún cuestionada en su dinamismo presente, el sector agropecuario sigue siendo el núcleo de su economía, y muy probablemente su recuperación, la solución más factible al acreciente subdesarrollo. En parte ello es así debido a la íntima y originaria relación de los pobladores con la tierra productiva, a pesar de que, como veremos, para muchos de ellos la producción agropecuaria a dejado de ser la principal fuente de ingreso.

Los rasgos económicos de la producción agropecuaria son suficientemente conocidos, lo que nos exime de un análisis detallado del mismo. Solo indicaremos algunos datos generales. La vid es el rubro principal de la misma. En 1982, el conjunto de la zona alcanzó una producción de 143.039 quintales de uva, equivalente al 17% de la producción provincial. El 88% de la misma se concentra en el departamento FV, siendo éste el segundo -después de Chilecito- en cuanto a magnitud de producción.

El volumen de producción presenta disparidades anuales, pero con excepción del trienio 1974/76 y el último año considerado, los promedios trienales se mantuvieron más o menos constantes en torno a los 110 mil quintales (ver cuadros 1 y 2). Ello contrasta con la evolución de la producción en el conjunto provincial que ha mostrado un incremento constante, de un 105% entre 1971 y 1982.

Las abruptas variaciones anuales dependen de distintos factores bien conocidos por los agricultores. El aspecto hídrico es uno de los más notables, determinados por los serios problemas en materia de captación y conducción de agua para riego y en materia de control de crecidas. El comportamiento de los precios es otra cuestión central: ello incide obviamente sobre la rentabilidad de las explotaciones y, consecuentemente, sobre la posibilidad o conveniencia de atender gastos de operación de los cultivos o inversiones en nuevas plantaciones. Inclusive sobre la posibilidad de efectuar la cosecha a tal punto que en algunos años la producción merma por tal motivo.

Sin embargo, el factor precio de mercado global no inhibió en la misma proporción a la capacidad productiva de las otras zonas vitíferas de la Provincia, a decir de la evolución de su producción. Ello hace suponer que existen mecanismos internos de formación de precios, específicos de la zona, que se agregan al efecto negativo de aquel. Por ejemplo, la presente campaña presenta un mejoramiento relativo de precios luego de casi una década de deterioro sistemático. Sin embargo, el proceso de comercialización se ve afectado por problemas de índole organizativo y financiero de uno de los dos principales

compradores de la zona, la cooperativa de Villa Unión, tal como veremos más adelante. Aunque la mayor parte de la uva se destina a vinificación en las bodegas instaladas en la zona, una porción variable es adquirida -especialmente a los pequeños productores- por compradores eventuales para consumo de mesa. Los precios en este caso suelen ser notablemente variables, con frecuencia deprimidos y afectados no solo por la intransparencia a la que está sometido el productor sino también, muchas veces, por la falta de garantía de cobro por sus operaciones comerciales.

Debido a este conjunto de factores, el rendimiento de los viñedos es variable año a año. A partir de un valor máximo y excepcional en 1972 (169 qq/ha.) el rendimiento marcó una curva de descenso, con altibajos; en 1980 era equivalente a 61 quintales, valor que aproximadamente se habría mantenido hasta el presente. Fueron los años 1980 y 1981 los de mayor crisis, a decir de los informantes, caracterizados por un verdadero éxodo de población de algunas localidades lo cual necesariamente debe haber provocado el punto de mayor desorganización social y productiva. Un dato parcial para el departamento FV, correspondiente a 1983, indica un rendimiento medio de 73 quintales por hectárea, lo cual no evidenciaría un cambio sustancial respecto a los valores históricos de los últimos 10 años.

Cabe destacar que la zona no es homogénea en relación a este aspecto. Los promedios de rendimiento de la vid durante los años 1971/77 fueron de 88 qq/ha en FV, de 62 qq en GLM y de 71 qq. en GS. Aún dentro del departamento con mayor producción (FV), existen diferencias notables entre localidades, siendo notoriamente más favorable en el caso de Guandacol debido a la mejor calidad del agua que en las restantes.

El cultivo de la vid adquirió su papel de principal rubro productivo del sector agrícola solo durante los últimos 20 años. Ello se ve reflejado en la evolución de la superficie cultivada: en 1965 contaba con 702 has. de viñedos que 6 años después se habían duplicado (1371 has.). A partir de entonces, el crecimiento se modera hasta alcanzar a las 1828 has. en 1980. Actualmente la extensión sería similar a la de este último año; sin embargo, se ha intensificado el fenómeno de viñedos abandonados, muchos de ellos definitivamente perdidos.

El segundo producto agrícola de la zona es la alfalfa. Es éste un rubro más tradicional en su economía primaria determinada por la función de pastoreo de ganado en tránsito que ejerció durante el siglo pasado y parte del actual. Los alfalfares se extendían entonces a la totalidad de la zona pero actualmente se han recludo prácticamente en el departamento de GS. Su destino principal es la producción de fardos y pastoreo aunque una porción menor se orienta a la producción de semillas pero con bajos rendimientos por inadecuados manejo del cultivo y variedad empleada. En relación a ello el plan alfalfa de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Provincia promueve la transformación de la zona en centro productor de la misma, siendo uno de los principales obstáculos, según informantes, la

fortaleza que conservan las pautas tradicionales de manejo del cultivo.

En 1974 fueron censadas unas 1116 has de alfalfa, lo que cubría el 30% de la superficie cultivada de la zona. En el mismo momento, la vid representaba el 45% con 1650 has. Actualmente la producción alfalfera se encuentra en niveles muy inferiores a los consignados. No contamos con información completa, pero un informante consigna la existencia de una 350 has. de alfalfa en el departamento de GS, contra las 882 relevadas por el Censo Nacional Agropecuario de 1974. Ello representa una reducción del 60% el cual debe haber sido mayor si consideráramos a la totalidad de la zona oeste.

Otros cultivos con cierta extensión en la zona son los cereales: cebada, trigo y maíz, en orden de importancia, cubriendo entre los tres un 20% de la superficie cultivada. El departamento GS concentra casi el 50% de estos cultivos. El maíz carece prácticamente de valor comercial y solo es empleado para autoconsumo. El trigo y la cebada, en cambio, participan de ambos sistemas económicos, e inclusive se habría extendido la comercialización del primero por reducción de su elaboración para consumo propio. En efecto, el cierre de molinos harineros artesanales orientó los productos a su venta, la cual, entre los productores chicos, se inscribe en los mecanismos del trueque.

Existe una cierta variedad de frutales, pero con excepción del nogal, solo se explota marginalmente. Aquel es casi privativo de Aicuña (departamento FV) la cual cuenta con 60 has. (*) de implantación repartida en pequeñas fracciones. Una superficie semejante corresponde al olivo que se concentra en el área de influencia de Villa Unión. Los restantes frutales (higo, durazno, membrillo) existen solo como complemento marginal de las pequeñas fincas. El durazno se destina prácticamente en su totalidad al autoconsumo. Los higuerales que, sin ningún tipo de cuidado, están implantados a lo largo de las acequias de algunos productores (especialmente en Guandacol) son explotados para la elaboración de fruta seca que en las últimas campañas tuvo precios alentadores y evidenciaron buenas perspectivas de mercado. Respecto al membrillo existe actualmente una sola planta elaboradora de dulces que se abastece con producción propia, alcanzando el último año una producción de 2.500 kg. que se comercializó en la capital de la Provincia.

Una porción importante de la economía primaria de la zona se inscribe en el ciclo recolector. Distintos productos silvestres han visto crecer su demanda y explotación en los últimos años: la cachina, fundamentalmente empleada para la fabricación de escobas y de aglomerados, la retama cuyo aceite se emplea en la

(*) Suponiendo la comparabilidad de los datos, tal extensión del nogal representaría un incremento del 50% respecto a la superficie relevada por el Censo agropecuario de 1974. elaboración de ceras, y una cierta variedad de yerbas medicinales de montaña. Como veremos, la actividad recolectora ha venido a

resguardar del desempleo (y la emigración) a muchos pobladores de pequeñas localidades. Pero hasta el momento no se han aprovechado sus posibilidades agroindustriales. Solo en el caso de la retama se desarrolla en la zona una primera etapa de elaboración. En el caso de las yerbas medicinales solo se procede al corte o picado y secado, sin mayor clasificación y fraccionamiento.

En cuanto a la comercialización de tales productos es de suponer que el sistema actual no beneficia primariamente a los recolectores. En la zona existen dos o tres acopiadores de cachina que pagan a los recolectores por cantidad entregada carentes absolutamente de información respecto al precio del producto en el mercado extrazona. Lo mismo ocurre con las yerbas medicinales. Al respecto, el oligopsomio existente en la zona es difícil de quebrar por parte de los cosecheros: intentos hechos de venta directa al principal comprador nacional chocaron, aparentemente, con la existencia de "representantes" de la empresa que controlan la comercialización en la zona.

La horticultura está presente con frecuencia dada su función de autoconsumo. Por tal razón, ya en 1974 su expresión en superficie era mínima para el conjunto de la zona: solo 18 has. censadas. No tenemos argumentos para sostener que actualmente sea mayor, sino más bien todo lo contrario. En realidad, la producción hortícola se enfrenta a los límites que le imponen las condiciones técnicas de producción. La principal de ellas es el turnado del riego que, dada su excesiva periodicidad, impide mantener el tenor de humedad adecuado a los cultivos. Solo una suficiente reserva de agua ha permitido, por ejemplo, a la Granja agrotécnica de la Provincia lograr una producción tomatera interesante.

Por último, cabe destacar la producción pecuaria de la zona. Como fue dicho, es ésta una actividad tradicional especialmente en el departamento GS. En realidad, en las épocas de mayor prosperidad de la zona, sus productores eran más de tipo ganadero que agricultores. Sin embargo, se trataba de una ganadería principalmente de invernada, con manejo temporario de los rodeos. La interrupción del tráfico con Chile obligó a una modificación en este aspecto, debiéndose reconvertir la actividad en una ganadería de cría. Ciertamente son varias las décadas de esta variante productiva, pero en ningún momento llegó a ser una actividad floreciente, siendo siempre una actividad marginal.

Actualmente, el stock ganadero de la zona se expresa en los siguientes datos: 4715 vacunos (de los cuales el 54% se localiza en el departamento GS), 17919 ovinos (59% en GS), 28800 caprinos (54% ubicado en el departamento más sureño de FV), y solo 265 porcinos, una actividad prácticamente inexistente que solo compromete a 68 fincas (apenas un 4% del total de explotaciones)(*).

Para las cuatro especies indicadas, estos guarismo expresan el retroceso ganadero de la zona oeste: para el ganado bovino, la

(*) Datos del Censo Nacional Ganadero de 1983.

disminución de las existencias alcanzó al 33% entre 1977 y 1983. Entre los ovinos la reducción fue del 16%, y para los porcinos, el 38%. El ganado caprino fue el menos afectado por este proceso: solo una disminución del 2%. La misma expresión de deterioro se observa respecto a los animales de trabajo: en 1983 la zona contaba con 828 yeguarizos y 1414 mulares y asnales, una magnitud inferior a la de 1977 en un 33 y un 25%, respectivamente. Esto último no ha sido, con toda evidencia, resultado de una mecanización de las actividades agrícolas, la cual prácticamente no se ha operado.

El proceso de reducción del ganado vacuno se explica por la intensificación del faenamiento en la zona. Por ejemplo, la cantidad de cabezas faenadas entre 1973 y 1974 fue de 351, contra 646 correspondiente a los años 1976 y 1977 (Datos consignados en el Diagnóstico de la Región Oeste). En 1982 se operó un salto notable en la actividad: de 53.000 kg. de faenamiento en 1980, se ascendió a 77.500 en 1981 y a 233.000 en 1982 (datos del Anuario Estadístico de la Provincia de La Rioja). Aún más, este último año la composición por tipo de animal varió significativamente, ya que del total de la faena, el 38% correspondió a vacas, comprometiéndose de este modo la misma actividad de cría.

Estos datos parece corroborar las manifestaciones de los informantes en relación a la liquidación de la ganadería de la zona. Indudablemente, la emigración de productores ganaderos a obligado a la venta masiva de sus rodeos. De esta forma, en la actualidad, la producción de la zona no es suficiente para el abastecimiento de carne.

No contamos con información para analizar la integración entre la actividad agrícola y ganadera. En principio, los productores alfareros de GS cuentan con rodeos de vacunos y su actividad agrícola no se limita a las pasturas sino también realizan trigo o cebada. Pero en los departamentos vitíferos la situación es más compleja. Los productores medianos y especialmente los grandes, suelen diversificar con algo de ganadería mayor, pero el amplio sector minifundista carece de ganado bovino, aunque en muchos casos cuenta con un pequeño rodeo de caprinos. En cierta forma es difícil establecer la categoría de productor ganadero o agricultor en el minifundio, o en otros términos, delimitar la extensión de cultivo o el tamaño del rodeo en función del cual un minifundista se considera a si mismo (o puede ser considerado) de una u otra clase. De hecho, como veremos, estas son actividades que se combinan en una estrategia de producción dinámica según la cual se enfatiza una u otra en función de las oportunidades que brinde. El buen precio de la uva, por ejemplo, desvía la atención prestada al ganado ovino o caprino, o como ocurre actualmente en pueblos de montaña, la demanda de yerbas medicinales y su buen precio relativo ha determinado una disminución de la producción caprina. También la magnitud de recursos humanos familiares condiciona el énfasis del productor en una u otra actividad; en última instancia, el viñedo, bien o mal explotado, sigue ofreciendo algún ingreso al productor envejecido y sin familiares jóvenes en su grupo doméstico, por lo que se verá obligado a

disminuir el tamaño de su rebaño. De cualquier forma, el ganado menor no puede excluirse totalmente del pequeño productor en tanto la carne constituye la base de su dieta alimentaria. Por ello, existiendo posibilidades de manejo de los rebaños estos serán mantenidos aunque sean mínimos y no ofrezcan ingresos monetarios.

La cuestión del minifundio

Desde el punto de vista social, el problema más evidente de la producción agropecuaria es el del minifundio. Es esta una cuestión central para la economía de la zona y a cuya consideración se retorna continuamente cuando se pretende encontrar soluciones de desarrollo o cuando se inicia una conversación con informantes, cualquiera sea su relación con la producción agrícola. Por lo tanto ya resulta un lugar común indicar que el tamaño medio de las explotaciones agrícolas de la zona es de 1,5 ha., que el departamento FV figura entre los 5 departamentos de la Provincia más afectados por el fenómeno, que el 93% de las parcelas no superan la superficie de 4 has. y que el 70% tiene una extensión de 1 ha. o menos de superficie agrícola.

Para el caso de los viñedos, información correspondiente al año 1980 es demostrativa del problema: el 63% de los mismos contaban con 1/2 ha. o menos y el 82% con no más de 1 ha. Por encima de las 5 has. de viñas solo se registró el 4% de las parcelas. Pero quizá más impactante en términos de la problemática social sean los números absolutos que tales porcentajes representan: existe un total de 1022 viñedos con menos de 1/2 ha. y las explotaciones que pueden ser consideradas grandes -de más de 15 has.- suman solo 32 casos.

Ciertamente estos datos exageran la gravedad del problema. Por una parte, es posible que más de un viñedo pertenezca a un mismo productor ya sea en carácter de titular o propietario de los mismos, ya sea como arrendatario o mediero. En contraposición a ello, también es cierto que viñedos de mayor tamaño (los hay incluso de 5 has.) son explotados por más de una familia de herederos.

Además, los datos consignados arriba se refieren solo a la porción de viñas de una explotación sin computar los restantes cultivos. Así, por ejemplo, en dos distritos de riego de GLM (Monte y Parecitas) los únicos 3 regantes con vides registran una extensión de las mismas de 1 ha., 0,6800 y 0,1500 ha. pero en un solo caso la finca tiene a tal como único cultivo. Así, las superficies cultivadas totales son: 2,1000, 0,6800 y 17,8250 has. respectivamente.

Con todo el problema no pierde gravedad con estas salvedades, especialmente en el departamento de FV donde la vid constituye ciertamente un monocultivo para muchos productores. Para tomar un solo ejemplo típico, en el distrito Los Palacios del mismo departamento existen, según informante, unos 85 productores; el

67% no sobrepasa 1/2 ha. de cultivo, el 20% cuenta con una superficie de 1/2 a 1 ha., unos 7 u 8 productores tienen entre 1 y 5 has. y otros 3, más de 5. La similitud de estos datos con los registros censales, dan cierto aval a éstos. En el distrito de Villa Unión, en cambio predominan explotaciones levemente más grandes: cercanas a la hectárea y media.

Se menciona a menudo la situación más ventajosa del departamento de GS en relación a la distribución de la tierra. En efecto, en 1974 el tamaño medio de las explotaciones censadas alcanzaba a 3,6 has., uno de los valores más altos de la Provincia (cuyo promedio era de 1,6 has.). Sin embargo, si tenemos en cuenta el tipo de producción el carácter minifundista de las explotaciones no es menor que en los otros departamentos. En efecto, el ingreso bruto de la producción de fardos -con buena conducción del cultivo- se estima en 320 australes por hectárea. En el caso de la vid -aunque la cuenta de gastos es superior- podría calcularse en 800 australes si se supone un rendimiento de 10 toneladas por ha.

En el departamento de GLM se repite un panorama semejante. Según un informante existen unos 120 productores agrícolas en el departamento, pero solo 5 ó 6 pueden ser considerados grandes en términos relativos, con extensiones de 32, 20, 15, 10 y 5 has., respectivamente. En este departamento se observa, sin embargo, una mayor diversificación productiva en los límites estrechos de los recursos; así, algunos productores combinan la vid con alfalfa, trigo, cebada. La información ya referida a los distritos del Monte y Parecitas relativizan bastante, sin embargo, esta apreciación. De los 35 productores que consignan superficies cultivadas, 27 son monocultivadores de alfalfa y en superficies promedio de 5 has. cada uno, el cual sería sensiblemente menor si descontáramos a dos productores con 17 y 11 has. respectivamente.

El minifundio agrícola y ganadero, por lo tanto, es un rasgo dominante de la zona. Su solución aparece en el horizonte programático posible como una prioridad condicionante de otras acciones de desarrollo. Sin embargo, en su naturaleza presenta distintos aspectos que, aunque mutuamente relacionados, pueden ser tratadas, en cierta forma, de manera independiente. Consecuentemente, también independientemente pueden ser encaradas las acciones que le den solución.

1) Un punto de vista obvio en el análisis del minifundio refiere a su capacidad productiva y de generación de ingresos. Ello está primariamente determinado por la magnitud de los recursos productivos de las explotaciones. Ya indicamos la exiguidad del recursos tierra agrícola expresada con el valor promedio de 1,5 ha por explotación. En realidad no hemos encontrado la información suficiente como para clasificar el problema en términos de minifundio de tierra y minifundio de agua. Los datos sobre extensión de los predios no son explícitos en este sentido. Una fuente indica para el conjunto de la zona un total de 9000 has disponibles de tierra cultivable (Servicio Integrado de Extensión: "Bosquejo del Estado Actual y Perspectivas

de la Zona IV"). Mucho mayor que aquella cifra, el censo ganadero de 1983 releva un total de 3900 ha que se estiman cultivadas actualmente (*), y restarían unas 28000 has aptas no utilizadas.

Estos datos sugieren, en primer lugar, la posibilidad que ofrece la zona para ampliar su sector agrícola. Ello podría ser ámbito de colonización -frecuentemente señalado como solución por funcionarios, técnicos y agricultores- protagonizada por actuales productores minifundistas o por agricultores, externos a la zona. Pero lo que no está dilucidado es la magnitud de tierra cultivable y no utilizada por falta de agua en las fincas actuales. El dato de un agricultor mediano es indicativo de la cuestión: cuenta con 6 ha de viña, pero superficie apta de 10 ha que no puede emplear por riego insuficiente. Casos semejante -en toda la escala de tamaño de los predios- deben ser numerosos si tenemos en cuenta la insistencia de reclamos por una mejor distribución de riego y un mejoramiento de las obras de captación y conducción.

Suponemos que la relación entre minifundio de tierra y minifundio de agua debe ser variable según localidades y en función de la escala de tamaño. En la proximidad de las zonas urbanas el problema del minifundio se centrará en el primer término debido al mayor efecto de la subdivisión hereditaria durante varias generaciones (**), mientras en zonas más rurales la exiguidad del riego puede constituir el problema principal.

Otra cuestión que hace al factor tierra refiere a la dispersión de lotes en manos de un mismo productor. Hemos indicado ya que el cómputo real de parcelas por agricultor puede brindar una imagen algo más moderada de la gravedad del minifundio. Por ejemplo, en los distritos antes referidos de Monte y Parecitas, para los 55 lotes consignados existen 37 titulares, 27 de los cuales cuentan con un solo lote y los restantes diez poseen entre 2 y 8 lotes, algunos de los cuales ubicados en distritos diferentes.) La falta de integración de la explotación que ello supone acarrea dificultades obvias al manejo de los cultivos.

La limitación de estos recursos productivos condiciona, indudablemente, la estrategia productiva del agricultor. Por empezar, ello limita la diversificación de cultivos. Aún más, la proporción que representan los cultivos permanentes en relación

(*) En 1974 se relevó menos que ello: 3705 ha. Si consideramos el deterioro de la producción agrícola desde entonces podemos suponer que aquella cifra estimada para la actualidad es excesiva.

(**) El valor creciente de la tierra urbana a medida que la población se concentra en la localidad, no sólo eleva su precio de mercado sino el "valor de uso" para lo herederos de un predio urbanizado. De ahí que la probabilidad de renuncia de la herencia en favor de un solo heredero o los arreglos de venta de partes alícuotas sea menor que en fincas más alejadas.

al total de cultivos (un 79% de la superficie cultivada en 1974) restringe la flexibilidad adaptativa del productor a las variaciones del mercado. La inamovilidad de la vid o el nogal influye en el quietismo productivo del minifundista, entendiendo por tal a la carencia de una orientación de búsqueda dinámica de alternativas. Así, un viñedo se constituye, en la conciencia del productor, no tanto en un producto sino en un recurso dado (muchas veces dado por las generaciones anteriores) que cada año produce más o menos según las condiciones climáticas, las posibilidades con que cuenta para su conducción (recursos humanos y financieros), etc.

Dada la limitación de su estrategia productiva, la inmovilidad del viñedo es, indudablemente, la alternativa más coherente para el minifundista. En el cálculo del costo de oportunidad para su mantenimiento o reemplazo que implícitamente efectúa, intervienen prioritariamente otros factores distintos a la rentabilidad: específicamente el magro ingreso que por lo menos le reportará, el riesgo de rendimientos y comercialización de otros cultivos anuales alternativos y, sobretodo, el factor tiempo incorporado al mismo viñedo; el fracaso de un intento innovativo trae aparejado los varios años que requerirá para poner nuevamente en producción el viñedo. De ahí que levantar éste para modificar su esquema productivo sea visualizado como una destrucción del recurso dado. Pero esta misma conciencia atenaza la inversión innovativa que no sea encarada sobre la misma viña. Un ejemplo de esto se ve reflejado en la resistencia a reconvertir viñedos en alfalfa para semilla como se propone en el plan mencionado.

Como indica un informante, aún en las malas épocas el viñedo se conserva porque año a año se mantiene una expectativa de mejora del precio. De hecho la interpretación que hace el productor de la evolución económica del cultivo parte de un esquema cíclico. Sabe, o supone que después de un período crítico la bonanza económica recompensa su permanencia en la viña. Pensamos, sin embargo, que existe un umbral a partir del cual esta pauta de permanencia se quiebra; este umbral está dado por una combinación de variables: la duración e intensidad de la crisis, la posibilidad de obtener ingresos alternativos a la agricultura, la presión que ejercen los mercados ocupacionales extrazonales, el grado alcanzado en la subdivisión de la tierra. A partir de tal umbral la ruptura se manifiesta con la emigración y el abandono del viñedo. Dado el descalabro productivo y demográfico que significaron los últimos diez años para la zona, parece evidente que tal umbral fue superado por muchos viñateros.

La dimensión principal del problema del minifundio es, entonces, la exiguidad del ingreso que aporta al productor. Desde este punto de vista, el minifundista se diferencia del campesino; o en otros términos, la economía minifundiaria se distingue cualitativamente de la economía campesina. Es sabido que la cuota de ingreso del campesino se basa en la explotación del trabajo familiar. En el cálculo de beneficios aquel no computa la remuneración del trabajo propio y del grupo doméstico

como gasto de producción ni como salario o ingreso familiar. De ahí que, en términos económicos, la rentabilidad de la explotación campesina suele estar por debajo del umbral de rentabilidad social. Pero aún así, el ingreso que le provee la actividad agrícola le resulta, en promedio, suficiente para la reproducción de su propio grupo doméstico, base esencial de su economía.

Para la economía del minifundio, en cambio, el beneficio agrícola es insuficiente para la propia reproducción y funciona solo como un ingreso más o menos marginal o complementario a otras remuneraciones o beneficios económicos. Así, en tanto para el campesino la principal preocupación económica se ordena en torno a la producción de la finca, para el minifundista se define por la obtención de otras fuentes de ingreso.

El comportamiento frente a crisis coyunturales difiere en uno y otro. El campesino intensificará el trabajo agrícola vía mayor explotación del grupo doméstico, restringirá sus posibilidades de consumo (inclusive alimentario) o realizará el capital acumulado en forma de ganado, por ejemplo. Solo el extremo en la intensidad de la crisis lo llevará al abandono de la explotación y a la emigración. Para el minifundista, la crisis de su producto principal solo significará un más o un menos para su habitual composición del ingreso: lo obligará a incrementar la búsqueda de trabajo, para sí mismo o para los miembros del grupo doméstico, dado que espera menos beneficios de su explotación, pero tal estrategia no contradice las bases de su economía. El hecho de abandonar la explotación no estará dado tanto por los ingresos que ésta le reporta como por la imposibilidad de encontrar trabajo en su zona de residencia.

Por último, un campesino es un tipo social estable que refleja un modo de producción con pautas de comportamiento constantes. Un campesino no deja de ser tal con las variaciones en el precio de sus productos, por ejemplo. Un minifundista, en cambio, es más una categoría social inmerso en un modo de producción económica más amplio que lo abarca como sector marginal, y su carácter de minifundista o no depende, en ciertos límites, ya sea de la situación económica por la que atraviesan sus productos agropecuarios, ya sea de las posibilidades de insertarse de manera estable en un empleo u ocupación remunerada. Respecto a lo primero, una crisis en el precio de la producción transforma en minifundista a aquellos que no lo eran en años previos; respecto a lo segundo, convierte en asalariado permanente, por ejemplo, al que socialmente podía ser calificado como minifundista, aún cuando siga teniendo su explotación, mas como residencia que como unidad productiva.

La crisis de la vid en la zona Oeste trajo aparejada un proceso del primer tipo: esto es, una minifundización no por efecto de la subdivisión de la tierra (aunque ello también existió), sino por efecto de la reducción del precio de la uva (unido a otros factores de índole climático en algunos momentos del período). De ello dan cuenta algunos informantes cuando

añoran la capacidad de consumo que otorgaba 10 ó 12 años atrás una pequeña fracción de viña: se considera que entonces, media hectárea de vid rendía un ingreso suficiente para el mantenimiento de una familia. Actualmente, la situación se ha revertido totalmente: dadas las condiciones de producción de la vid, la producción promedio de una hectárea de uva (6000 kg.) rinde un ingreso bruto de 480 australes, suponiendo el mejor precio pagado en la zona y considerando que este precio es bastante mejor al obtenido en las campañas anteriores. Como informa un productor a partir de su propia experiencia, a principio de los años 70, un agricultor con 5 has. de vid, tenía auto y hasta podía enviar por lo menos a un hijo a estudiar a la Universidad de Córdoba. Hoy en día, con las mismas dimensiones de la finca, debe buscar fuentes de ingreso alternativas, especialmente en el empleo público.

Dada la labilidad del tipo minifundista es difícil definir qué tamaños de explotación deben ser consideradas como tales. Indudablemente no todos los productores, como el anterior, que debieron diversificar sus ingresos fuera del sistema agropecuario podrán ser considerado dentro de tal categoría. Pero también es cierto que la definición de minifundio en términos de ingresos económicos se ha desplazado hacia arriba abarcando finqueros o sus hijos que fueron sustraídos de la exclusiva explotación de la finca. Veremos luego cómo ello ha determinado no solo la emigración sino también la urbanización (o terciarización) de la estructura ocupacional. Baste por ahora afirmar que la prolongación de la crisis ha cuestionado el rol de agricultor, cuya reconstrucción deberá enfrentar, no solo la recomposición de producción agropecuaria sino también el cambio en la orientación laboral de una importante fracción de la población.

Es difícil establecer si el tipo social de campesino como anteriormente fue definido existió realmente en la zona hasta época reciente. Hay más seguridad de ello cuanto más alejado de la urbanización y del mercado de ocupaciones asalariadas rurales: por ejemplo, los departamentos de GS y GLM y algunas comunidades relativamente autosuficientes como Aicuña en FV habrían albergado una economía más típicamente campesina que en zonas como la de Villa Unión o Guandacol donde la estructura agraria más compleja generaba un mercado de ocupaciones asalariadas, permanentes y transitorias, más dinámico.

Lo cierto es que la intensidad de la crisis del sector agrario ha cuestionado también a la economía campesina. Menos, ciertamente, en Aicuña ya que la producción nogalera gozó de precios relativamente estables; coincidente con ello, fue esta localidad, entre los centros menores de la zona, la menos afectada por la emigración, como se vió anteriormente. Si consideramos a la zona alfalfera de GS como más próxima al tipo campesino, resulta congruente el comportamiento que asumieron los productores más afectados. En éstos se produjo una desvinculación total respecto a la explotación. En el caso de los minifundistas viñateros la emigración no los desvincula totalmente de su viñedo, ya que tendieron a establecer relaciones de explotación a

cargo de un vecino o pariente que quedó en la zona. En última instancia, para el minifundista, el radio de la emigración no modifica sustancialmente, en el marco de su estrategia adaptativa, su relación con la finca: está habituado a dedicarle mayor o menor trabajo propio, con un compromiso agrícola variable, y su emigración al exterior de la zona no anula su conciencia o ilusión del retorno.

En el caso de los campesinos, la emigración resulta una experiencia más traumática en el sentido que equivale a una reversión total de su estrategia de vida. La intermitencia laboral en la finca no es su hábito; la vida campesina se liquida de manera drástica con la emigración, de ahí que se decida por el abandono total de la finca, la cual pierde sus cercados, sus pasturas y se integra al campo inexplorado. Tal es el paisaje que ofrece el despoblamiento agrícola en el departamento GS.

2) Un segundo punto de vista en el análisis del minifundio refiere a los problemas de la titularidad de las explotaciones. La gravedad de este problema ha sido reiteradamente afirmado en informes técnicos, no solo en relación a la zona Oeste, sino a varias regiones de la Provincia. Por lo demás, es una cuestión muy viva en la conciencia de los pobladores.

La evaluación de su gravedad admite distintos aspectos. Por una parte, se la califica en función de los obstáculos que ocasiona al proceso de producción: específicamente, el punto central es la imposibilidad de integrar la porción agraria afectada por el problema a la dinámica financiera de la economía. La imposibilidad de acceder a créditos bancarios es ya un argumento antiguo para caracterizar sus consecuencias, aunque en los últimos 10 años otras condiciones del financiamiento hayan ampliado tal imposibilidad a la totalidad del sector agropecuario. Como argumento perdió, en la coyuntura, su actualidad, a no ser que se propongan créditos verdaderamente promocionales desde el estado, pero para ello, el mismo estado, quizá, puede instituir instrumentos y condiciones de préstamos que obvien la situación de títulos no saneados.

No es seguro que la falta de saneamiento en los títulos de las fincas minifundistas inhiba la inversión productiva. En realidad los vifedos fueron implantados -y siguen siendolo- en tierras que adolecen de este problema. Ello es así por cuanto para el productor la titularidad de la tierra, en muchos casos, no está socialmente cuestionada. No quiere esto decir que no se planteen conflictos por la propiedad de un mismo predio, como da constancia el estudio encarado por el IMTI, pero suponemos que en la mayoría de los casos -y particularmente cuando se trata de pequeñas parcelas- aquellos no existen. El hecho de que la falta de títulos saneados derive generalmente de la transmisión hereditaria -y de las ventas precarias de herederos a terceras personas-, y no de procesos de ocupación espontánea, limita las posibilidades de cuestionamiento del derecho de posesión de sus ocupantes. Además, tal derecho está asentado, más que en la propiedad -comprobable o no- de la tierra, sobre el derecho de

riego del que goza el ocupante, verdadera medida del valor productivo de la finca. Eventualmente, una ampliación de la superficie de riego de las fincas actuales puede multiplicar los conflictos de posesión; pero ciertamente desconocemos en qué medida existe una clara demarcación de predios sin regadío actualmente o en qué medida existen superposiciones de parcelas pretendidas por distintos productores.

Un segundo enfoque para caracterizar la gravedad del problema refiere a las dificultades y costos del proceso mismo de saneamiento. En realidad el costo del trámite sucesorio es el condicionante principal de la situación actual. Pero la acumulación de sucesiones, compras precarias, documentos perdidos, etc. tornan engorroso y aún mas costoso el proceso de regularización de los títulos.

Pero desde otra perspectiva, la gravedad del problema se manifiesta en los obstáculos que significa para una dinamización del mercado de tierras. Cualquier intento de recomposición del minifundio en unidades económicas -ya sea tal intento orientado a estimular procesos espontáneos, ya sea regido por parámetros más compulsivos- choca ante la pérdida de valor económico que significa la falta de títulos saneados. De hecho, según informantes, existen frecuentes ofertas de fincas para la venta al mismo tiempo que se registra interés por parte de compradores. Pero en muchos casos las operaciones no se concretan por ausencia de títulos saneados. Esta postergación parece inscribirse en una acendrada expectativa de solución global del problema que un recurrente intento, siempre postergado, por parte del estado ha mantenido viva. Los compradores interesados se reclutan actualmente entre empleados urbanizados, ellos mismos poseedores de fincas, que aprovechan el beneficio de su ingreso estable y alguna capacidad de ahorro para incrementar sus posesiones agrarias. Con todo, ello acarrea como problema una concentración de la propiedad de predios dispersos. De cualquier forma la magnitud de este proceso no es destacable.

3) Un tercer enfoque para el análisis del problema del minifundio pone énfasis en el mal uso de los recursos. Se destaca, al respecto, el desperdicio del agua de riego. La cercanía al límite entre explotación y no explotación del viñedo que impone, especialmente, la crisis productiva al productor minifundista implica con frecuencia la mala conducción del riego. Ya sea que el minifundista destine a la esfera ocupacional (changas, empleo permanente o temporario, migración estacional como cosechero, etc.) su mayor energía de trabajo, ya sea que el grupo doméstico haya perdido por emigración sus miembros más activos, el esfuerzo volcado en la finca disminuye al punto de no practicarse un riego adecuado, perdiéndose muchas veces el turno correspondiente. No hay un cálculo estimativo de la magnitud que representan estas pérdidas para el conjunto de la zona, pero según informantes, entre los que eventualmente dejan pasar su turno sin aprovecharlo y los que aún mantienen el derecho de riego sin realizar cultivo alguno en la finca, suman una proporción bastante considerable, especialmente en los distritos

de alta densidad de regantes.

Sumado a esto se registran, también, la aplicación de técnicas inadecuadas en el riego. Ello se identifica especialmente en el caso de los alfalferos, entre los cuales el empleo de tales técnicas constituye un obstáculo difícil de remover para el mejoramiento de la producción y el éxito del Plan Alfalfa encarado por la Provincia.

Ya hemos mencionado la inflexibilidad que supone el minifundio viñatero en cuanto a posibilidades de diversificación agrícola y adaptación a las condiciones del mercado de productos. Quizá en la mayoría de los casos la limitante principal a la diversificación sea las restricciones del agua más que la indisponibilidad de tierra propia. En tal sentido un mejoramiento en la eficiencia del riego -por mejoramiento en la conducción y captación del agua, por una parte, y mediante mejoramiento de su aplicación a nivel de finca, por la otra-, permitiría incrementar la superficie regada a varios productores que cuentan con posibilidades de ello (tierra disponible y recursos humanos suficientes). Ello podría lograrse, aunque sea en proporciones pequeñas, sin un esfuerzo programático grande.

La conducción de los viñedos es otro capítulo central del deficiente uso de recursos. En el panorama que actualmente refleja el sistema productivo de la zona se destaca el abandono de viñedos a tal punto que muchos de ellos se han secado definitivamente. Tal situación no es privativa de los minifundistas; también productores medianos que han abandonado la zona o son productores ausentistas presentan el mismo problema. Un productor ausentista, por ejemplo, conserva actualmente solo un 30% del viñedo de 5 has. con que contaba años atrás; ello fue consecuencia, no de una búsqueda de nuevas alternativas de producción agrícola, sino simplemente del abandono de la viña que sin ningún tipo de atención se secó en su mayor parte.

Pero aún entre aquellos productores que conservan la producción, la crisis en el precio de la uva conllevó a un descuido sistemático de las plantaciones. Ello también es común a productores de distintas categorías pero en escalas diferentes. El tratamiento fitosanitario nunca fue de práctica entre los minifundistas, pero en los últimos años también fue retaceado por los medianos y grandes. Con baja rentabilidad, éstos solo podan, atan y riegan los viñedos. Entre los más chicos aún estas tareas aparecen cuestionadas, no tanto en estos casos por falta de capital (en tanto son tareas desempeñadas por el mismo productor con su grupo familiar), sino por falta de disponibilidad de recursos humanos y aún por el desinterés que los varios años de la crisis generaron entre los pequeños productores.

En el caso de la vid una diferencia se percibe, sin embargo, según la variedad de uva implantada. Algunos viñateros había reconvertido años atrás sus parrales incorporando uva sultanina, apta para la producción de pasas. Estas mantuvieron un precio más estable y rentable durante los años de la crisis, de tal forma

que sus productores lograron mantener un mejor nivel de ingreso relativo y una mayor capacidad de inversión (en trabajo e insumos) en la finca. En este momento el injerto de videdos con tal variedad y con variedades finas para vino es uno de los objetivos de la Secretaría de Agricultura provincial en la zona.

4) También desde el punto de vista de la comercialización, el minifundio presenta sus peculiaridades. En el caso de la vid, sin embargo, la agudización en los problemas de la comercialización para el pequeño productor no se emparenta a los años de la crisis de precios, sino que se manifiesta con mayor crudeza en el momento actual. Como ya fue dicho, aparte de compradores ambulantes y eventuales que compran uva para consumo fresco, la mayoría de la producción se destina a bodega. En 1981, por ejemplo, casi el 70% de la uva producida tuvo tal destino (datos del Anuario Estadístico de la Provincia de La Rioja). A parte de dos bodegas de productores individuales que prácticamente elaboran su propia uva y de la muy residual producción de vino patero, existen en Villa Unión dos grandes bodegas cooperativizadas: La Caroyense y Villa Unión. Tradicionalmente, aquella asociaba a productores medianos y grandes y ésta a los pequeños. La difícil situación financiera y organizativa de la Cooperativa de Villa Unión agregó un elemento más a la crisis económica del minifundio. Como expresión de ello baste indicar la diferencia de precio de uva que una y otra ofrece al productor, actualmente: 8 ctvos. por kilogramo la primera, y 4, la segunda con el agravante en ésta de la irregularidad del pago.

Como consecuencia de esta situación, la Cooperativa de Villa Unión perdió más del 50% de sus socios, no solo por conducta espontánea de éstos sino también por expulsión de asociados dispuesta por la organización a raíz del no cumplimiento de la cláusula de venta en exclusividad a la Cooperativa. En efecto, es conocida la vulnerabilidad que presenta el sistema cooperativo en este aspecto que se agrava, obviamente, ante dificultades financieras de la organización. A decir de los actuales directivos, la medida de expulsión cuestionó aún más la base de funcionamiento de la cooperativa. Mientras tanto, la Cooperativa La Caroyense redujo la cuota mínima de entrega de uva (a solo 3000 kg.) para admitir asociados, por lo cual un número considerable de viñateros (medianos y chicos) se volcaron a esta otra organización.

Para otros productos, la comercialización presenta contornos más difusos: la nuez, higo, cachina, retamo, yerbas medicinales, pasas de uva, etc. Ciertamente, en estos casos los precios aparecen como comparativamente estables y redituables dados los parámetros de la producción minifundista. Sin embargo, se desconoce como opera el sistema de comercialización -que se realiza fuera de la región-, y en qué medida no supone una fuga excesiva del excedente productivo y del beneficio para los productores.

5) Por último, el minifundio puede ser analizado en términos de los recursos humanos incorporados al proceso productivo. A lo

largo del capítulo hemos hecho referencia abundante a este aspecto, incluyendo la caracterización del tipo social de minifundista como distinto al del campesino. Cabe señalar aquí la diferente orientación en relación al manejo del grupo doméstico. En el tipo campesino, el grupo doméstico constituye la base principal de la producción agrícola e incluso el parámetro que regula su magnitud. En el minifundista -sin desconocer la función que la familia ejerce en la producción de la parcela- los miembros del grupo de convivencia se orientan más hacia el trabajo fuera de la explotación. En el campesinado, el jefe de hogar es una suerte de organizador de un grupo productivo aplicado a la finca; en el minifundio, el jefe es un "colocador" de mano de obra (cónyuge, hijos, hijos de crianza, etc.) en el mercado ocupacional, con el fin de incrementar por esta vía los ingresos del grupo.

El predominio de uno u otro sistema ocupacional depende del nivel de ingreso que provee la explotación. La crisis de los últimos años -que llevó a la creciente minifundización de los productores- dió impulso al sistema ocupacional basado en el trabajo fuera de la finca. Como dijimos, el minifundio es más adecuado -debido a su misma marginalidad en el sistema productivo de la zona- a soportar las restricciones económicas de la agricultura permitiendo una estrategia ocupacional compleja donde la changa urbana o rural, la recolección o, ultimamente, el empleo público cumplen una función clave de estabilidad del minifundista. Por supuesto, ello no suprime la emigración como alternativa, pero es ésta una de las posibilidades en un abanico más amplio que combina aquellas otras alternativas ocupacionales en la zona sin abandonar definitivamente la finca. Pero también esta alternativa implica, como fue dicho, reducir la magnitud de fuerza de trabajo volcada en la explotación agrícola, comprometiendo el rendimiento de la producción y cuestionando la innovación agrícola y tecnológica.

La larga crisis ha provocado, entonces, una preeminencia del trabajo fuera de la explotación en la estrategia de vida de los minifundistas. La prolongación de esta situación ha permitido a algunos de los afectados lograr ocupaciones más o menos estables y que aseguran un ingreso continuo, a los cuales posiblemente estén poco dispuestos a renunciar aún dada una reactivación interesante de la producción agropecuaria. De esta forma, todo intento de reconstitución de la actividad agrícola basada en pequeñas explotaciones deberá enfrentar, no solo la pérdida de recursos humanos producida por la emigración, sino también la desviación de recursos humanos originariamente agrícolas que reconstruyeron su situación laboral y de ingresos en sectores ocupacional distintos a los de la propia finca. En ello, la expansión del empleo público producida en los dos últimos años, como veremos, ha tenido alguna responsabilidad, especialmente en cuanto a los minifundistas más próximos a las estructuras urbanas y a los centros de poder público.

Cooperativas

El movimiento cooperativo está representado en la zona Oeste por ocho organizaciones, cuya nómina es la siguiente:

- Cooperativa de Villa Unión, Sociedad Agrícola industrial, departamento FV.
- Cooperativa La Caroyense, subsede Villa Unión, depto. FV.
- Cooperativa de Aicuña Ltda., departamento FV.
- Cooperativa de Trabajo de Guandacol Ltda., depto. FV.
- Cooperativa de Pagancillo, en formación, depto. FV.
- Cooperativa de Consumo y Crédito de empleados Municipales y Administración Pública, EMAP, Ltda., dpto. FV.
- Cooperativa Agropecuaria, Vitivinícola, de Transformación, Comercialización y Consumo, Ltda. "San José de Vinchina", departamento GS.
- Cooperativa Agropecuaria, Asistencial y de Consumo Villa Castelli, Ltda., departamento GLM.

En sus características, una y otra difieren considerablemente. En su mayoría se fundamentan en la producción y comercialización de productos agrícolas, y particularmente la vid. Solo una de ellas tiene como objetivo el consumo y el crédito, aunque ello está incorporado entre las funciones de las restantes pero generalmente con escaso desarrollo. Una sola organización se constituye como cooperativa de trabajo y dos tienen como principal actividad la manufactura: bodegas.

Con excepción de La Caroyense, con sede en Chilecito, las restantes son exclusivas de la zona. La más antigua (junto con una ya desaparecida por fusión con la mencionada), es la de Villa Unión, elaboradora vinícola, creada durante los años 60, la de Aicuña y la de trabajo de Guandacol, fundada en 1971. La de Villa Castelli cuenta con 12 años de antigüedad. Las tres restantes son de reciente formación.

Indudablemente el período correspondiente al gobierno miliar fue particularmente poco propicio al desarrollo del cooperativismo. Sin embargo, con diferentes avatares, 5 de las cooperativas actualmente existentes lograron sortear el período y sobrevivir. En el caso de las vinícolas, incluso, se evidenció cierta expansión, si consideramos la instalación y ampliación de capacidad de La Caroyense y el mantenimiento de su ritmo de producción de la de Villa Unión. Sin embargo, la posición en el mercado de ambas se invirtió drásticamente durante los últimos años. El número de asociados de la segunda, por ejemplo, disminuyó desde los 800 hasta los 140 actuales. A la inversa, la otra no solo captó los viñateros medianos y grandes que adherían originariamente a aquella(*), sino también, ultimamente, a los pequeños productores, y aún minifundistas, con solo una producción de 3000 kg. de uva como mínimo.

(*) La Cooperativa local que dio origen a la actuación de La

Caroyense en la zona estaba constituida por los más grandes productores de uva del oeste.

Se atribuye a deficiencias en el manejo financiero de la cooperativa de Villa Unión la causa de su actual estado. Un nuevo equipo gerencial fue elegido hace dos años, pero el compromiso de la situación previa e impericia en el manejo de la organización -según algunos informantes- aceleraron el proceso de deterioro de la organización. La pérdida de socios se habría iniciado durante la gestión anterior por expulsión de aquellos que no habían comercializado la uva en exclusividad con la cooperativa, contradiciendo la reglamentación vigente. Tal medida afectó a los productores medianos que fueron absorbidos por La Caroyense. Durante la última campaña el precio pagado por esta última a los vitíferos fue el doble del pagado por la Cooperativa de Villa Unión. La reciente admisión como socios de productores pequeños por parte de aquella, aceleró la desafiliación que afectó a la última. El panorama de la organización se complicó ante la imposibilidad de venta del vino debido a acciones legales emprendidas por acreedores, actualmente en trámites. Los altos costos operativos que debe sostener la empresa y la negación hasta el momento de subvención por parte del estado, tornó la situación particularmente crítica.

Estos hechos reflejan, mas bien una situación financiera y comercial de coyuntura que no necesariamente deben comprometer el desempeño futuro de la cooperativa o su existencia misma. Sin embargo, su base de asociación -el minifundio- presenta problemas estructurales para la fase de industrialización, como también fue referido para la fase de producción primaria. Ello hace a la necesidad de recuperar -y aún avanzar- en una calidad de vino que mejore su competitividad en el mercado nacional. Sin embargo, los obstáculos que ofrece el minifundio a la innovación tecnológica y varietal supone que un cambio positivo en tal sentido exige un esfuerzo notable que su crisis financiera le impide a la cooperativa afrontarlo por sí misma.

Los actuales directivos formulan una serie de ideas tendientes a diversificar las actividades de la organización que permitan superar la crisis presentes: organizar las funciones de consumo de la cooperativa, instalar una fábrica de escobas (que asocie en cooperativa de trabajo a sus propios empleados), elaboradora de dulces o enlatados, panadería, etc. Inclusive actuar como intermediaria de comercialización de la uva en convenio con otras cooperativas vitivinícolas. De cualquier forma, estas ideas carecen, en general, de una suficiente evaluación de su factibilidad y tienden a superponerse con las aspiraciones de otros grupos cooperativos, en formación o potenciales, de la zona. Parece evidente, entonces, que es necesario encarar un análisis a fondo de estas alternativas de producción, no solo restringido al marco de una cooperativa en particular sino, en general, al movimiento cooperativo y el sistema productivo de la zona Oeste. En el caso particular de la cooperativa de Villa Unión -pero podría afirmarse en general para las restantes- no existe el suficiente número de recursos humanos calificados para tal tarea de formulación de proyectos y análisis de factibilidad. Contar con

asesoramiento al respecto es una demanda explicitada por los directivos de las organizaciones que las reparticiones provinciales hasta ahora no han satisfecho en la medida necesaria.

La Cooperativa de Trabajo de Guandacol fue creada entre 1971 y 1972 sobre la base de un centro juvenil formado espontaneamente por habitantes de la localidad. En su origen contó con el estímulo y apoyo brindado por la parroquia del lugar y sobre la base de subsidio otorgado por la repartición nacional de cooperativas, lo cual permitió cierta capitalización en maquinarias, transporte y local. Las primeras acciones resultaron relativamente exitosas y alentadoras. Comenzaron fabricando ladrillos hasta que, saturado el mercado local y no pudiendo comercializarlo fuera de la zona, clausuraron la actividad. El proyecto de instalación de aserradero y carpintería --para el cual adquirieron maquinaria con los subsidios otorgados-- tropezó finalmente con la negación de la concesión para aserrado de madera en la zona. Instalaron taller de costura y tejido cuya producción fue primeramente destinada a la zona (por ejemplo, guardapolvos escolares) para luego orientarlos al mercado de Buenos Aires (ponchos, mantas, etc.). En realidad, durante el período más floreciente de la Cooperativa --años 1974 y 1975-- su función principal fue la de intermediación, aprovechando la tenencia de medio de transporte: se llevaba a los grandes centros de consumo cueros, lana, etc., y se traía materiales de construcción, sanitarios, etc. a precios muy inferiores a los locales. Un primer intento de orientarse a la producción agrícola (cultivo de tomate sobre tierra arrendada) se interrumpió por la persecución política inaugurada durante el período de gobierno militar. Durante 4 años la cooperativa estuvo virtualmente clausurada, sufriendo la dispersión de sus asociados, el apresamiento de uno de sus dirigentes y el deterioro de sus bienes. Luego de ello, recomenzó sus actividades pero sin hallar hasta el presente un campo de acción que permita estabilidad laboral a sus asociados. En la actualidad sigue actuando, principalmente, en su función de intermediación de productos, en tanto se alientan algunos proyectos de pequeña envergadura: instalación de panadería, fábrica de escobas, etc. Todos ellos aparecen como compensaciones a las dificultades para lograr la que quizá sea su principal aspiración: la obtención de tierra en forma permanente que pueda ser distribuida entre los asociados. Curiosamente, no se plantea para tal caso conformar una cooperativa de producción sino la subdivisión del predio en lotes para que cada asociado realice sus propios productos. Se indica una finca abandonada en la zona de adecuada extensión y dotación de riego como una alternativa de interés para los asociados. Mientras tanto, la cooperativa no es por el momento el medio de vida de sus socios. Ellos la consideran un "instrumento de futuro" pero su ingreso actual lo obtienen de la explotación de la finca propia, de empleos gubernamentales o trabajos transitorios. Es poca, en consecuencia, la energía que pueden invertir en el desarrollo de la organización, a pesar de lo cual no la consideran una experiencia agotada.

La Cooperativa de Vinchina cuenta con 12 años de vida y su objetivo principal se inscribe en la producción vitivinícola. Al momento, esta sí, se la considera prácticamente en liquidación: el número de socios se redujo a 20, desde sus 100 originales y su función se restringe a la mera intermediación en la venta de uva. El entusiasmo y las expectativas que se abrieron durante los dos primeros años de vida fueron sepultados en 1976 con la pérdida de apoyo político a la organización. Su creación había sido estimulada por un diputado provincial y el objetivo principal era levantar una bodega propia. La política anticooperativista del gobierno militar, la crisis de la uva y más recientemente la competencia de La Caroyense en la captación de productores desvanecieron prácticamente esa ilusión. Actualmente, el número de socios parece exiguo para pretender una aventura semejante; con excepción de la finca de su presidente (10 has.) -quien por otra parte no reside en la zona- los restantes socio promedian superficies de vid de solo 1 ha., no participan en las reuniones de la organización y los fondos que ésta adquiere por aportes e intermediación en la venta de uva, apenas alcanzan para cubrir los gastos de funcionamiento. A punto de vencerse el mandato de las actuales autoridades, existe una conciencia generalizada de liquidación de la experiencia.

No tuvimos oportunidad de relevar información acerca de la cooperativa de Aicuña. A decir de los informantes, ésta es la experiencia más exitosa y estable del cooperativismo de la zona. Una explicación de ello parece radicar en la particular integración social de la misma localidad, en la cual la conservación de pautas firmes de solidaridad (quizá favorecidas por el aislamiento de la comunidad) y la estabilidad de su producción principal -la nuez- han hecho de la relación cooperativa la mejor defensa de los intereses económicos de sus pobladores.

Las cooperativas de Pagancillo y Villa Castelli son de reciente creación. La primera se encuentra todavía en formación sin que hasta el momento haya concretado acciones de envergadura. La de Villa Castelli fue fundada a instancias de la Secretaría de Agricultura de la Provincia, en el marco de su Plan Alfalfa. Cuenta actualmente con 41 socios y con maquinarias agrícolas que prestan servicios a éstos a precio de costos (también a otros productores de la zona a precio más elevado). Su dinámica se inscribe en el proceso de renovación varietal de la alfalfa para lo cual cuenta con abundante asesoramiento técnico a través de la Agronomía de Zona. Pero aquel se encuentra todavía en su etapa experimental, habiéndose realizado cultivos de la nueva variedad en 8 fincas, con resultados aún no definitivos. El plan se completa con la construcción de una planta procesadora de semillas para lo cual el gobierno provincial ha ofrecido un financiamiento promocional. Sin embargo, los socios se han negado, por el momento a embarcarse en tal esfuerzo a la espera de una evaluación más precisa del éxito de la experiencia en el nuevo cultivo. A decir de informantes, a diferencia de otros intentos cooperativos anteriores, el de Villa Castelli no concita el mismo optimismo entre sus socios. Quizá en ello insida la acumulación de ex-

perencias negativas; pero también el hecho de tratarse de un cultivo que exige importantes innovaciones en el manejo agrotécnico puede estar fomentando temores hacia la nueva experiencia. De hecho, los extensionistas encuentran fuerte resistencia a la introducción de nuevas prácticas culturales que modifican las pautas tradicionales de los productores. Esto quizá conlleve un esfuerzo adicional por parte del estado a lo previsto en el plan original, hasta tanto lograr el despegue autónomo de la cooperativa. Por el momento, la adhesión a la experiencia por parte de los productores parece asentarse sobre las ventajas que les representa la ayuda (especialmente en cuanto a uso de maquinarias) para su producción ordinaria (alfalfa criolla, cebada, trigo, etc.).

La Cooperativa de consumo de Villa Unión se constituye, obviamente, como un mecanismo de mejoramiento del salario del empleado público. En el caso de la zona Oeste ello es particularmente estratégico en tanto su costo de vida sería considerablemente más elevado al de la capital riojana. Ello sería fruto del proceso de intermediación comercial como de la relativa concentración del comercio: en efecto, la zona presenta un promedio de habitantes por establecimiento comercial superior al valor a nivel provincial: 45,2 contra 40,1 hab/establecimiento, siendo senciblemente inferiores los de la Capital (37,0) y Chilecito (33,8), por ejemplo. Algunos rubros de la estructura comercial son particularmente problemáticos: especialmente el de productos farmacéuticos respecto a los cuales la zona se encuentra muy desabastecida como ya fue señalado.

Otras cooperativas alientan el mismo intento de abrir una sección de consumo para sus socios. Ello parece ser una ventaja lógica, tanto en beneficio de los asociados como del giro comercial y fortalecimiento económico de la organización. Sin embargo, sería importante evitar una superposición de beneficiarios, directos e indirectos: dada la cerrada trama de la estructura ocupacional de la zona, con productores agrícolas titulares, al mismo tiempo, de puestos públicos, por ejemplo, la posibilidad de tales superposiciones sería alta, lo cual comprometería la adecuada relación de oferta-demanda de bienes de cada cooperativa. Por otra parte, debería intentarse una coordinación, complementación -y aún fusión- de la función de consumo de las distintas cooperativas que posibilite una ampliación de tal función y mayor reducción de gastos operativos.

A lo largo de la exposición de los casos de cooperativas puede deducirse un cierto subdesarrollo en lo que refiere a pautas de solidaridad productiva. Con la excepción de la Cooperativa de Guandacol (cuya fortaleza solidaria deriva, por un lado, de su origen en la existencia de un grupo social primario -o sea, algunos jóvenes de la localidad- y, por el otro, en su esfuerzo por encontrar medios de vida que resista el destino emigratorio) y de la Cooperativa de Aicuña (asentada sobre una comunidad relativamente aislada y fuertes vínculos de parentesco), las restantes se fundamentan, aparentemente en forma exclusiva, sobre el beneficio de la organización al productor individual. De ahí

que la fase de comercialización de la producción primaria - o más bien la conformación de un ente comprador estable, con protección estatal como sería su concepción de las bodegas cooperativizadas- sea la función más claramente percibida del movimiento cooperativista. De ahí también, la permanente amenaza que pesa sobre la cooperativa respecto a la competencia que pueden ejercer otros compradores, ya que con frecuencia, el productor individual no vende con exclusividad a la cooperativa.

Con algunas excepciones (la de Villa Castelli, principalmente) el uso cooperativo de maquinaria agrícola no es una práctica extendida. Aún en la excepción señalada esa práctica se percibe más como un servicio prestado o fomentado por los extensionistas de la zona que como la resultante de un esfuerzo solidario entre los socios. En otro orden de cosas, hemos observado que el manejo individual de la parcela constituye un valor fundamental para el productor: ejemplo de ello, es la expectativa de obtener tierra y dividirla entre los distintos usuarios para su manejo individualizado, por parte de los miembros de la cooperativa de Guandacol. Aún una cooperativa fuertemente integrada como la de Aicuña la producción nogalera es de carácter individual.

En cierta medida la cooperativización de las relaciones productivas resultan extrañas a la tradición económica campesina de la zona. La ecuación que el campesino formula entre recursos naturales (tierra y agua), recursos humanos propios (el grupo doméstico) y las necesidades de consumo propio, encierra su producción en el ámbito de la parcela individual, sin que intervengan en su concepción de la producción consideraciones de carácter comunitario. Por ello es difícil apostar a la constitución espontánea de formas cooperativas de producción, en la cual la totalidad o la mayoría de los medios productivos sean manejados comunitariamente.

Sin embargo, es un aspecto fundamental de la lógica de producción campesina la ayuda mutua para la realización de las tareas agrarias. La clásica figura de la minga estaba extensamente establecida en la zona, pero a decir de los informantes su vigencia ha desaparecido en los últimos 20 ó 30 años, con la excepción relativa de la comunidad de Aicuña. No se puede formular una explicación satisfactoria de este cambio, pero muy posiblemente, factores como la emigración y la minifundización del pequeño productor son responsables del proceso. La emigración desarticula la trama social de la comunidad y translada los referentes de solidaridad desde el interior de la zona hacia el exterior. La ayuda económica por parte de los emigrados a los residentes reemplaza a la solidaridad interna. La solidaridad se translada a las zonas de destino de la emigración (recepción de emigrados más antiguos a los nuevos) y eso es lo esperado por los mismos residentes de la zona que esperan emigrar, ellos mismos o sus hijos.

La emigración también afecta la estructura de los grupos familiares, de tal forma que pierden recursos humanos para la realización de las tareas agrícolas. El trabajo de los hijos

(jóvenes y niños) era el recurso fundamental de la minga; al quedar solo los mayores, en vez de fortalecerse la solidaridad productiva, perdió sus recursos humanos propios.

La minifundización del productor también fue responsable del desuso en que cayó la práctica de la minga. Al reducirse el tamaño de los viñedos al extremo en que se ha llegado en la zona, el mismo grupo familiar, por más diezmado que se encuentre a raíz de la emigración, es suficiente para levantar la cosecha de tal forma que no requieren la ayuda de vecinos. Los que conservaron predios más grandes, sí lo requieren pero al no existir la ventaja del intercambio de ayuda para los más chicos, la cooperación de las tareas ya no tiene base de equidad. La nueva base de intercambio, entonces, es el dinero: el más grande paga al minifundista más chico para que le ayude en la cosecha (o la poda), y éste, de productor se convierte en changarín. La intervención del dinero mediatiza las relaciones de producción asentadas sobre la vecindad y desestimula la solidaridad productiva.

Desde el momento que el minifundista se convierte en changarín está dispuesto a "changuar" en toda tarea que se le presente: la cosecha de la vid, la nivelación de terrenos, la recolección de cachina o la construcción en el pueblo son alternativas que comparten la misma justificación: la necesidad del minifundista de conseguir medios monetarios que su exigua producción minifundista ya no le reporta. La crisis de la uva de los últimos 10 años, al incrementar la necesidad de trabajo transitorio o changas del minifundista, diluyó aún más las bases sociales de la solidaridad productiva o la ayuda mutua para las tareas agrícolas.

Estando así las cosas, una constitución de relaciones productivas que se funden en las ventajas de la organización colectiva y solidaria para el pequeño productor debe estar precedido en un esfuerzo importante de demostración de tales ventajas, y con el suficiente apoyo externo que permita superar las primeras fases organizativas e introduzca nueva confianza en aquellas relaciones. El Plan Alfalfa parece estar orientado en esa perspectiva aún cuando no goce, aparentemente, de los recursos suficientes. Por la misma razón, debería evitarse en lo posible la improvisación en los proyectos que, con mayor o menor especificación, se formulan en la zona, y especialmente algunos directivos de cooperativos. Las urgencias ocupacionales y de ingreso que tiene su población tienta la ejecución de tales proyectos sin la suficiente evaluación de sus resultados probables. La endeblez de las condiciones sociales que garantizan las pautas de solidaridad necesaria para los mismos hace a tales proyectos más riesgosos y los condenan al fracaso.

III. Aspectos ocupacionales

Con la información disponible resulta imposible componer un cuadro completo de la estructura ocupacional de la zona. A partir de la información secundaria parcial y de referencias recogidas en campo consignaremos la magnitud de ocupaciones para algunos sectores de la economía.

1. Entre 1974 y 1985, fecha de respectivos censos económicos, la ocupación en la industria creció en un 17% para el conjunto de la zona, con variaciones para cada departamento: se produjo un pronunciado descenso en GLM, un incremento del 35% en FV y una duplicación del personal industrial en GS, pero en magnitudes absolutas tan exiguas que prácticamente no tienen valor en términos de la estructura del empleo (ver cuadro Nro. 1). De los 29 establecimientos industriales que existían en 1974 (no tenemos la discriminación para el último censo), el 55% correspondían a las ramas de alimentos y bebidas (incluyendo en ello a 5 bodegas), el 41 % correspondían a aserraderos y otros establecimiento elaboradores de productos madereros, y un solo establecimiento dedicado a la elaboración de productos minerales.

El número de establecimientos industriales se incrementó casi en la misma proporción que el personal, pasando de 29 a 35 unidades, y la variaciones por departamento fueron coincidentes a las variaciones de la mano de obra empleada. El tamaño medio de los establecimientos (3,8 personas empleadas por cada uno de ellos) muestra la precariedad del sistema industrial. Comparado con el promedio provincial (11,9), aquel tamaño medio es inferior en un 68% . Ello es más notorio si tenemos en cuenta que casi el 50% de la mano de obra industrial relevada corresponde a solo 3 establecimientos: dos bodegas y la fábrica de productos minerales. El resto, prácticamente, corresponde a una producción de tipo artesanal, con excepción de dos aserraderos con una dotación de personal aproximada a las 8 personas cada uno.

2. En el sector comercio y servicios privados, la evolución durante el período intercensal fue marcadamente negativa. El total de 318 personas dedicadas al sector fue resultado de una disminución del orden del 27% para el conjunto de la zona, que tuvo su expresión más aguda en el departamento GLM (ver cuadro Nro. 2). En este caso, la reducción de personal se explica por partida doble: una disminución en el número de establecimientos comerciales a la vez que una reducción en el tamaño medio de los mismos. El promedio de personal por establecimiento (1,3) manifiesta el predominio casi absoluto del comercio unipersonal que contrasta con el valor correspondiente a una zona urbanizada como la Capital provincial equivalente a 2,5 personas por establecimiento.

Indudablemente, el deterioro del sector comercial expresado por estos datos revelan el deterioro del conjunto de la economía de la zona. El comercio en las localidades de la zona tiene su razón de ser en relación a la demanda del sector agrícola; el deterioro económico y demográfico de éste arrastró a aquel. Si

tenemos en cuenta que el descenso en el número de establecimientos fue menor al correspondiente a la cantidad de personas ocupadas, se deduce la principal estrategia adoptada por el sector: no tanto el cierre de establecimientos sino la eliminación de empleados, tanto de asalariados como de miembros del grupo familiar. El sector industrial, en cambio, mantiene una dinámica propia, independiente de la situación agropecuaria, con excepción de las bodagas. Pero la crisis vitífera no tuvo su correlato en la vinicultura. En realidad fue al revés: si en 1974 se elaboraron algo más de 5000 ton de uva, a partir de 1978 se mantuvo una elaboración en torno a las 8000 ton hasta el presente, lo cual seguramente explica gran parte del crecimiento del 35% en el empleo industrial del departamento FV.

3. Un sector independiente, también de la situación económica general, es el minero. Particularmente la explotación de la baritina se desarrolló al amparo de la demanda firme de Y.P.F., la cual se interrumpió en los últimos dos años arrastrando con ello a la actividad minera de la zona. En 1983 se registraban 5 minas principales de distintos productos que absorbían un personal cercano a los 200 trabajadores. Actualmente, según estimaciones de diversos informantes (a veces contradictorias) no llegarían a las 80 personas, incluyendo entre ellas los trabajadores de una mina radicada en la Provincia de San Juan, pero residentes en Guandacol. La caída de este sector ocupacional es más pronunciada si se refiere a un momento previo: por ejemplo, entre 1973 y 1978 funcionó en GLM una explotación que empleaba a 90 trabajadores; hoy en día, solo queda en pie una cantera con 3 obreros en el mismo departamento.

4. Del análisis del sector agrícola se deduce que la magnitud de asalariados rurales estables es reducida. Según informantes, en términos generales una explotación de 5 has. de vid no emplea más que un trabajador permanente; entre las 10 y 15 has. el personal se constituye con 3 a 4 empleados, pero no exceden a los 5 ó 6 entre los viñedos más grandes. Un ejemplo demostrativo es el de un productor con 100 has. de cultivo: cuenta con 6 empleados permanentes: un capataz, un tractorista y 4 regadores; en cambio la mayor parte de la fuerza de trabajo la constituye con mano de obra temporaria para la poda o la cosecha, o para tareas más excepcionales como la de nivelación. Si estimamos la cantidad de trabajadores rurales permanentes según una escala teórica de personal por tamaño de los viñedos (ver cuadro Nro. 3), el total de fuerza de trabajo estable se reduce a 140 personas para toda la zona, casi su totalidad radicada en el departamento FV. Las demás actividades agrícolas prácticamente no demandan este tipo de personal.

5. En cambio es importante la magnitud de trabajadores relacionados a los servicios públicos (incluida la administración pública). La reunión de distintas fuentes de información parcial permite estimar un total de 742 empleados para toda la zona, de los cuales el 47% corresponde a FV, el 30% a GS y el 23% a GLM. Del total consignado, el empleo municipal representa la mayor proporción (43%); le sigue a éste el sector de educación pública

con un 29%, salud, el 14% y un conjunto de otros servicios públicos no municipales, el 15% (ver cuadro nro. 4). El incremento del empleo público ha sido significativo en los últimos dos años. Ello respondió, indudablemente, a una política de retención de población que ha decir de los informantes dió resultados positivos aunque considerados temporarios. El incremento se origina, casi exclusivamente, en la planta de personal municipal y posiblemente también, aunque en mucha menor medida, en otros servicios públicos excluidas la salud y la educación (registro civil, rentas, correos, etc.). Información parcial es representativa del aumento del empleo municipal: en 1982, el departamento de GLM contaba con 7 empleados de planta permanente, cifra que aumentó a 94 en el momento actual, muchos de los cuales, sin embargo, son contratados en carácter transitorio. Un aumento equivalente se produjo en GS, aunque no contamos con cifras de fechas previas: actualmente cuenta con 120 empleados. En FV, en cambio, a pesar de la mayor complejidad de sus asuntos municipales (dado el carácter urbano de su cabecera y el mayor número de delegaciones locales) cuenta con un número menor de empleados -solo 102-, habiendo experimentado un incremento mucho más leve en los dos últimos años. Estas diferencias ponen de manifiesto el carácter eminentemente "asistencial" del empleo municipal en los dos primeros departamentos, utilizado más como solución al desempleo que en función de las necesidades del servicio municipal.

Por la misma razón los sectores de servicios sociales cuyo empleo se regula por la demanda que presenta el medio (tales como educación y salud), no evidenciaron cambios significativos en la dotación de personal. En 1979 el sector salud contaba con más empleados que en la actualidad (aunque como vimos aumentó el número de profesionales): 112 contra los 101 de ahora. Los servicios educacionales incrementaron sus agentes de 206 en 1981 a 212 en 1984, aunque durante el presente año escolar fueron incorporados algunos docentes de nivel medio y superior por la inauguración de establecimientos en ambos niveles.

6. Considerando al conjunto de trabajadores que hemos supuesto con puestos estables, suman para toda la zona 1406, el 62% de los cuales pertenecen al departamento FV, el 22% a GS y el 16% a GLM. Los sectores predominantes son con igual proporción el municipal y el comercio y los servicios privados (23% cada uno de ellos), la educación (15%) y los asalariados rurales (10%) (ver cuadro Nro. 5).

No contamos con información censal sobre la magnitud de la población económicamente activa de la zona como para ponderar la proporción que representan los trabajadores con puestos estables. Si suponemos un promedio de 1,5 personas económicamente activa por hogar, que por su edad (20 a 65 años) sea susceptible de tener un empleo estable(*), el total de población económicamente de tales edades

(*) Medida seguramente no demasiado alejada de la realidad si tenemos en cuenta que existen solo 2,3 personas por grupo familiar de tales edades.

sería de 3380 personas. En relación a éstos la proporción de puestos estables equivalen, para el conjunto de la zona del 42%. El 58% restante (unas 1974 personas) se repartiría entre los productores rurales y los relativamente pocos trabajadores rurales sin tierra o puesto fijo y los changarines urbanos. Los productores rurales se aproximan a aquella cifra -1800-, por lo cual es posible sostener que, por lo menos en una importante proporción, los minifundistas se mantuvieron al margen del incremento del empleo urbano. Ello contradice una afirmación frecuentemente repetida por los informantes respecto a que el productor rural se transformó en asalariado urbano como forma de resistir a la crisis del agro. Más bien creemos que ello es cierto para una porción relativamente pequeña de aquellos agricultores más integrados (o más cercanos) al medio urbano, y por ello más visibles a los ojos de los informantes. Sin embargo, la mayoría del sector minifundista (o de los pequeños productores) que resistieron a la presión emigratoria enfrentaron la supervivencia sostenidos por el trabajo estacional o transitorio y reduciendo intensamente su perfil de consumo.

7. Sin embargo, no contamos con mediciones del trabajo estacional. Es de suponer que uno tradicional como es la poda, atada y cosecha de la vid se ha resentido en la misma proporción que disminuyó la atención de los viñedos. Pero el poblador de la zona se embarcó en una práctica de migración golondrina que años atrás no realizaba. Este cambio de pauta ha sido indicado por más de un informante, incluyendo el hecho de que en muchos casos es todo el grupo familiar (o gran parte de él, incluyendo chicos) el que migra, por ejemplo, a la cosecha de vid de Chilecito. También se intensificó, como dijimos, la recolección de frutos naturales (cachina, retama y yerbas) lo que también permitió compensar - siquiera parcialmente- la restricción del ingreso derivado de la finca.

Lo que se quiere destacar, entonces, es que la supuesta urbanización del productor rural ha abarcado a la población más próxima a las localidades más urbanas (y no a la mayor parte de ella, indudablemente), pero al mismo tiempo, la resolución laboral de los agricultores repartidos en distritos más pequeños se encarriló por el trabajo temporal, la changa, la recolección, la migración golondrina y, obviamente, la emigración definitiva fuera de la zona. Quedan así delineadas dos estrategias de supervivencia de los pequeños productores ante la crisis viñatera. También esta conclusión destaca que el esfuerzo realizado por el estado municipal para disminuir los efectos del desempleo a través de la contratación masiva de personal no tuvo un efecto importante desde el punto de vista cuantitativo.

Unas breves referencias deben ser hechas en relación a la actividad artesanal. Para la zona en su conjunto ella no es significativa en términos de la población que involucra. En el departamento FV prácticamente no se registra la actividad a no ser por un establecimiento de herrería (fabricación de cuchillos) y dos de torneado de madera cuyo carácter artesanal es discutible. En GLM un censo reciente ha identificado un total de

13 artesanos, 8 de los cuales están dedicados al hilado, tejeduría y en algunos casos bordado con lana de oveja y guanaco principalmente. Otros 5 son curtidores y trensadores de cuero para la fabricación de lazos, cinchas, cabestros, pellones, etc. y algunos de ellos tallan la madera para estribos, platos, etc.

En todos los casos la producción es por encargo o a pedido pero no existe la producción de un stock para venta. En realidad la orientación general de la producción es para autoconsumo, destacándose, especialmente en el rubro textil, poco entusiasmo para realizar sus productos. Comparativamente, se destaca el alto precio pretendido por el artesano y su preferencia de no desprenderse de la pieza a no ser que ello le reporte una sustancial ganancia (en términos relativos a los ingresos de la zona). La falta de stock, las dificultades de vinculación con el escaso turismo que recibe la zona y los precios exigidos no hacen de esta producción un rubro que pueda ser contabilizado como un ingreso significativo en la zona. Además no cuentan con canales habituales de exportación de sus productos a centros urbanos, con excepción el artesano herrero y los torneadores de madera.

La Dirección Nacional de Acción Popular está desarrollando un programa de recuperación de artesanías dentro del cual cabe la localidad de Villa Castelli. Allí se pretende seleccionar hasta 6 artesanos textiles y contratarlos para la enseñanza del oficio para lo cual se construiría un Centro de Artesanías. Igualmente se pretende inculcar la actividad a través de las escuelas primarias. El objetivo de este programa no es, indudablemente, transformar al trabajo artesano en una alternativa de solución al desempleo sino evitar su desaparición como patrimonio cultural. Ello se sustenta en la comprobación de que los jóvenes no se orientan a la actividad. De hecho, según el censo mencionado, la edad promedio de los artesanos es de 42 años, existiendo un solo caso menor de 30 años.

Al margen de tal objetivo, la artesanía no parece constituir un rubro que pueda ser activado en forma inmediata para la generación de una fuente importante de ingreso a la población. Sin embargo, ello no contradice la necesidad de estimular canales de comercialización y fomentar la regularidad productiva de tal forma que no solo beneficie a sus actuales cultores sino que también multiplique en el futuro las unidades de producción.

Cuadro Nro.1: Personal ocupado en la industria, cantidad de establecimiento y tamaño medio de los mismos Años 1974 y 1985.

Departamentos	Personal industrial 1974	1985	Establecimientos 1974	1985	Tamaño medio 1974	1985
---------------	-----------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

Gral LaMadrid	24	9	4	2	6,0	4,5
Felipe Varela	85	115	22	25	3,9	4,6
Gral Sarmiento	4	8	3	8	1,3	1,0
Zona Oeste	113	132	29	35	3,9	3,8
Provincia	1848	5999	403	503	4,6	11,9

Fuente: Censo Nacionales Económicos de 1974 y 1985

Cuadro Nro. 2: Personal ocupado en comercio, cantidad de establecimientos y tamaño medio.1974, 1985

Departamentos	Personal ocupado 1974	1985	Establecimientos 1974	1985	Tamaño medio 1974	1985
---------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

Gral LaMadrid	55	33	22	19	2,5	1,7
Felipe Varela	314	223	174	159	1,8	1,4
Gral Sarmiento	69	62	57	62	1,7	1,0
Zona Oeste	438	318	253	240	1,7	1,3
Provincia	7043	8399	3510	4091	2,0	2,1

Fuente: Censos Nacionales Económicos de 1974 y 1985

Cuadro Nro. 3: Estimación de asalariados permanentes en viñedos

Tamaño del viñedo	Personal teórico por explotación	Cantidad viñedos	Total de asalariados
----------------------	-------------------------------------	---------------------	-------------------------

5 a 7,5 has.	1	24	24
7,5 a 10 has.	2	10	20
10 a 15 has.	3	6	18
15 a 25 has.	4	11	44
25 y mas has.	5	7	35
Total	-	58	141

Fuente: sobre cantidad de viñedos, Anuarios Estadístico de la Provincia de La Rioja.

Cuadro Nro.4: Personal actual del sector público.

Departamentos	Municip	Educ.	Salud	Otros	Total	%
Gral LaMadrid	94	17	17	42	170	22,9
Felipe Varela	102	133	65	50	350	48,2
Gral Sarmiento	120	62	19	21	222	28,0
Zona Oeste	316	212	101	113	742	100,0
% horizontal	42,6	28,6	13,6	15,2	100,0	

Fuente: Anuario Estadístico de la Prov. de La Rioja, entrevistas a informantes, y Secretaría de Planeamiento de la Provincia.

Cuadro Nro. 5: Estimación del empleo estable.

Sectores	G.LaMadrid	F.Varela	G.Sarmiento	Zona
Asalariados				
rurales	3,2	14,5	2,3	10,0
Mineria	1,4	6,8	3,5	5,2
Industria	4,1	13,2	2,6	9,4
Comercio	14,8	25,5	20,0	22,6
Salud	7,7	7,4	6,1	7,2
Educacion	7,7	15,2	20,0	15,1
Municipalidades	42,3	11,7	38,7	22,5
Otros s.publicos	18,8	5,7	6,8	8,0
Totales	(222)	(874)	(310)	(1406)

Fuentes: Anuario Estadístico, Secretaría de Planeamiento y entrevistas a informantes.

IV. Salud y nutrición

Desde un punto de vista comparativo, la situación de la salud pública en la zona Oeste presenta valores positivos. Es indudable que esta afirmación resulta más o menos verdadera según los criterios de valoración que se adopten. Un análisis algo detallado mostrará deficiencias agudas en varios aspectos de los servicios de salud en términos de parámetros fijos de deseabilidad, como así también situaciones críticas en indicadores del estado sanitario de la población. Pero si evaluamos la situación de la salud en términos de su evolución durante los últimos años o comparativamente a otras zonas de la Provincia o, especialmente, en relación a otros aspectos de la situación socioeconómica -como el ingreso y la ocupación-, el resultado resalta positivamente.

1. Institucionalmente, el sistema de salud de la zona está compuesto por:

- Un Hospital zonal en Villa Unión que cuenta con 3 servicios básicos: clínica médica (3 profesionales) pediatría (3) y tocoginecología (2), e infraestructura para cirugía (sin tener, actualmente, el especialista); radiología (1 técnico), laboratorio (limitado, atendido por dos bioquímicos) y odontología (2 profesionales). También cuenta con fisioterapeuta y 22 enfermeros (solo uno de ellos diplomado universitario) de los cuales, algunos actúan como agentes sanitarios del Programa de Atención Primaria de la Salud. Cuenta con internación diferenciada (31 camas).
- Un Hospital distrital en Guandacol, con 2 médicos generalistas (uno de reciente incorporación), quirófano para cirugía menor (pero carece de especialista) odontología (un profesional), laboratorio (recientemente incorporado un bioquímico), 9 enfermeros. Cuenta con 4 camas frías.
- Un hospital distrital en Vinchina, con 2 médicos generalistas, 1 odontólogo, quirófano para cirugía menor (carece de especialista), 11 enfermeros. Cuenta con 12 camas para internación.
- Un hospital seccional en Villa Castelli, con 2 médicos generalistas, un odontólogo y 9 enfermeras. Cuenta con 9 camas frías.
- Un hospital seccional en Pagancillo, con un médico rural y 3 enfermeras. No cuenta con servicio odontológico propio, aunque sí con consultorio e infraestructura mínima. El servicio es provisto dos veces a la semana por odontólogo de Villa Unión.

- 16 Centros Primarios de Salud (C.P.S.), distribuidos
2 en el departamento GLM, 9 en FV y 5 en GS.

En relación al tamaño de la población, la infraestructura institucional de la salud en la zona Oeste resulta satisfactoria, si se la compara con las restantes zonas sanitarias de la Provincia. En efecto, aún considerando las limitaciones que implica tal comparación (*), la zona resulta la más beneficiada (se excluyó del análisis la zona I, correspondiente a la Capital por sus características demográficas e institucionales demasiado disímiles a las restantes), con menor población por valor de su infraestructura institucional (ver cuadro Nro. 1).

Respecto a los CPS, los mismos cubren todas las localidades con más de 100 habitantes, con la excepción del Distrito Pueblo y El Horno en el departamento GS, en el primero posiblemente justificado por su cercanía al hospital de Vinchina. Ninguna de las localidades que carecen de tales centros alcanzan a una población de 50 habitantes.

La infraestructura institucional en salud ha tenido su momento de mayor expansión durante los años 70 (ver cuadro Nro.2): si en 1970 la zona contaba con 1 hospital distrital, 1 hospital seccional y 23 CPS (de los cuales, funcionaban solo 18), con un puntaje de ponderación de 25 puntos, en 1979 la composición del sistema era: 1 hospital zonal, 2 distritales, 1 seccional y 20 CPS (puntaje: 36). En 1985 se había agregado 1 hospital seccional más (Pagancillo), aunque habían sido suprimido 4 CPS (puntaje: 35). Es de destacar que una clínica privada con internación (10 camas) existente en 1979 dejó de prestar servicios en años recientes, concentrándose la atención de la salud prácticamente en el ámbito público.

La disminución en el número de CPS revela, en parte, el deterioro demográfico de las pequeñas localidades de la zona. De cualquier forma, en muchos casos su existencia era solo nominal o carecían de atención permanente. Ello se habría regulado en los 16 CPS actuales, aún cuando todavía se vertican demandas, como es el caso del Centro de Mina Delina (depto. FV), y aún de 2 nuevos CPS dependientes del hospital de Guandacol. También se indica déficit edilicio en algunos centros primarios en funcionamiento.

2. En cuanto a la capacidad para internación de la zona ya fue dicho que cuenta con un total de 43 camas (31 en V. Unión y 12 en

(*) Se asigna un valor de ponderación a cada nivel institucional de acuerdo a la siguiente escala: Hosp.zonal (5 puntos), hosp.distrital (4 pto.), hospital seccional (3 puntos), CPS (1 punto). El cociente entre la población total y la sumatoria simple de la ponderación practicada arroja un valor de habitantes por infraestructura institucional. Obviamente el indicador es imperfecto en cuanto no se tiene en cuenta ni las pautas de funcionamiento, dotación y eficiencia de los centros ni la particular estructura de asentamiento geográfico de la población de cada zona. Pero aún así da idea de la cobertura del servicio.

Vinchina) más 10 camas frías en Guandacol, V.Castelli y Paganillo. Comparado con las restantes zonas sanitarias, la Oeste posee una dotación de camas por habitante equivalente al promedio provincial: esto es, 4 camas por 1000 hab. (ver cuadro Nro. 3). En 1979 contaba también con 41 camas de internación, pero 10 de ellas correspondían al establecimiento privado. En tal sentido, el servicio público de internación fue incrementado en los últimos años (1982) en un 24% favoreciendo la concentración en el hospital de V. Unión.

3. La demanda de internación no parece encontrar obstáculos serios a su satisfacción si nos atenemos al siguiente dato: el porcentaje ocupacional de camas ha sido, como promedio anual de los años 1981/84, del 29%, contra un 40% correspondiente al total provincial. Tal porcentaje disminuyó regularmente desde un 34% en 1981 a un 24% en 1985. En este último año, el porcentaje ocupacional en el hospital de V. Unión fue de 29% contra solo un 7% del Hospital de Vinchina.

No obstante, la baja demanda de internación que registran los datos puede ser explicada por distintos factores: uno de ellos es la derivación de enfermos a otros centros hospitalarios. El total de derivaciones efectuadas por los centros de la zona Oeste, en relación al total de egresos de internación hospitalaria alcanzó, como promedio de los años 1981/84 a un 29%. Frente a ello contrasta el mismo porcentaje a nivel provincial: solo un 7,3% (*). Los porcentajes correspondientes a otras zonas indican la alta tasa de derivación propia de la zona oeste: zona I, 20%; zona II, 15%; zona III, 4%; zona V, 5%; zona VI, 3% (datos de 1984).

Esta relativa incapacidad de retención de pacientes puede deberse tanto a marcadas carencias de infraestructura y servicios adecuados, como a una política de extremar las derivaciones en aras de mejorar la atención del enfermo. El hecho de que la proporción de derivaciones sea superior a la de zonas con equivalente o inferior infraestructura decide más por la segunda alternativa que por la primera. Con todo, los informantes de la zona han señalado las dificultades que acarrearán las derivaciones de pacientes a Chilecito o la Capital para los familiares del enfermo. En efecto, ello supone un costo elevado en términos de los exiguos ingresos monetarios de la economía minifundista, por lo cual el médico debe tener en cuenta esta cuestión en su decisión de derivación. En el caso de Guandacol, la cercanía y centralidad urbana de Jáchal (provincia de San Juan) canaliza algunas derivaciones (que no serían computadas como tales, según la información estadística existente). Ellas, sin embargo, son posibles para los estratos más pudientes de la localidad, ya que el traslado -al no ser dictaminado por la autoridad sanitaria- supone un costo de transporte que debe ser solventado por el mismo paciente (un viaje en vehículo particular se cobra, actualmente, unos 60 australes).

(*). Elaboración propia de información extraída del Anuario Estadístico de la Prov. de La Rioja 1983-1984.

4. La zona resulta marcadamente deficitaria con respecto a algunos servicios hospitalarios centrales. Hasta ahora contaba con un solo laboratorio (en Villa Unión), agregándose ultimamente un laboratorio primario en Guandacol. Aún el de Villa Unión está limitado en sus funciones debiendo derivarse muchos análisis a la Capital. Ello crea dificultades al combate del mal de Chagas ya que, según informante, la tramitación de envío de material para análisis es lento y con frecuencia no se reciben los resultados, o solo tardamente. Por ello, se plantea como demanda significativa dotar de ampliaciones al laboratorio de Villa Unión.

Existen dos aparatos de Rx (en Villa Unión y en Vinchina) por lo cual se limita la atención urgente de traumatismos en los tres hospitales restantes, obligándose a derivaciones.

Una demostración del subdesarrollo de la zona Oeste en estos aspectos se observa en los cuadros 4 y 5. Los servicios de laboratorio equivalen al 44% de la población de la zona (promedio 1981/84), contra el 117% a nivel provincial. También es inferior el servicio radiológico y, marcadamente, el de farmacia. Esto último resulta especialmente problemático habida cuenta del desabastecimiento de farmacias particulares de la zona. Según informantes, las posibilidades de someter a pacientes con específicos son sumamente limitadas a tal punto que una cooperativa de productores, como veremos, tiene este cometido entre los objetivos de la organización. El servicio de cirugía menor es algo superior al promedio provincial y el alimentario está muy por encima de éste, a pesar de lo cual un informante hospitalario menciona la ausencia de partidas alimentarias para pacientes de camas frías.

Comparadas con las restantes zonas, la Oeste se ubica muy por debajo de las restantes en las prestaciones del servicio de laboratorio, y en radiología es superior solo a la zona VI. En cuanto a farmacia está muy por debajo de la zona I (Capital) y III (Chilecito) pero por encima de las restantes (cuadro Nro.5)

Aún cuando la prestación de tales servicios está determinada por una demanda variable de año a año, debe destacarse que entre 1981 y 1984 se ha producido una evolución negativa en algunos de ellos (ver cuadro Nro. 6). Tal es el caso del servicio radiológico, muy acentuadamente el de farmacia, el de cirugía menor y el de kinesiología. El servicio de laboratorio se incrementó, aunque con altibajos. También tuvo un crecimiento regular el de ropería y alimentario.

5. Una mejoría destacable se experimentó en materia de recursos humanos profesionales. En 1979 la zona contaba con 10 médicos, 2 odontólogos y 1 bioquímico. En 1985, la dotación de profesionales fue, respectivamente, 14, 5 y 2. Este incremento benefició a todos los centros hospitalarios de la zona como puede verse en el cuadro Nro. 7. Sin embargo, es insistente la demanda formulada respecto a la presencia de cirujanos y anestesista.

Disminuyó por otra parte, el número de enfermeras (58 a 54), de auxiliares (de 5 a 4) y de servicios generales (de 30 a 28), pero aumentaron los administrativos (de 5 a 10) y se incorporaron varios profesionales y técnicos (fisioterapeutas, radiólogos, etc.).

Como consecuencia de estos cambios, la relación de habitantes por médico mejoró senciblemente entre 1979 y 1985 (ver cuadro Nro.8). En 1979 equivalía a 1097 habitantes por cada profesional, muy superior al promedio provincial (714). En 1985 el índice de la zona se había aproximado mucho a este: 763 contra 709. Entonces, si el conjunto de la Provincia logró una mejoría del orden del 1%, la zona lo hizo en un 30%. La relación de habitantes por enfermera, en cambio, aumentó (de 189 a 198, un 5%) al igual que el conjunto de la Provincia aunque en ésta el proceso fue mucho más intenso (43%). Indudablemente, ello parece ser consecuencia de una política de concentración de recursos para la salud a nivel de profesionales. No obstante, llevado al extremo, tal política podría cuestionar la eficiencia del sistema de salud en el medio rural, donde el personal de enfermería desempeña un papel central. Como veremos luego, ello ser refleja en las demandas de autoridades hospitalarias al respecto.

6. Un indicador de la penetración del sistema de salud en el medio es la frecuencia de consultas médicas efectuadas. Tomando los 15 años que median entre 1970 y 1984, la proporción de consultas por habitante se incrementó sostenidamente (ver cuadro Nro. 9). De un 5,4 o/oo en 1970 se alcanzó un máximo de 20,3 en 1984. Se destaca igualmente el hecho de que tal crecimiento fue más intenso que el experimentado por el conjunto de la Provincia, llegando a ser superior el índice de consultas en la zona que en el total provincial. De igual sentido, pero con mayor intensidad, fue la evolución del índice de consultas odontológicas (ver cuadro Nro. 10). También en éstas se partió de un índice de la zona inferior al de la Provincia, invirtiéndose la relación en los años recientes.

7. Un signo más firme de la consolidación del sistema de salud institucionalizado en la zona lo constituye las variaciones en el porcentaje de consultas primerizas en relación a las totales (ver cuadro Nro. 11). En efecto, una población habituada a la consulta médica incrementará la proporción de quienes la reiteran, disminuyendo la proporción de quienes son atendidos por primera vez, a no ser que el crecimiento de la población por inmigración sea significativo, lo cual, como vimos, no es el caso que nos ocupa. En 1978, el porcentaje de consultas primerizas era del 75% sobre el total de consultas. En 1983 había descendido, luego de un proceso regular año a año, al 42%.

8. El mismo esfuerzo institucional del sistema médico se observa en la atención pediátrica. No contamos con información de series estadísticas que nos permita describir su evolución, pero la comparación con el resto de la Provincia sugiere la importancia de este servicio médico en la zona. Aún con la imperfección

metodológica que ello supone, hemos construido un índice de atención pediátrica como porcentaje de consultas de menores de un año respecto al total de nacidos en el mismo año (empleamos los datos de 1984). Un segundo índice relaciona las consultas a niños de un año con los nacidos en el año anterior y sucesivamente, combinando los cohortes de edad (ver cuadro Nro. 12). Aún cuando en el índice intervienen factores como la mortalidad, la cantidad de consultas por paciente, etc. no controlados en la fórmula propuesta, tiene valor comparativo entre conjuntos homogéneos. Puede verse, entonces, que el valor del índice de atención a menores de un año es casi el doble superior al promedio provincial y una vez y media más que el correspondiente a la zona I. Sigue siendo superior en consultas a niños de 1 año, pero resulta inferior en las edades de 5 a 9 y 10 a 14 años. En consecuencia, el sistema de salud de la zona ha priorizado, enfáticamente, la atención pediátrica de los dos primeros años de vida, pero con un cierto déficit en edades mayores.

Ello no necesariamente tiene por qué responder a una política deliberada de los agentes de la salud en la zona. Muy probablemente refleja una orientación particular de la población hacia la salud, en el sentido de buscar la atención profesional para las edades más vulnerables de la infancia y desatender la salud infantil cuando la probabilidad de muerte se reduce drásticamente.

Por supuesto, con estos datos no podemos avanzar en mayores interpretaciones, pero sugieren como hipótesis de trabajo la existencia de una orientación generalizada hacia la salud que tiende a limitarse a la disyuntiva entre la vida y la muerte, sin plena conciencia de la salud como desarrollo del individuo a través de su vida. Inculcar una concepción de la salud como un valor permanente de la vida cotidiana del individuo y no solo atendible en los momentos críticos de la enfermedad aguda y la muerte - de la misma forma que inculcar una concepción de la salud como conducta preventiva del mismo sujeto- es uno de los objetivos -si no el principal- del Programa de Educación para la Salud, y ello se ve claramente reflejado en el programa de charlas que dictan las autoridades sanitarias en la zona.

Otra interpretación, no necesariamente alternativa pero sí complementaria de la anterior, destaca la entrega de leche hasta la edad de 2 años como determinante principal de la consulta médica concentrada en las edades más bajas. Una y otra interpretación reflejan (sobre todo si se comparan los datos con los de la zona I, más urbanizada) el hecho de que la zona Oeste se encuentra en un estadio inicial respecto a la penetración de la medicina institucionalizada, restando aún esfuerzos importantes para lograr una plena aceptación del sistema por parte de la población.

9. Otro indicador de la penetración del sistema de salud pública en el medio es la proporción de nacimientos con atención médica en relación al total de nacidos vivos. Para el conjunto de la

zona tal proporción equivalía al 27% en el período 1970/72 (ver cuadro nro. 13); la misma proporción había crecido a un 83% en 1984, como consecuencia de una evolución constante. El mismo proceso se registró para el conjunto de la Provincia, aunque con un ritmo menor: el crecimiento acaecido durante los 15 años considerados fue del orden del 189% para la zona y del 94% para la Provincia. Es indudable que la dación de leche ha jugado un papel fundamental en esta evolución, pero también debe destacarse el proceso de desruralización de la población de la zona y su concentración en las áreas urbanas con lo que ello implica de más fácil acceso al hospital y una impronta cultural de mayor aceptación del sistema.

10. Esta evolución en cuanto a medicina general, odontología, pediatría y embarazos ha restado, indudablemente, campo de acción al curanderismo. Según informantes, éste no es un problema particularmente grave en la zona. Su existencia se reduce a la presencia de algún "entendido" en curaciones o de comadronas quienes, como vimos, han perdido bastante vigencia. No existe, en cambio, el curandero especializado y que actúa como profesional de su oficio, exigiendo pago por sus servicios. En realidad, más que por la penetración del sistema institucionalizado de salud, por el deterioro del estilo de vida rural, se ha ido perdiendo, según informantes, el conocimiento tradicional en materia de medicina natural. Al significado positivo que ello implica se le contrasta un efecto negativo. A decir de un informante médico, el sistema adolece de una falta de complementación entre la medicina científica y la natural. La función de ello sería particularmente importante en materia de provisión de medios curativos: como ejemplo proponía la imposibilidad de los enfermos hipertensos residentes en zonas alejadas de mantener la regularidad de un tratamiento. La limitación -tanto física como económica- de obtener los específicos adecuados condena dramáticamente la vida de tales pacientes. En el campo de la medicina natural podrían existir medios supletorios que atemperaran el problema. Indudablemente ello exige una serie de estudios de largo plazo cuya concreción escapa al sistema de salud de la zona.

11. Aún cuando la tasa de mortalidad infantil es sumamente fluctuante año a año -debido al reducido universo de casos correspondientes a la zona-, a lo largo de los 15 años desde 1970 a 1984 se registra un descenso constante (ver cuadro nro. 14). En efecto, el promedio de 1970 a 1972 fue del 50 o/oo, contra el 34 o/oo de 1982/84. Una evolución semejante, pero más intensa fue la del total provincial; las tasas correspondientes a éste se mantuvieron casi siempre por encima de las de la zona Oeste. Es indudable que la tasa de mortalidad infantil no expresa solo la eficiencia del sistema de salud. Aún cuando el crecimiento de la atención médica de los partos y de las consultas hospitalarias insiden decididamente sobre la probabilidad de sobrevivencia de los recién nacidos, también un conjunto de aspectos socioeconómicos son responsables de lo mismo. Como veremos, al respecto la zona no ha evolucionado favorablemente durante el período en aspectos tales como la situación habitacional y el

nivel de ingreso de la población, por lo cual la disminución de la tasa de mortalidad infantil debería ser principalmente explicada por un mejoramiento sensible del sistema de salud pública, a contrapelo del deterioro económico de la zona.

12. Uno de los aspectos de tal mejoramiento -aparte de los ya indicados- es el correspondiente a inmunizaciones. No tenemos información seriada como para evaluar su evolución en los últimos años, pero los informantes han enfatizado la constante ampliación de su cobertura la cual, en el presente, no constituye un problema a destacar. Informes parciales sobre las inmunizaciones practicadas durante 1985 indican un total de 1253 dosis de Sabin Oral para los departamentos FV y GS (no existen datos para GLM), 466 de BCG, 289 de antitetánica, 596 de Triple, 250 de Doble para niños, 141 de Doble para adultos y 168 de antisarampionosa. Carecemos de datos metodológicos que nos permitan evaluar proporcionalmente la cobertura de estas acciones.

13. El Programa de Atención Primaria de la salud ha sido otro instrumento capital para la aproximación de la salud a la población rural de la zona. Los informantes evalúan los resultados del programa como positivos marcando, no obstante, la carencia de recursos, especialmente de medios de movilidad que permita el acceso a residentes en zonas de difícil acceso. En cuanto al número de agentes sanitarios (un total de 24 para toda la zona) es elevado si se compara la situación de otras regiones de la Provincia. En efecto, por cada 10.000 habitantes, la zona IV (Deste) cuenta con 22,3 agentes contra 3,2 en la zona I, 13,3 en la II, 11,0 en la III, 5,2 en la V y 19,2 en la VI. Sin embargo, cuenta con un solo vehículo automotor (contra 2 y 3 en otras zonas) y 3 motocicletas (contra 8, 6 y 5 en otras zonas). A éstos se agregan 7 bicicletas de obvio uso limitado (ver cuadro Nro. 15).

14. Hemos señalado la importancia de la entrega de leche a embarazadas y niños de hasta 2 años como un factor clave en el mejoramiento y cobertura de la atención pediátrica. También en este aspecto la zona se encuentra en una situación relativamente privilegiada (ver cuadro Nro. 16). Las raciones anuales totales variaron entre 11.000 y 12.000 entre 1981 y 1983. Un incremento mayor durante esos tres años experimentó la provincia en su conjunto (de 97 a 126 mil raciones). Pero si consideramos el número de raciones por el total de consultas médicas efectuadas entre niños de 0 y 1 año, la posición de la zona es senciblemente superior a la de la Provincia: un promedio anual de 2,8 raciones por consulta en la zona Deste y un promedio de 1,5 a nivel provincial.

Debe destacarse, no obstante, que la información parcial correspondiente al año 1985 (carecemos de datos para el departamento de GS), indica un descenso pronunciado en la dación de leche. En FV cayó de un total de 8.500 raciones en 1983 a 3.100 en el último año; en GLM, de 1.300 a solo 400. Esto es coincidente con la queja en la discontinuidad de abastecimiento por parte de los informantes entrevistados, aunque asimismo se

señala una aparente regulación en lo que va del año en curso.

15. Pero las quejas más pronunciadas se formulan en relación al Programa antichagásico. Al respecto, las campañas de desinsectación no tienen la regularidad necesaria. Ya fue mencionado la falta de coordinación y comunicación en relación a resultados de análisis de eventuales chagásicos realizados en la Capital. Los operativos de diagnósticos en zona tampoco tienen continuidad, afectando consecuentemente la predisposición de los enfermos a someterse a tratamientos y cuidados necesarios.

La zona Oeste, sin embargo, es de las menos afectadas por la enfermedad de Chagas. Los casos registrados (aunque los métodos de detección no tienen suficiente eficiencia en la zona como ya fue sugerido) alcanzaron a un promedio anual entre 1980 a 1984 de algo menos de 6, equivalente a 0,5 casos por cada 1000 habitantes. En el mismo lapso, la provincia alcanzó un promedio anual de 1,2 casos por millar de habitantes. La diferencia es suficientemente notable como para ser destacada (ver cuadro Nro.17).

16. En cambio, en términos relativos, otra endemia resulta particularmente grave a la zona: la brucelosis. Los 17 casos anuales detectados equivalen a un 1,6 o/oo, contra el 1 o/oo propio del nivel provincial. La tuberculosis alcanza a valores semejantes al conjunto de la Provincia: 0,3 contra 0,2 o/oo habitantes. Según informantes el control de esta enfermedad estaría encarado de manera más eficiente, aunque en los hospitales chicos se enfrenta el problema de la imposibilidad de realizar análisis clínicos.

En términos generales, y a decir de los profesionales consultados, la zona no presenta enfermedades endémicas o epidémicas notoriamente extendidas. En la infancia los cuadros típicos refieren a parasitosis intestinal principalmente atribuible a la calidad de agua de consumo humano y a la convivencia con animales. Como vimos en otra sección la provisión de agua potable está sumamente generalizada aunque aún se presentan problemas de calidad. Los esfuerzos realizados a través de los agentes sanitarios para inculcar el hervido y clorado de aguas no habría tenido hasta el momento un resultado claramente positivo.

En las zonas dependientes de Guandacol y Pagancillo se da con frecuencia neumopatías originadas en el trabajo minero. Otras patologías típicamente laborales son las derivadas del trabajo de recolección de cachina. Dada la lejanía creciente en que se encuentra el producto (por efecto de sobre explotación), el cosechero debe pasar varias jornadas a campo abierto en épocas particularmente frías, con un efecto directo sobre su salud. También tal práctica laboral lo expone a picadura de víboras las cuales no son infrecuentes. Por último, se registran varios casos de alergias a la piel por el contacto de hierbas perjudiciales y el uso de calzado inadecuado.

Las cardiopatías son también otro grupo de enfermedades más o menos frecuentes. Estas suelen tener un doble origen: la infección chagásica y el trabajo minero. La hipertensión arterial entre adultos de edad avanzada registra numerosos casos agravados por el efecto de la altura y la carencia de remedios en dosis regulares.

También se ha señalado como relativamente frecuente casos con cuadros convulsivos durante la segunda infancia. El informante atribuye a ello traumatismos de parto y parasitosis. En el mismo sentido, los datos aportados por un estudio realizado recientemente sobre discapacidad atribuye a la zona oeste una proporción de casos sumamente elevado en relación a otras zonas: un 25 o/oo hab. contra un 5 a un 15 o/oo en otras zonas consideradas (ver cuadro Nro.18). Los tipos de discapacitaciones más frecuentes son neuromotoras (35% de los casos), y dificultades para ver (22%). El peso porcentual de las restantes son: dificultad para hablar (14%), dificultad para oír y aprender (9% en ambas), convulsiones (8%) y problemas de comportamiento (3%).

17. Los profesionales de la zona no destacan a la desnutrición como un problema social. Los pocos casos hallados se atribuyen más a pautas de cuidado del niño que a carencias en la dieta alimentaria de la familia(*). De hecho ésta se considera relativamente equilibrada, donde los productos cárneos cubren una porción importante del alimento. No obstante, se destaca la falta de verduras, ya que, como fue comentado, el cultivo de la huerta familiar es poco frecuente. El abastecimiento de tales productos se realiza mediante importación de otras zonas de la provincia o San Juan.

En relación al problema alimentario, el P.A.N. cumple un papel destacable. Según informante, el programa cubre cerca del 90% de la población de la zona y su contribución equivale a un 25% de la canasta alimentaria de una familia. Desde el inicio del programa no se han producido bajas por cambio de la situación socioeconómica de los beneficiarios, sino por emigración de los mismos. Se atribuye, no obstante, algún grado de influencia en el freno de la emigración en la medida que contribuye a completar el ingreso de las familias.

En cuanto a la faz organizativa, para la distribución se cuenta con la colaboración de los hospitales, maestros, municipios y aún particulares. La relación con el poder público local se habría visto enrarecida en los últimos tiempos de tal forma que algunas municipalidades habría dejado de colaborar con el programa. No deja de insistirse en la polémica de orden política que suscita el programa, en la medida que es visualizado por un sector como instrumento de captación electoral por la oposición del actual partido gobernante en el orden local.

(*). Un estudio sobre nutrición y evaluación del programa de comedores escolares está llevando a cabo el CIDES, dependiente de la OEA, estimada su finalización durante el corriente año.

Cuadro Nro.1: Nivel institucional de la salud por zonas sanitarias (1984)

Zona	Hosp. zonal	Hosp. distr.	Hosp. secc.	CPS	Ponderacion	hab./ ponder.
II	1	1	3	22	40	357,5
III	1	2	3	24	46	634,7
IV(oeste)	1	2	2	16	35	308,6
V	1	4	1	36	60	353,3
VI	1	1	1	26	38	410,5

Valores de ponderación: Hosp.interjurisdic. (7); hosp.zonal (5) hosp.distrib. (4), hosp.seccional (3), CPS (1).

Fuente: Secr.Estado Salud Pública, Prov.La Rioja, información primaria.

Cuadro Nro.2: Evolución del nivel institucional de Salud pública.

Depart.	Hosp.zonal			Hosp.distr.			Hosp.secc.			CPS			Total		
	1970	79	85	70	79	85	70	79	85	70	79	85	70	79	85
GLM								1	1	4	3	2	4	4	3
FV		1	1	1	1	1				1	12	11	9	13	12
GS					1	1	1				7	6	5	8	7
Zona		1	1	1	2	2	1	1	2	23	20	16	25	24	21

Fuente: Diag. Regional Zona Oeste y cuadro nro. 1.

Cuadro Nro.3: Camas disponibles por 1000 hab.

Zonas	total camas	por 1000 hab
I	273	4
II	46	4
III	137	5
IV	41	4
V	101	5
VI	40	3
Total	638	4

Cuadro Nro.4: Prestaciones de servicios varios. Porcentaje sobre población (promedio 1981-84)

	Laborat.	Radiolog.	Farmacia	Cirugía	Alimentac.
Zona Oeste	44,4	8,9	26,8	2,7	8,4
Provincia	117,4	12,0	221,5	2,2	1,5
Fuente: Anuario Estad. Prov.La Rioja, 1983-84 y CNP 1980 (elaboración propia)					

Cuadro Nro.5: Numero de prestaciones por 1000 hab.

Zona	Laboratorio	Radiología	Farmacia
I	100,1	10,4	291,7
II	102,1	12,4	4,9
III	101,4	14,2	49,1
IV	55,5	9,5	14,1
V	223,8	15,0	12,9
VI	113,4	7,4	10,5

Fuente: idem cuadro nro.4

Cuadro Nro.6: Rendimiento hospitalarios en zona oeste (% de incremento; 1981=100)

Servicios	1981	1982	1983	1984
Laborat.	100	132,7	66,5	134,5
Radiolog.	100	105,0	60,0	96,0
Farmacia	100	47,7	46,7	29,2
Cirug.menor	100	113,5	67,5	54,0
Kinesiolog.	100	97,8	88,8	52,1
Atenc.domic.	100	527,3	-	-
Partos	100	119,5	100,5	91,3
Ropería	100	100,0	116,4	124,1
Alimentac.	100	-	124,7	129,2

Fuente: idem cuadro nro.4

Cuadro Nro.7: Cantidad de profesionales de la salud

Hospital	1979	1986
V.Castelli	1	3
Vinchina	2	3
Villa Union	9	13
Guandacol	1	2
Pagancillo		1
Total	13	22

Fuente: Diag.Reg (op.cit) e Informe Salud,
Jefe zona IV, 1986

Cuadro Nro. 8: Cantidad de hab. por medicos y enfermeras

	medicos		enfermeras	
	1979	1986	1979	1986
Zona Oeste	1097	763	189	198
Provincia	714	709	221	317

Fuente: cuadro nro.7 y CNP 1980

Cuadro Nro.9: Evolucion de las consultas medicas por 1000 hab.

	1970	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
Zona	5	6	8	9	12	18	17	11	8	12	16	15	20	17	20
Prov.	7	7	8	11	14	24	23	23	20	20	19	19	19	17	17

Fuente: Anuario estad. (1981-82 y 1983-84) y CNP,1980
(elab.propia)

Cuadro 10: Evolucion de consultas odontológicas por 1000hab.

	1970	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
Zona	0,4	6	1	1	2	2	3	2	3	3	4	4	6	5	5
Prov.	1,1	6	2	2	4	6	7	6	5	5	3	3	3	3	2

Fuente: idem cuadro Nro. 9

Cuadro Nro.11: Porcentaje de consultas efectuadas por primera vez sobre total de consultas médicas (Zona Oeste)

1978	74,9
1980	59,1
1981	69,2
1982	50,9
1983	42,2

Fuente: Anuarios Estad. (1981-82 y 1983-84)

Cuadro Nro.12: Consultas pediátricas como porcentaje de la población en la edad (*), 1984

	Nacidos vivos (1984)	Nacidos vivos (1983)	pobl.menor a 5 aós	pobl.5 a 9 en 1980
Zona Oeste	13,1	6,2	1,0	0,8
Zona I	5,1	3,7	2,2	1,6
Provincia	7,3	4,8	1,7	1,3

(*) Explicación en el texto.

Fuente: Anuarios estadísticos citados. Elaboración propia.

Cuadro Nro.13: Partos atendidos en establecimientos como % del total de nacidos vivos

Dptos.	1970/2	1973/5	1976/8	1979/81	1982	1983	1984	crec. 70/84
GLM	11,1	56,3	53,6	80,0	80,0	88,5	90,6	716%
FV	32,2	37,4	45,9	54,3	73,8	74,9	84,6	162%
GS	25,2	50,6	60,2	54,9	60,3	61,9	73,1	190%
Zona	28,6	42,3	49,6	57,1	71,6	73,4	82,7	189%
Prov.	33,9	39,8	51,2	55,7	55,9	58,5	65,9	94%

Fuente: Anuarios Estad. Elaboración propia.

Cuadro Nro.14: Evolución de la mortalidad infantil (o/oo)

Dptos.	1970/72	73/75	76/78	79/81	1982	1983	1984
GLM	58,0	48,5	44,6	30,0	52,6	76,9	---
FV	47,1	50,2	47,3	48,6	28,9	21,8	35,2
GS	54,8	78,0	66,1	60,3	35,1	58,8	63,5
Zona	49,9	56,1	50,7	49,1	31,2	33,0	38,0
Prov.	71,5	52,8	50,7	44,6	41,8	37,8	40,8

Fuente: Anuarios Estad. Elaboración propia.

Cuadro Nro.15: Recursos en movilidad Programa Atención primaria de la salud.

Tipo movil.	Central	Zona 1	II	III	IV	V	VI	Total
Automotor	1	2	2	3	1	1		10
Motocicleta	2	8	6	5	3			24
Bicicleta	9	4	4	5	7			29

Fuente: Secr.Estado Salud Publ., información primaria.

Cuadro Nro.16: Programa Materno infantil: dación de leche (en miles de raciones) y % sobre consultas pediátricas de 0 y 1 años

Departamentos	1981	1982	1983	1985
Raciones totales (en miles)				
GLM	1,3	1,7	1,3	0,4
FV	7,0	7,7	8,5	3,1
GS	2,7	2,6	2,1	s/d
Zona Oeste	11,0	12,0	11,9	s/d
Raciones/consultas de 0 y 1 año				
Zona Oeste	3,1	2,5	2,8	-
Provincia	1,4	1,5	1,7	-

Fuente: Anuarios Estad. e Informe Salud, Jefe Zona IV, 1986 (elaboración propia)

Cuadro Nro.17: Casos con enfermedades endémicas (prom.1980-84)

		Zona Oeste	Provincia
Brucelosis	Total	17,4	165,4
	Por 1000 hab.	1,6	1,0
Chagas	Total	5,6	198,2
	por 1000 hab.	0,5	1,2
Tuberculosis	Total	2,8	28,6
	por 1000 hab.	0,3	0,2

Fuente: Anuarios Estad. Elab. propia.

Cuadro Nro.18: Número de discapacitados por 1000 habitantes

Zona I	s/d
II	12,3
III	5,4
IV	24,5
V	s/d
VI	14,7

Fuente: Programa Rehabilitación de discapacitados físicos.

V. Educación

Una primera aproximación al análisis de la situación educacional de la zona exige ponderar los niveles de alfabetismo y de escolarización, como indicadores primarios de la extensión y eficiencia del sistema educacional.

En 1980, del total de 8800 habitantes con 6 ó más años de edad, un 91% había tenido alguna experiencia escolar. Tal porcentaje era relativamente menor a lo registrado para el conjunto de la Provincia, de un 94% . En tal proporción, los tres departamentos revelaban valores semejantes, siendo levemente más bajo el correspondiente a GLM (89%).

Tomados estos porcentajes según edades de la población, la zona revelaría una relativamente alta penetración del sistema educacional de antigua data. En efecto, los porcentajes de experiencia escolar (tanto los que actualmente concurren a la escuela como los que lo hicieron en el pasado) se mantienen elevados, por encima del 90% hasta el grupo de edad de 40 a 49 años. Recién entre los habitantes que superan tal edad, la proporción sufre un descenso brusco: solo un 78% . La misma conclusión puede afirmarse para los tres departamentos, con la salvedad que en términos de alcance del sistema educacional resulta más beneficiado FV y más marginado GS. Por ejemplo, si tomamos el grupo de edad 40-49 años, aquel departamento revela una cobertura educativa del 90%, el de GLM 88% y el de GS solo el 84% . En cambio, no existen diferencias evidentes con respecto a edades menores a los 30 años, ya que en ellas, la cobertura educacional es equivalente en los tres departamentos. Ello sugiere el relativo retraso histórico que sufrió GS en cuanto a la expansión del sistema educativo, lo cual es coincidente con observaciones comentadas en otros capítulos respecto a la mayor marginalidad del mismo.

Si bien para el total de la población mayor a los 5 años, el alcance del sistema educativo zonal es levemente menor que el provincial, como fue dicho, la mayor proporción en éste de población de más de 50 años con experiencia escolar sugiere que la zona ha sufrido un proceso de postergación histórica respecto a la penetración de la educación primaria. En efecto, comparado con el 78% de experiencia escolar entre los mayores de 50 años en la zona, en el conjunto de la Provincia los valores alcanzan al 94%, 91%, 89% y 84% en los grupos de 50 a 54, 55 a 59, 60 a 64 y 65 años y más, respectivamente.

Tomando un largo período histórico se concluye que los esfuerzos realizados para expandir el sistema educacional fueron equivalentes para la totalidad de la Provincia como para la zona Oeste en particular. La tasa de analfabetismo, que en 1947 alcanzaba a nivel provincial al 18% descendió al 5,8% en 1980(*)

(*) La comparación entre ambas fechas no es totalmente válida, ya, que el indicador de analfabetismo no fue considerado en el último censo. Lo suplantamos con el dato de no-experiencia escolar.

esto es, una disminución del 68% durante el período. En cuanto a la zona, el analfabetismo descendió desde un 28% a un 9,5% en el mismo período, resultando un descenso del 66%. Con todo, si consideramos la mayor proporción de población de edad avanzada en la zona que en el conjunto provincial -lo cual insinúa negativa sobre la tasa de alfabetismo y escolaridad-, debemos suponer que el impacto de la expansión del sistema educativo en la zona fue relativamente mayor que en la Provincia.

La edad de ingreso oficial a la escuela primaria de 6 años cumplido distorsiona el valor de asistentes de tal edad que registra el censo, ya que dada la fecha de relevamiento (mes de octubre) es obvio que son varios los que cumplieron tal edad en meses previos al censo sin haber podido ingresar al ciclo lectivo del mismo año. Por lo tanto, el hecho de que solo el 66% de los niños con 6 años asistieran a la escuela no debe ser interpretado como una extendida pauta de retardo del ingreso. Más válido para analizar esta pauta es, en cambio, la edad siguiente de 7 años. Entre los que declaran tal edad son un 92% los que concurren a la escuela (incluyendo entre ellos a un 2% que actualmente ya no concurren, pero a los cuales no podemos atribuirles un abandono definitivo).

Si tenemos en cuenta que la misma proporción se eleva a 96 entre los niños de 8 años y a 98% entre los de 9 años (a partir de la cual se estabiliza en esos porcentajes), podemos deducir que en la zona se manifiesta una cierta pauta de retardo en el ingreso que afecta a niños de hasta 8 años. Este retardo es más acentuado que a nivel provincial: en efecto, el porcentaje de asistencia a la edad de 6 años es, a este nivel, del 85% (contra el 66 de la zona); a la edad de 7 años, de 96% (contra el 92 de la zona), y a la edad de 8 años, de 98% (contra el 96 de la zona).

Con respecto al retardo en el ingreso, los departamentos presentan diferencias notables: en ello, GLM presenta la situación más crítica si consideramos que el porcentaje de asistentes (actuales y pretéritos) de 7 años de edad solo alcanza al 80%: en el caso de FV, se ubica en el 94% y en el GS, en un 95%. El fenómeno del retardo está normalmente asociado a la accesibilidad de la población al establecimiento escolar, incluyendo en ello la distancia que deben recorrer los alumnos, la rigurosidad del clima, etc. Por ello mismo, el retardo del ingreso suele ser más pronunciado en las escuelas rurales que en las urbanas. Hemos observado que el departamento GLM es el que cuenta con menor concentración urbana, lo cual podría explicar el mayor retardo en la edad de ingreso al sistema educativo.

La imagen positiva que indica la elevada proporción de población con experiencia escolar, se desdibuja si tenemos en cuenta hasta qué punto tal experiencia implica la finalización del ciclo primario. Del total de población que asistió a la escuela primaria, solo un 44% finalizó el ciclo. En contraste con ello, la misma proporción a nivel de toda la provincia alcanza al 50%. Respecto a esto también existen notables diferencias entre

los departamentos: GLM solo el 38% logró completar el ciclo primario, GS, el 44% y FV el 47% .

Observado el tema en términos de grupos de edad, se concluye que la penetración del sistema educacional primario en la zona se ha desarrollado históricamente en un primer esfuerzo de brindar experiencia escolar a la población y en un segundo momento mejorando su eficiencia para lograr la finalización del ciclo. Habíamos observado que la escolarización se mantenía constante por encima del 90% hasta el grupo de edad de 40-49 años, para luego bajar abruptamente a partir de los 50 años. Pero la promoción o finalización de la escuela primaria se mantiene en torno a un 70% desde los 17 a los 30 años, para descender luego rápidamente a partir de tal edad: 58% en la población con 30 a 39 años, 44% entre los de 40 a 49 años y 21%, entre los habitantes mayores de 50 años.

La asistencia a la escuela primaria prácticamente desaparece a los 18 años. Con todo, en todos los grupos de edad posteriores se registran porcentajes mínimos de asistencia, en parte debido a errores de información y, en parte, a la actuación de la educación para adultos. Sin embargo, su proporción es insignificante. Puede observarse, entonces, que la eficiencia del sistema educativo primario en cuanto a finalización del ciclo se ubica, actualmente, en torno al 70% . Tal finalización se logra, sin embargo, gracias a un marcado retraso en el egreso del ciclo: si la edad normal de finalización está definida a los 13 años de edad, la proporción de los que han terminado la escuela a esa edad alcanza, para la zona Oeste, a solo el 13% . El porcentaje de finalización asciende al 28% entre la población de 14 años, al 46% a los 15 años, al 62% a los 16 para alcanzar el valor de estabilización a los 17 años, con un 72 % de egresados. A partir de allí, el que no completó la totalidad del ciclo abandona definitivamente el aprendizaje.

Comparado este retraso en la edad de egreso con el retardo en el ingreso antes analizado, se deduce que el primero no depende de éste. En efecto, el desfaseje de edades en la finalización puede estimarse en unos 4 años, contra un desfaseje en el ingreso de solo 2 años. Por lo tanto, ello revela algún grado de ineficiencia en el sistema que genera proporciones relativamente altas de repetición.

Por último, un hecho destacable puede referirse en relación al abandono de la escuela primaria: hasta los 13 años inclusive la proporción de personas que abandonan la escuela primaria sin finalizarla es notoriamente baja. En el cuadro respectivo el porcentaje más alto corresponde a los 12 años (casi un 5%), y algo menor, a los 11 (3%); pero en las restantes edades se ubica en un 2% o menos. La importancia de este dato consiste en que revela una fuerte adhesión de la población al sistema educacional primario; a pesar del papel laboral que desempeñan los niños en el medio socio-productivo desde corta edad, ello no obstaculiza su envío a la escuela.

A partir de los 14 años, en cambio, el porcentaje de abandonos comienza a incrementarse: 10, 13, 21, 19% hasta estabilizarse en un 26% en los 18 años.

El retraso en la edad de egreso (o abandono) de la escuela primaria es en la zona más marcado que en el resto de la Provincia. La comparación por edades es ilustrativa: a los 13 años de edad todavía un 83% continuaba asistiendo a la escuela, mientras que en el total de la Provincia, ello equivalía a un 68%. Las diferencias en las otras edades son: a los 14 años, 60% en la zona y 43% en la Provincia, a los 15 años, 37 y 22% respectivamente, a los 16 años, 15 y 11%. En cuanto al abandono de la escuela sin finalizarla, indicamos para la zona un valor próximo al 26% como medida de la eficiencia actual. A nivel provincial, la proporción de deserción o abandono sin finalización del ciclo se ubica en torno al 16%, el cual es más o menos constante entre la población que contaba en 1980 con 18 a 27 años de edad.

Escolarización preprimaria

En 1980, según datos del Censo Nacional de Población, asistían a nivel preescolar un total de 213 alumnos. Existían en ese momento 8 jardines de infantes de jurisdicción provincial anexados funcionalmente a escuelas primarias y contando, cada uno de ellos con una única sección a cargo de un docente.

Tales magnitudes habían significado una mejora significativa comparadas con la situación en 1970. Entre ambas fechas el número de establecimientos se incrementó en un 300%, el de alumnos matriculados en un 373% y el número de docentes se cuadruplicó. En los mismos años, las variaciones a nivel provincial fueron mucho más moderadas: 45, 78 y 91%, respectivamente. En realidad, los años 70 fueron los de la inauguración del servicio en la zona, ya que al comienzo del período, la zona contaba con solo dos establecimientos dedicados al nivel referido, ambos en el departamento FV.

Con posterioridad a 1980, en cambio, la evolución de la enseñanza preprimaria muestra signos de estancamiento. Tanto el número de establecimientos como el de docentes no sufrió variaciones, mientras la matrícula ha marcado una firme curva descendente, desde los 230 alumnos en 1980 a unos 192 en 1984 (según datos publicados en el Anuario Estadístico de la Provincia de La Rioja). Esta declinación se operó, curiosamente a pesar de las altas tasas de natalidad registradas durante los últimos años de la década del 70, la cual debería traducirse en un incremento de la matrícula 5 años después. Por el contrario, la disminución pone en evidencia el efecto emigratorio característico de la zona, cuya novedad en años reciente fue el traslado de familias enteras y no solo de personas solas.

La matrícula referida para 1980 equivale a una cobertura del 67% en relación al total de población de 5 años, amplitud significativa si se la compara con la cobertura de 1970, solo

equivalente a un 15% . No obstante, aquel valor es algo inferior al registrado para el total provincial: 72%

Escolarización primaria

La matrícula primaria en 1980 alcanzaba a 2795 alumnos, distribuidos en 32 establecimientos y atendidos por 150 docentes. A diferencia de lo señalado en el caso de la educación preprimaria, en ésta se evidenció una disminución de la matrícula durante los años 70 del orden del 9%, continuación de una tendencia similar ocurrida en la década previa: 7% . El departamento más afectado al respecto fue FV, con una reducción del 12% en el número de alumnos, seguido por GLM que sufrió una pérdida de matrícula del 10% . Es obvio que en la base de tal proceso se revela la emigración como causa principal: aún cuando el total poblacional de cada departamento no haya sufrido una reducción de la misma magnitud (inclusive GLM mantuvo el mismo número de habitantes entre 1970 y 1980), la particular composición de la población migrante descontó potenciales demandantes del servicio escolar. También, reiteramos, este fenómeno indica la importancia de la emigración infantil -y consecuentemente, de la totalidad del grupo familiar- como ya fue notado en el análisis demográfico.

Sin embargo, el departamento con mayor tasa emigratoria, GS, incrementó la magnitud de su matrícula escolar. Parecería que durante el período, el sistema educacional logró avanzar en eficiencia a contrapelo del vaciamiento demográfico del departamento. Ello encuentra su explicación en las particularidades del movimiento poblacional en el departamento en cuestión oportunamente anotadas. En efecto, indicamos antes el intenso proceso de concentración de habitantes en la cabecera departamental en detrimento de localidades más ruralizadas, paralela a la fuga de población por migración extradepartamental. De hecho la fuerte urbanización acaecida beneficia al sistema educacional, en la medida que es en las zonas urbanas donde aquel actúa más eficientemente.

Con posterioridad a 1980 se registró un descenso en el número de establecimientos (de 32 a 30 en 1984, aunque en años intermedios funcionaron solo 29). Una tendencia semejante se revela a nivel provincial determinada por una política general de concentración escolar, la cual sin embargo solo afectó a 8 establecimientos de los 340 que existían en 1980. Pero a partir de 1982 se inicia un proceso de ampliación de la infraestructura institucional del sistema hasta alcanzar en 1984 un número de establecimientos superior al de 1980. De ello no ha participado, indudablemente la zona Oeste, justificado tanto por la reducción de la matrícula, como por la tendencia a la desaparición de las localidades. Es indudable que al respecto, el estado está llevando a cabo un esfuerzo importante en favor del mantenimiento de establecimientos educacionales cuya matrícula difícilmente justifiquen su existencia. Un ejemplo de ello, es la escuela de Paso San Isidro, con solo 10 alumnos. La tendencia decreciente de la población insita a los pobladores a atraer niños de otras

zonas con el fin de mantener la matriculación, quizá provocando con ello el mismo efecto de distanciamiento entre el hogar y la escuela que se quiere evitar manteniendo a la escuela con las puertas abiertas.

No solo por la necesidad de asegurar la proximidad de la escuela a la residencia de sus alumnos, sino también por el valor institucional de aquella como centro de identidad de la comunidad rural se justifica necesariamente el esfuerzo de mantener establecimientos que una medida mínima de eficiencia los cuestiona. Sin embargo, es posible que, a decir de informantes, algunos establecimientos próximos a localidades mayores, con buenos accesos, pero instalados en zonas prácticamente abandonadas, deban ser clausurados facilitando a sus alumnos el transporte diario a una escuela de mayor nivel. Tal es el caso, por ejemplo, de una escuela próxima de Villa Unión; se da en ésta la paradoja que algunos niños ubicados en su zona de influencia se trasladan diariamente a la escuela del centro. Que el mismo operativo abarque a toda la población escolar de la zona no parece ser imposible.

El número de docentes primarios se incrementó a partir de 1980 hasta 1983; pero en 1984 disminuyó, perdiendo 13 agentes. Ello fue responsabilidad, principalmente del departamento GS. La matrícula primaria, por otra parte, dibujó una tendencia más errática entre 1980 y 1984: disminuyó en 1981, aumentó en 1982 y se redujo más lentamente en 1983 y 1984. Según informante, el último año fue de incremento notable, aunque no estamos seguros que, dadas las pequeñas magnitudes de que se tratan, estas variaciones revelen una tendencia sistemática. De cualquier forma, consideramos que las variaciones anuales son efecto, más bien de los fenómenos demográficos, como la variabilidad anual de la natalidad y la mortalidad infantil o las irregularidades del proceso emigratorio; pero en ningún sentido estimamos que aquellas variaciones revelen comportamientos específicos de la población en relación a la educación o modificaciones importantes en la eficiencia del sistema educativo.

Cabe destacar, además, que la tendencia errática que dibuja la matrícula primaria en la zona contrasta con la evolución ascendente para el conjunto de la Provincia. Entre 1980 y 1984 ésta se incrementó regularmente año a año, totalizando un incremento del 13%. En tal sentido, la zona Oeste participa, cada vez menos, de la población escolar provincial.

Por último, el tamaño de los establecimientos primarios en términos de alumnos es, en la zona, inferior al conjunto de la Provincia: 84 y 99 alumnos, respectivamente. Los tres departamentos tienen diferencias notorias al respecto: GLM, con solo 3 establecimientos, tiene el promedio más alto -101 alumnos- debido seguramente al hecho de no contar con pequeñas localidades con escuelas propias. Por el contrario, FV y GS (85 y 74, respectivamente) cuenta con una estructura de asentamientos demográficamente deprimidos donde continúan en funcionamiento escuelas que antaño gozaban de una mayor matrícula.

VI. Infraestructura física y social

1. Respecto a la red vial que recorre a la zona Oeste no se han producido cambios a partir de los consignados por el Diagnóstico Regional de 1979. Los únicos tramos de ruta pavimentados son el de la ruta 26 que une Villa Unión con Patquía (pasando por Pagancillo) y el pequeño tramo de 20 km. de la ruta 40 entre la misma villa y Las Tucumanesas.

La estructura espacial de la zona fija su centro en Villa Unión, nodo principal de la red vial con la cual tienen conexión más o menos eficiente las restantes localidades. De tal forma, Villa Unión se focaliza como centro de influencia del resto de la zona, con la excepción de Guandacol que, por su proximidad al límite con San Juan, forma parte del área de influencia de la ciudad de Jáchal (tanto para el abastecimiento de bienes de consumo no cotidianos y en muchos aspectos de los servicios -como salud-, como para el empleo de algunos habitantes de Guandacol).

La comunicación vial entre Villa Unión y las localidades ubicadas al norte (Villa Castelli y Vinchina) encuentra obstáculos serios durante los meses de verano por el corte del camino en dos o tres puntos debido a crecientes. Es este uno de los reclamos más insistentes, considerándose que la interrupción vial afecta aspectos sensibles de las comunidades: traslados de enfermos al hospital de Villa Unión, transporte de uva a las bodegas ubicadas en la misma localidad, acceso de proveedores de mercadería, etc. Con alguna frecuencia las interrupciones se prolongan por varios días, tornando crítica la situación.

Similar problema, pero más agravado por el relieve y calidad del camino, presenta la comunicación vial entre Jague y Vinchina, y entre ésta y Casa Pintada. Localidades montañosas como Puerto Alegre y Mina Delina (en menor medida Aicuña) están comunicadas a través de huellas que normalmente exigen el tránsito de vehículos especiales. De ello conocen bien los médicos y agentes de salud que con frecuencia se ven con problemas de socorrer a casos de urgencia. Un caso referido en Guandacol es ilustrativo del problema: un accidentado de cierta gravedad debió emplear distintos medios de transporte (carro, caballo, finalmente automotor) para alcanzar el hospital, demorando 6 días la atención; tampoco el médico podía trasladarse a la zona por falta de vehículo adecuado -lo cual es un reclamo insistente del sector salud. La comunicación radial al centro hospitalario sobre el accidente fue inmediato; pero ello no disminuyó la impotencia de atender al enfermo. Hechos similares son frecuentes.

Una demanda enclavada en la conciencia de los pobladores es la extensión de la ruta 22 hasta la frontera con Chile. Inmediatamente se percibe el beneficio económico que ello reportaría a las localidades, sumado al hecho de que tal comunicación está inscrita en el mapa histórico de la zona. De ahí que las reivindicaciones por el camino participen de una aspiración de retorno a su antiguo esplendor. Sin embargo, desde una perspectiva más global, la extensión de la ruta 21 a

Tinogasta (unos 60 km.) y de ahí a Chile por el paso San Francisco podría ser una solución más rentable. Desconocemos la existencia de evaluaciones económicas de tales alternativas, desde el momento que el tema excede los objetivos del presente estudio.

En cuanto a la red vial intraurbana, cabe destacar los siguientes datos: 1 km. de asfalto de la calle principal de Villa Castelli y 50 cuerdas del mismo pavimento en Villa Unión. Existe un proyecto de asfalto de 14 km. en Vinchina y otro aprobado para la calle principal de Guandacol. Tales demandas han sido fuertemente sostenidas por los municipios, sin que en los últimos años se avanzara en este aspecto vial.

2. Casi todas las localidades cuentan con red eléctrica aunque se registran deficiencias del servicio en algunas de ellas. En el caso de Vinchina, la frecuencia de cortes se atribuye a la obsolescencia de los equipos. Algunas localidades de cierta importancia todavía carecen de este servicio: tal es el caso de Jague (departamento GS) y Paso San Isidro (FV), por ejemplo, ambas, casos relevantes de profundo deterioro demográfico. En términos generales, el problema eléctrico se traduce en la discontinuidad del servicio en algunas localidades (dependiendo de la antigüedad del equipamiento) y de su elevado costo comparativo. En este marco se inscriben las demandas de construcción de obras hidroeléctricas en la zona (aunque su principal justificación se formula en relación al regadío). Por último, la extensión de la red eléctrica de cada localidad abarca a la casi totalidad de las viviendas.

3. También la mayor parte de las localidades de la zona cuentan con servicio de agua potable con red domiciliaria. En FV el Municipio estima una cobertura del 80% de la población, restando solo localidades menores a los 50 habitantes. En ese límite se encuentra Paso San Isidro, la cual es abastecida con camiones tanques de no muy regular servicio según los usuarios. En GS el caso más notorio en cuanto a carencia de red es Jague para el cual existe, sin embargo, proyecto y trámite licitatorio.

Suponiendo una población equivalente al año 1980, podemos precisar el grado de cobertura de la red de agua potable (ver cuadro Nro. 1). En el caso de FV, considerando a las localidades mayores a los 50 habitantes, el 57% de las mismas cuentan con servicio. Los casos carenciados más notorios son Sta. Clara, Los Nacimientos, El Zapallar y Los Tambillos, con poblaciones entre 117 y 406 habitantes. La cobertura del servicio en relación al total de habitantes del departamento se estima en un 77%.

De las 2 localidades con más de 50 hab. de GLM, solo 1 cuenta con agua potable con red domiciliaria; el distrito Rivadavia con 113 hab. carece de ella, siendo la proporción departamental abastecida del 70%. En la misma proporción se ubica la cobertura de GS, a pesar que son varias las localidades sin abastecimiento: Alto y Bajo Jague (con 304 y 136 hab. respectivamente), Valle Hermoso (126) y Potrero Grande (106).

Además, en casi todas las localidades se registran deficiencias que en algunos casos reclaman soluciones de urgencia. Las causas son variadas: en Guandacol, problemas en el sistema de captación afecta con frecuencia la provisión tanto de agua para riego como para consumo humano, como ocurrió recientemente por un período relativamente prolongado. En Pagancillo, en cambio, el problema principal reside en la renovación de tanque dado que el actual presenta deficiencias serias y de urgente solución. En Vinchina, se requiere una extensión de la red, especialmente para el distrito de La Banda en el cual existen viviendas sin conexión domiciliaria.

Pero el rasgo común a todas las localidades es la insuficiencia de caudales y secciones para asegurar una dotación adecuada a toda la población. Ello se explica por el hecho de que las conexiones previstas originalmente fueron superadas por el crecimiento de las localidades. Aún en algunas de ellas que registraron disminución de población el problema es el mismo. En efecto, el impulso dado durante distintos períodos a planes públicos de vivienda incrementaron el número de conexiones domiciliarias más allá de la capacidad de la infraestructura. Actualmente, algunos conjuntos habitacionales a punto de ser habilitados no tienen aún asegurada la provisión de agua.

En localidades como Vinchina y Villa Unión, de alto crecimiento demográfico, el fenómeno es particularmente agudo. En el segundo caso, más que un problema de sección de la red se identifica un exceso de demanda en relación a la capacidad de las piletas de sedimentación, por lo cual, con frecuencia, el agua se distribuye con deficiencias en la calidad. Otro tanto ocurre en Villa Castelli, donde una piletta prevista para 100 usuarios debe atender a 400. Estos problemas se agudizan en verano debido, no solo al incremento del consumo por habitantes, sino también al retorno de familiares emigrados en calidad de visitantes. Por ejemplo, en aquella localidad debe ser complementada el agua captada en superficie mediante bombeo de agua subterránea.

4. Las localidades ubicadas sobre los principales troncos de la red vial de la zona gozan de transporte de pasajeros interdepartamental, con frecuencia diaria. Las principales localidades marginadas del mismo son: Aicuffa y los Nacimientos en FV y Alto y Bajo Jague, Valle Hermoso y Potrero Grande en GS. Solo las dos mayores cabeceras departamentales -Villa Unión y Vinchinas- cuentan con terminales de ómnibus.

La densidad de vehículos automotores es considerablemente baja en el conjunto de la zona. Carecemos, al respecto, de información completa, pero una muestra de ello es la cantidad registrada en Villa Unión: 47 autos, 10 motos y 4 camiones, en 1983. Ello da una magnitud de apenas 0,1 vehículo por hogar censal. Congruente con ello, solo Villa Unión cuenta con estación de combustible, aunque estaría a punto de concretarse la instalación de otra en Guandacol, justificada en su ubicación sobre la ruta interprovincial. Una demanda similar formulada por el Municipio, de GS para Vinchina, en cambio, carece de la misma justificación.

5. En cuanto a comunicación telefónica, dos cabeceras departamentales (V. Unión y Vinchina) cuentan con servicio de telediscado. Villa Castelli, en cambio, tiene cabina pública cuyo conmutador presenta deficiencias. Servicio telegráfico existe también para las cabeceras, y en FV para Guandacol, Pagancillo y Los Palacios.

Servicio postal con distribución domiciliaria existe en V. Unión, Guandacol, V. Castelli, Vinchina y Jague. Estafeta postal sin distribución corresponde a las localidades El Condado y Rivadavia, en GLM, y Los Palacios, Banda Florida, Aicuña, Los Tambillos y Puerto Alegre, en FV. Considerando el total de localidad con más de 100 hab., el servicio postal cubre el 70% de las mismas.

La captación televisiva incluye el canal provincial de La Rioja, con deficiencia el de Mendoza y el canal nacional ATC. Desconocemos, sin embargo, la cantidad de aparatos receptores en la zona. A decir de la concentración de público que se observa en bares ante transmisiones de interés popular, deben ser pocos. La captación de radioemisoras argentinas y chilenas es amplia, no registrándose problemas particulares al respecto; también desconocemos la difusión de aparatos receptores, aunque posiblemente ello no constituya un rasgo deficitario. En cuanto a comunicación, la instalación de telediscado telefónico y ampliación de la red televisiva fueron los avances más sencibles registrados en los últimos dos años.

6. El cuadro Nro. 2 provee información sobre la existencia de algunos servicios institucionales en cada departamento: registro civil, juzgado y receptoría de rentas. El cambio reciente a este respecto es la apertura de esta última en Guandacol. El cuadro nro. 3 refiere a algunos servicios prestados por las municipalidades, de lo cual se deduce que solo las cabeceras departamentales lo reciben.

7. Diversas son las acciones de carácter social encaradas por los municipios, algunos relacionados con "instituciones" de bien público de la zona. Ejemplos de las mismas se indican a continuación:

Departamento de Gral Sarmiento: Operativo antichagásico, respecto al cual la Municipalidad sostiene gastos (alojamiento, combustible, etc.) de las brigadas periódicas. Actualmente se encuentra en formación una brigada permanente dependiente directamente del Municipio. Con personal y fondos propios efectúa refacciones a edificios escolares y atención mecánica a vehículos hospitalarios. También se ha instituido un sistema de financiamiento para la refacción de frentes que se ejecuta con personal municipal. Acciones regulares son el pago de remedios, traslados y gastos de internación de población carenciada, y gestión de trámite de pensiones gratificables, cuya resolución no depende, sin embargo, del Municipio.

Departamento Gral La Madrid. El Municipio atiende gastos de 2

comedores infantiles (población no escolarizada hasta 5 años de edad). También gestiona trámite de pensiones, sobre lo cual se destaca, según informante, un cierto déficit (durante el primer semestre de 1986, por ejemplo, no fue aprobada ninguna solicitud). Existe proyecto de huertas escolares, con aportes del Municipio y la Provincia, aprobado y en ejecución. La compra de remedios y subvención de gastos de internación para carenciados es también una actividad regular de la secretaría de Acción Social. Con relación a las escuelas, provee de leña para el comedor escolar.

Departamento Felipe Varela. Pago de remedios contra presentación de receta y certificado de pobreza (en 1985 se giraron 500 australes en tal concepto), trámite de pensiones gratificables, entrega de materiales para reparación de viviendas (el Municipio cuenta con bloquera que facilita a los vecinos individualmente o combina su uso con otras instituciones como la parroquia). Provisión de mano de obra municipal para refacción de capilla. Entrega de material a usuarios para construcción de letrinas (en Guandacol). En relación a salud: servicio mecánico de ambulancias, provisión de drogas para pediculosis al hospital, subvención de gastos de traslados e internación. Respecto al sector educación: traslado de alumnos de Jardín de Infantes dentro de Villa Unión, provisión de refrigerios para días festivos, provisión de combustible para comedor escolar, mantenimiento de una escuela de deportes para niños. La falta de instrucciones de origen provincial para la instalación de comedor infantil impidió su concreción hasta el momento, a pesar de la existencia de fondos.

Puede destacarse que en la zona no existe un desarrollo institucional importante en relación a acción social, de tal forma que todos los esfuerzos recaen, prácticamente en el Municipio. Las principales instituciones de bien público -de carácter no oficial- que actúan en el medio son las parroquias (a pesar de la presencia de la institución católica Cáritas, su actividad es mínima) y las cooperadoras escolares y de hospitales, de eficiencia sumamente variable en ambos casos. Para dos establecimientos educacionales se registró la ayuda económica recibida por fundación de nivel nacional, y en otros casos la recepción de útiles, dinero, ropa, etc. por parte de antiguos vecinos emigrados. No tenemos una cuantificación de tales aportes, pero ellos no parece agregar un monto de ingreso importante a la mayoría de las escuelas. Los esfuerzos de la iglesia en materia de acción social se concentran particularmente en la cuestión habitacional: en combinación con la Municipalidad de FV que provee de mano de obra e instalaciones para la fabricación de bloques, se financian refacciones de viviendas; el reintegro de los fondos depende del nivel económico del beneficiario. También interviene en el fomento de acciones de solidaridad entre los pobladores mediante la realización de festivales y otros eventos para la recolección de fondos destinados a compras de remedios, traslados por motivos de salud, etc.

La inexistencia de empresas de envergadura en el medio excluye a

la zona de otra fuente de recursos que en otras zonas rurales se vuelca, ya sea a trabajadores de las mismas o a las localidades donde están emplazadas. Solamente se ha mencionado en las entrevistas donaciones realizadas por una empresa minera que beneficia particularmente a sus empleados. Los propietarios ausentistas de las pocas fincas vitíferas de envergadura tampoco canalizan fondos hacia acciones benéficas o comunitarias, por lo menos de manera más o menos sistemática. Tampoco hemos identificado que ello sea propio de las dos bodegas mayores cooperativizadas de la zona.

La revalorización del partido político con el retorno de la democracia agregó una nueva fuente de acciones sociales encaradas por las juventudes partidarias. Ello resulta particularmente notorio en el caso de la Juventud Peronista, quizá por su identidad política con los gobiernos municipales. No contamos con suficiente información como para describir su accionar, el cual, aparentemente se concentró en la cuestión vivienda. Al margen de las opiniones encontradas respecto al desinterés de sus esfuerzos en materia de acción social, es indudable que la presencia de tales organizaciones en el medio implica un enriquecimiento institucional de la zona y una instancia clave de participación social.

8. La infraestructura deportiva está representada en la zona por seis playones: 2 en Vinchinas y en V. Unión, y uno en Guandacol y V. Castelli, dos de los cuales se mantienen -desde relativamente largo tiempo, inconclusos. En las mismas localidades existen pistas para carreras cuadreras. En cambio, son varias las localidades que cuentan con cancha de fútbol: las cabeceras departamentales, además de Banda Florida, Pagancillo, Los Palacios Guandacol y Santa Clara. Cancha de básquet existe en 5 localidades de las nombradas. No hay, en cambio, ninguna pileta de natación en toda la zona.

Los clubes deportivos abundan en el departamento de FV (12 entre distintas localidades), a los cuales se suman 2 en Vinchinas y 1 en Villa Castelli. Su infraestructura, sin embargo, es escasa, con la excepción relativa de uno de Villa Unión, que tiene en construcción un playón para uso de toda la población con fondos de la Municipalidad. Según informantes, la actividad de los clubes es discontinua y solo restringida a la realización de algunos eventos deportivos. Solo muy marginalmente acúan como nucleadores de la vida social de los pueblos.

9. Una expansión notable ha experimentado -por lo menos nominativamente- la institución de los centros vecinales. En 1983 se registraron 5 de ellos en toda la zona que aumentaron a 10 en los dos últimos años. Sin embargo, existe coincidencia entre los distintos informantes respecto a la inoperancia de tales instituciones, salvando algunas excepciones. Con la información recogida es difícil aventurar un diagnóstico al respecto. Como causa general se señala la pobre actitud participativa de la población en instituciones, rasgo que afecta por igual a otras organizaciones como las cooperadoras, cooperativas, etc. También

organizaciones como las cooperadoras, cooperativas, etc. También podría suponerse que la falta de cometidos específicos y concretos adormece su accionar: como ejemplo por el contrario se menciona el centro vecinal del Barrio Guillermo Páez de Villa Unión: para el cual el cometido de construcción de viviendas por ayuda mutua le otorgó un dinamismo no habitual. También brindan una imagen más activa los de Pagancillo y Aicuña quienes tienen a su cargo la atención del servicio de agua potable, lo cual le otorga una identidad propia en el medio.

En algún caso se mencionó la existencia de rencillas políticas y el escaso diálogo entre partidos opositores que se entrometen en la necesaria articulación y colaboración entre el centro y las autoridades municipales. La contradicción entre lealtades políticas a que serían expuestos los pobladores por tales desavenencias entre dirigentes disminuyen necesariamente los estímulos de participación social. Es posible que a nivel departamental y local, la estructura política no presente una clara división e identificación de roles y funciones entre las distintas instancias de poder. En tal sentido, los papeles encarados por el ejecutivo municipal, el consejo municipal y el consejo vecinal pueden adolecer de superposiciones funcionales que no facilitan las relaciones de complementariedad y colaboración. Si a ello se suma la instrumentación de tales instituciones en la puja por el poder político local, las contradicciones pueden resultar paralizantes por lo menos para aquellas instituciones -como los centros vecinales- con menores recursos políticos y económicos para su accionar. Parecería necesario, entonces, profundizar los condicionantes de la dinámica política de las localidades y departamentos con el fin de identificar soluciones que otorguen a tales centros su carácter fundamentalmente participativo, piezas claves en el proceso de comunicación entre la población y el estado municipal.

Cuadro Nro.1: Cobertura de agua potable en la zona Oeste: a) % de localidades de 50 y más hab. con el servicio. b) % de hab. en localidades de 50 y más con agua potable sobre total de habitantes en localidades de ese tamaño. c) % de población en localidades de 50 y más hab. con agua potable sobre población total del departamento.

Departamentos	loc.de más pobl.de loc. de 50 hab	loc. 50 y mas hab.	% pobl.en loc.c/AP sobre pobl.depart.
Tot. c/AP	%	Tot c/AP	%

G. LaMadrid	2	1	50	894	781	87,4	70,3
F. Varela	14	8	57	6774	5708	84,3	76,6
G.Sarmiento	8	4	50	2201	1583	71,9	71,0

Total zona	24	13	54	9869	8072	81,8	74,5
------------	----	----	----	------	------	------	------

Fuente: información proveniente de entrevista a informantes calificados de la zona.

Cuadro Nro.2: Algunos servicios públicos no municipales

Departamentos	Reg.civil	Juzgado Paz	Rentas	Otras provinc.
---------------	-----------	-------------	--------	----------------

Gral LaMadrid				
V.Castelli	x	x	x	x

Felipe Varela				
Villa Unión	x	x	x	x
Guandacol	x		x	
Pagancillo	x			
Aicuña	x			

Gral Sarmiento				
Vinchina	x	x	x	

Cuadro Nro.3: Algunos servicios municipales

Departamento	Juzg.faltas	Matadero	Rec.residuos	Alumbrado
--------------	-------------	----------	--------------	-----------

Gral.LaMadrid	si	2 x semana	V.Castelli
Felipe Varela	con cama- ra frig.	diariamente	V. Unión Guandacol
Gral Sarmiento	si	2 x semana	Vinchina

VII. Conclusiones

Una síntesis muy general describe a la zona como una situación de intensas restricciones en el uso de sus recursos y deterioro en la generación de ingresos que intentan ser compensados con un considerable esfuerzo de transferencias por parte del estado, lo cual, estimamos, habría llegado al límite de lo posible.

Las restricciones del ingreso derivan, principalmente, de la rigidez que impone a la fase productiva el cuasi monocultivo agrícola agravado por su calidad de cultivo perenne que restringe la flexibilidad adaptativa del productor, por una parte, y la distorsión que implica para la estructura agraria la extensión del minifundio de tierra y agua, por la otra. A esto se agregan los problemas de titularidad de la tierra lo cual limita la posibilidad de transformaciones de aquella estructura a través de una operación dinámica del mercado de tierras. Aún más, la baja proporción de productores medios -ellos mismos amenazados por la minifundización y obligados a diversificar sus fuentes de ingresos y sus roles ocupacionales- destaca la ausencia de un sector articulador de la estructura productiva y dinamizador de alternativas de producción, como son las capas medias en otras zonas agropecuarias. El carácter ausentista de los propietarios de los pocos grandes viñedos de la zona -y el hecho de que cuenten con otras inversiones o actividades prioritarias en los grandes centros urbanos ajenos a la región- tampoco contribuye a, que tales explotaciones actúen dinámicamente, tanto intensificando su propia producción o derivando capitales a rubros alternativos dentro de la zona.

De esta forma, el minifundista y el pequeño productor quedan como actores prácticamente únicos de la escena productiva, sujetos frágiles, fácilmente vulnerables a las crisis periódicas -y ultimamente prolongada- del mercado de la vid. En la medida que el grueso de la economía zonal depende de ellos, es el conjunto de la zona la que sufre la vulnerabilidad del sistema productivo agropecuario. Ello lo hemos observado en hechos tales como la reducción del trabajo asalariado rural, la disminución de los rendimientos agrícolas, el deterioro del comercio de bienes y servicios locales y, por supuesto, el drenaje poblacional que caracteriza a la zona como una de las más afectadas de la Provincia.

En efecto, hemos estudiado con algún detalle la magnitud y características del proceso emigratorio que, aún siendo de calidad endémica revelaría una tendencia al agravamiento en los últimos años. El envejecimiento relativo de la población, especialmente rural, que ello trae aparejado compromete aún más las posibilidades de reactivación y generación de nuevas alternativas productivas al medio. La particularidad más reciente de la emigración que engloba a grupos familiares enteros agrava aún más el problema: en tanto la emigración se inscribe en la eliminación de los excedentes de miembros de cada grupo familiar -dada la imposibilidad de mayores subdivisiones de los predios agrícolas en parcelas que permitan el sustento de cada familia-,

no se cuestiona la misma producción agrícola; ésta continuará mejor o peor atendida por los miembros que quedan en la explotación pero difícilmente se clausurará su actividad. En cambio la emigración de grupos familiares ha puesto en cuestión la vigencia misma de las explotaciones, observándose numerosos casos de viñedos y alfalfares abandonados de difícil recuperación.

En este sentido debe resaltarse el concepto de recursos humanos en la óptica de análisis de los problemas poblacionales. Vista solo como cuestión demográfica, el problema emigratorio se valoriza ya sea en términos del costo social que implica la migración para sus protagonistas y los problemas de integración en los lugares de destino, ya sea en términos políticos que supone el vaciamiento geográfico de la zona, con el agravante de su cualidad de área de frontera. Observado el drenaje migratorio en términos de pérdida de recursos, en cambio, se cuestiona la vigencia de la zona como ámbito de generación de riquezas, proceso que afecta, no solo a sus habitantes (residentes y potenciales emigrantes) sino a la Provincia toda como unidad política y económica. De ahí que la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo de la zona no se inscriba solo en función de sus habitantes -y de sus ineludibles derechos de gozar de un adecuado nivel de vida en el lugar donde han nacido- sino también en función del desarrollo del conjunto de la Provincia. No es conveniente, entonces, valorar las acciones del estado hacia la zona en términos de suplir las carencias que soportan sus habitantes, solamente, sino en términos de destacar su valor como generador potencial de riquezas para el conjunto de la sociedad provincial.

Hemos dicho al principio que la economía de la zona se caracteriza por una fuerte transferencia de ingreso por parte del estado provincial y nacional. Ello se visualiza no solo en la amplitud del empleo público, sino también los recursos volcados en la satisfacción de necesidades básicas: nutrición, salud, educación, vivienda, etc. No hemos intentado calcular la magnitud de tal transferencia, pero si a ello sumamos los aportes privados de origen externos (casi exclusivamente los que remiten pobladores emigrados a sus familiares) la cuota de ingresos externos a la zona debe ser una proporción importante -si no superior en algunos años- a los autogenerados. La consecuencia lógica de ello es el grado de ineficiencia económica que supone la prestación de algunos servicios: el costo del empleo municipal no se condice, aparentemente, con la magnitud de los servicios prestados; el mantenimiento de escuelas con muy baja matrícula supone un esfuerzo particularmente elevado que tiende a deteriorar sus resultados; la infraestructura para los servicios de salud, aunque insuficiente, tiende a exceder los parámetros de costo-beneficio de zonas más desarrolladas.

No ponemos en cuestión la validez de estos esfuerzos, los cuales se justifican socialmente aún contradiciendo su justificación económica. Solo queremos destacar que la relación del costo de los servicios con los ingresos generados por la

producción de la zona adolecen de una marcada tendencia negativa, lo que pone en cuestión, permanentemente, la factibilidad de su mejoramiento. Ello agravado por el hecho de que no es ésta la única región provincial deprimida que reclama la protección del estado provincial.

Esta circunstancia pone coto a la intervención estatal. A pesar de lo expuesto, se multiplican en la zona las demandas dirigidas a los organismos públicos. Como ejemplo de ello hemos considerado una serie de reclamos formulados por distintos actores de las comunidades de la zona a la Provincia durante un período de 2 años (1982-84), sintetizados por la Secretaría de Planeamiento de la Provincia. Las 122 presentaciones de demandas formuladas por distintos medios se distribuyen de la siguiente forma según ámbito de aplicación:

- Obras hidráulicas: 25,4% referidas tanto a obras de defensa y captación de agua, como canales de riego e infraestructura para agua potable (incluye dos demandas sobre administración de riego)

- Infraestructura vial: 9,7% (refieren a afaltado de rutas y calles interiores de localidades)

- Energía eléctrica: 2,5%

- Comunicaciones: 8,2% (incluye TV, telefonía y correos en ese orden de importancia)

- Vivienda: 4,1% (solicitud de planes de ayuda mutua)

- Producción agropecuaria: 8,2% (incluye demandas de extensión agrícola, ampliación del plan alfalfa, radicación de colonias, préstamo de maquinarias, saneamiento de títulos)

- Radicación de industrias y promoción turística: 2,5%

- Cuestiones financieras: 7,4% (demanda por créditos promocionales y financiamiento de deudas impositivas)

- Educación: 13,9% (la mayoría refiere a construcciones y refacciones de establecimientos, pero también cobertura de cargos docentes, creación de nuevos establecimientos con orientación técnica, etc.)

- Salud y nutrición: 7,4% (la mayoría referido a construcción de centros de salud)

- Recreación y cultura: 3,3% (infraestructura deportiva)

- Emergencias sociales: 4,1% (aislamiento de comunidades, inundaciones)

- Otros: 3,3% (abastecimiento comercial, gestión en mercados externos, infraestructura administrativa de municipios, etc.)

No consideramos que la información indicada constituya una muestra representativa de las necesidades sentidas por la comunidad. Pero sirven como sugerencia de la magnitud de reclamos y de sus énfasis temáticos. Es indudable que la cuestión hídrica forma parte de los temas fundamentales de la zona en la conciencia de sus pobladores. Ello se percibe inmediatamente en las entrevistas realizadas donde la cuestión se interpreta como el condicionante de hierro de la postergación de la zona y su imposibilidad para ampliar su campo productivo. Comparativamente, la cuestión agropecuaria es tema de mucha menor demanda local: se diría que no existe una conciencia evidente de la necesidad de encarar innovaciones productivas en el sector si se considera que la demanda por extensión agrícola apenas aparece en tres reclamos. Quizá por una suerte de convicción de que el problema del minifundio y el saneamiento de títulos son irresolubles no se formulan como demandas de solución. Pero también es cierto que la solución a ambos problemas involucra gravemente el destino de muchos pobladores, y en esa medida quizá haya adquirido la naturaleza de tabú.

En los aspectos sociales, los educacionales son los que han recibido más atención en la muestra de demandas analizadas. Tampoco en ello se formulan cuestiones innovativas. En solo un caso se plantea la creación de un establecimiento de formación agrotécnica (lo cual fue cumplido), pero la mayoría de las demandas refieren a cuestiones constructivas y administrativas. Lo mismo puede indicarse en relación a la salud, respecto a la cual no se identifican reclamos por la calidad y variedad de los servicios, sino en general por la presencia física del establecimiento. En uno y otro caso podría interpretarse que las cuestiones de tipo innovativo son responsabilidad de los especialistas en la materia (maestros y médicos) sin que la comunidad como tal se atribuya el aval o la capacidad para formular tal tipo de reclamos.

Más libertad se otorga en cambio la comunidad para formular demandas en materia de infraestructura física de las comunidades (energía eléctrica, caminos, comunicaciones, agua potable); son necesidades inmediatamente sentidas por los usuarios a partir de los inconvenientes que generan para su vida cotidiana. Sería falso sin embargo, atribuir a la comunidad solo una conciencia de inmediatez; algunas demandas se inscriben claramente en una proyección de desarrollo que trasciende los problemas inmediatos: la construcción del camino a Chile, de la represa hidroeléctrica del Infiernillo, de la formación de una colonia agrícola sobre tierras incultas y la radicación de una planta de cemento son contados ejemplos de reclamos que se proyectan a una transformación estructural de la zona. Sin embargo, ellos no son muchos y aún cuando algunos están de continuo presentes en la opinión pública de la zona, no se han constituido en tópicos lo suficientemente fuertes como para generar formas organizativas comunitarias que breguen enfáticamente por su realización.

El cúmulo de demandas que indica la información analizada, sugiere la existencia de un grado de insatisfacción de

necesidades sentidas relativamente alto. Tales demandas están dirigidas obviamente al estado provincial (en algunos casos al municipal, pero desconocemos los mecanismos empleados y la magnitud de reclamos dirigidos al mismo) y es ya un lugar común afirmar el peso de sus restricciones presupuestarias que le limitan la posibilidad de darles respuesta. La magnitud relativa de sus esfuerzos en materia asistencial (englobando en ello todas las acciones encaradas con fondos nacionales y provinciales y referidos a distintos tópicos de servicios comunales, empleo y de carácter estrictamente asistencial) se aproxima, posiblemente, al límite de posibilidades de acción del estado. En tal sentido se podría describir a la relación entre la sociedad y el estado como la de una formulación continua de demandas de parte de la primera y respuestas aletargadas del segundo, en el doble marco de urgencias inmediatas y de necesidades de cambios profundos y de largo plazo de sus estructuras productivas. Dada la limitación de recursos presupuestarios, las acciones del estado tienden a satisfacer los requerimientos de urgencia, postergando casi indefinidamente las inversiones de mayor magnitud. Ello genera una conciencia de imposibilidad y de destino fatal de marginalidad que cercena las bases del desarrollo autogenerado a partir de la misma comunidad.

La salida emigratoria indudablemente conforma una respuesta necesaria a la situación. El proyecto individual de migración no solo se diseña a partir de un cálculo de posibilidades inmediatas en la zona de residencia, vis a vis las oportunidades que ofrece el lugar de destino. La acción de migrar supone al sujeto un esfuerzo lo suficientemente grande y traumático, un cúmulo de pérdidas materiales y emocionales de magnitud tal que el cálculo, consciente o inconsciente, para la toma de decisión incluye las expectativas de realización en su mismo lugar de origen. De ahí que no descartemos que en la base de la conducta emigratoria no solo interviene la situación ocupacional y de ingreso presente del sujeto sino también, lo que podríamos llamar el clima social de optimismo o pesimismo respecto a las posibilidades de desarrollo de la zona.

Desde cierta óptica teórica podría interpretarse a la intensidad de la emigración de la que adolece la región como una suerte de proceso homeostático o de equilibración entre recursos y población. Ello es el caso de regiones con alta densidad de habitantes por unidad de recursos productivos no expandibles, y dadas las condiciones de producción históricamente imperantes en la zona, podría arguirse que su constancia demográfica a lo largo de varias décadas suponía un equilibrio logrado a través de la emigración de sus excedentes poblacionales.

Hemos sugerido ya que no es este el caso de la zona Oeste por lo menos en la última década. La crisis económica alcanzó el umbral mismo de destrucción del sistema productivo que se refleja más dramáticamente en el abandono de las explotaciones. Aún sin contar la expansión de la base productiva con la puesta en valor de recursos no empleados (mayor aprovechamiento hídrico, puesta en producción de tierras incultas, minerales no explotados,

etc.), la región se inscribe en una tendencia de cada vez menor densidad de recursos humanos en relación a recursos físicos. De esta forma, la emigración no debe entenderse como un proceso de equilibración entre ambos términos sino como un proceso de deterioro de su principal recurso productivo -la población activa- que compromete el aprovechamiento de los restantes.

Ello configura, por tanto, un círculo vicioso, en el que el deterioro productivo -sumado a la falta de expectativas de progreso futuro- promueve la emigración y ésta compromete la actividad productiva agudizando su deterioro. Una estrategia adoptada para salir de tal determinación circular ha sido lo que podríamos denominar la terciarización de la economía dependiente del estado (expansión del empleo público) y la subvención de la pobreza (programas alimentarios, vivienda, etc.) que posibiliten la morigeración del flujo emigratorio.

De parte de los gestores de esta estrategia existe conciencia clara de su transitoriedad. Sin embargo, refuerza los parámetros de la dependencia de las comunidades respecto al estado y cuestiona las bases de la autogeneración del desarrollo. Su validez parece indiscutible en el corto plazo, pero en la medida que no decante en una pauta de permanencia y esté acompañada con esfuerzos orientados tanto a las transformaciones productivas en el largo plazo como a la generación de una dinámica comunitaria que devuelva a los pobladores de la zona su protagonismo en el crecimiento.

Hemos observado que la zona adolesce -salvando algunas excepciones- de una baja propensión a la acción colectiva y comunitaria. Sería falso explicar esto como consecuencia de rasgos fijos de la "cultura" de la zona. Ello implica asumir una perspectiva estática del problema para el cual los rasgos culturales son bienes inmóviles y condicionantes omnipresentes de la conducta. Con frecuencia, los informantes entrevistados refieren al "individualismo" como característica preeminente de los habitantes de la zona que atribuyen como causa de la inoperancia de las instituciones comunitarias (cooperativas, centros vecinales, etc.). En realidad, el individualismo se formula como concepto descriptivo de una serie de conductas poco orientada a los problemas de índole colectiva, pero al mismo tiempo se convierte en factor explicativo en el plano indefinible de los valores sociales.

Nuestro supuesto es que las condiciones sociales en que se desenvuelve la crisis económica de la zona son particularmente poco propicias para la emergencia de acciones -ya sea defensivas o progresivas- de la misma comunidad. La intensidad y prolongación de la crisis ha colocado en la superficie de la acción social la urgencia de resolución de los problemas inmediatos de subsistencia del individuo. La salida de la situación que constituye la emigración privilegia necesariamente las estrategias individuales sobre las colectivas. Como hemos argumentado anteriormente, las pautas de solidaridad en tales casos se transfieren desde el interior de la zona de origen hacia

el lugar de destino. También aducimos que la atomización de los recursos productivos, en vez de consolidar pautas de cooperación contribuyen, a partir de determinado umbral de dispersión a fortalecer criterios individuales de acción.

Las urgencias del ingreso y el nivel de vida individual contribuyeron, también, a que cada poblador busque individualmente la solución a su problema inmediato. Si la producción de la finca propia se transformo solo en un complemento errático de sus ingresos, éstos se buscaron por otros canales, en una estructura ocupacional marcadamente restringida. De tal forma, se priman necesariamente las relaciones de competencia frente al mercado de ocupaciones más que de solidaridad. Tal competitividad por las posibilidades laborales se refuerza, por otra parte, dada una situación de dependencia respecto a los dadores de aquellas: al respecto, la dependencia del estado como empleador es equivalente a la que se mantiene con el comprador externo de cachina o yerbas medicinales.

La baja propensión comunitaria de la zona determina la desorganización e inoperancia de muchas de sus instituciones. Circularmente, ello refuerza las demandas respecto al estado como realizador absoluto de soluciones. También en la relación entre organizaciones comunitaria hemos observado pautas que en poca medida reflejan solidaridad. La interacción entre las mismas y la búsqueda en común de soluciones no parece ser frecuente. Indudablemente la conformación del Consejo Asesor Agropecuario de la Zona Oeste constituye un avance de importancia en el intento de reforzar los lazos entre las instituciones; pero apreciamos - quizá erróneamente - que su constitución y dinámica actual depende más del esfuerzo volcado por la estación agronómica de la zona que del accionar de las organizaciones que lo constituyen. Quizá la escasez de recursos aún para el traslado de una localidad a otra atente contra las posibilidades de contacto permanente, pero de hecho se ha observado la postergación de acciones comunes decididas en asambleas del Consejo por la falta de iniciativa de las organizaciones comprometidas.

También es notoria la superposición de proyectos e ideas que formulan distintas cooperativas de manera independiente, como indicamos en otra parte del informe. No hemos identificado en ningún caso, a lo largo de las entrevistas efectuadas, propuestas de acción que impliquen la asociación entre cooperativas o centros vecinales, por ejemplo. La misma función del Consejo Asesor parece ser concebida por sus participantes más como un escenario para la formulación de reclamos a los organismos públicos que como un ámbito para la generación y discusión de propuestas de desarrollo comunes.

Pero internamente, cada organización comunitaria adolesce de una marcada vulnerabilidad. La primacía de la estrategia individual que impone la crisis y la urgencia de soluciones individuales engloba también, necesariamente, a sus propios dirigentes, al mismo tiempo que cercena las bases de participación de sus asociados. En la trama de condicionantes que

conforma ello, más la escasez de recursos con que operan las organizaciones y la indudablemente difícil identificación de soluciones viables para muchos problemas, la generación de propuestas se torna con frecuencia errática y muchas veces carentes de la suficiente justificación de su viabilidad.

Relacionado a ello, la falta de recursos humanos calificados para la formulación de propuestas es uno de los condicionantes más fuertes. A este respecto parece deficitaria la acción del estado provincial en el aporte de tales recursos o en la instrumentación de prácticas de asesoramiento a tales organizaciones comunitarias. En la misma medida, en ámbitos más específicos como la educación y la salud no existe un esfuerzo sistemático por potenciar la interacción de los agentes de cada uno de estos sectores residentes en la zona con el simple fin del intercambio de experiencias o del desarrollo de acciones comunes de mayor envergadura. En tal sentido, la relación entre el sector educacional o de salud de la zona con sus organismos provinciales tiende a repetir la pauta de comunicación vertical (unidad-organismo) sin un planteo sistemático de interacción horizontal. No obstante, las administraciones asumidas junto al nuevo gobierno constitucional parecen encaminarse hacia tal dirección.

La fragilidad de las organizaciones comunitarias y la falta de interacción sistemática entre los distintos actores comunitarios (incluyendo en ello a los municipios, los agentes prestadores de servicios sociales y por supuesto las organizaciones de la comunidad) generan cierta dispersión en la formulación de demandas, ideas y proyectos de acción. Una muestra privilegiada de ello es el contenido temático de las asambleas del referido Consejo Asesor. Allí, quizá exagerando la descripción, cada integrante formula su propia demanda u ofrece propuestas de solución a temas específicos, algunos de los cuales pueden involucrar a varias organizaciones participantes. Indudablemente no hay nada censurable en ello; pero en la medida que se privilegia la relación vertical entre demandante y organismo provincial responsable, no se suscita en el seno del Consejo una discusión en torno al valor de cada iniciativa en el marco de un modelo global de desarrollo de la zona. La instancia integradora de las distintas iniciativas y demandas se la deja en manos del gobierno provincial, restandose la comunidad un protagonismo que le pertenece por derecho propio, pero que estimula la autogeneración de ideas y las acciones encaradas por sí misma o con el concurso de los organismos provinciales.

De esta forma, podríamos construir un listado de problemas sentidos e ideas de solución más o menos abarcativo de las diversas cuestiones críticas de la zona, algunas de carácter global y estructural y otras puntuales. Pero al no existir un marco de interacción dinámico donde tales propuestas fueran debatidas no existen posibilidades de ponderarlas y establecer criterios para su prioritación. No es otra cosa que ello el significado de un modelo de desarrollo para la zona o la construcción de una imagen de la sociedad deseada por parte de la comunidad.

Es indudable que el acceso a la democracia supone un avance fundamental en la creación de una trama de participación en la discusión y formulación tanto de cuestiones puntuales y específicas como de las globales que hacen a las transformaciones de las sociedades. En tal sentido, la posibilidad de elección de las autoridades municipales sobre la base de propuestas políticas alternativas posibilita tal participación a la vez que responsabiliza a los dirigentes en el esfuerzo de plantear sus diferencias en términos de proyectos de acción más que en la trama de lealtades a grupos sociales. El cuerpo de concejales se convierte en un actor principal no solo para la toma de decisiones que afectan a la comunidad sino también para agilizar y ampliar el sistema de comunicación y participación ciudadana. Los representantes legislativos de los departamentos, por último, satisfacen una función necesaria de relación con el poder central, por una parte, y son protagonistas ineludibles, dado el ámbito de acción donde se desenvuelven, para la generación y síntesis de las propuestas de desarrollo que proyectan una imagen de futuro de la zona en el ámbito de la Provincia.

Sin embargo, en el espacio de la comunidad rural o semirural como la zona Oeste, la participación indirecta no basta. En cambio, son varios los motivos por los cuales es necesario impulsar una participación más comprometida de las organizaciones comunitarias con las cuestiones que hacen a su propio desarrollo. En tales ámbitos, los representantes de gobierno se mueven con notable restricción de recursos -incluidos los humanos- como para afrontar por sí solos el esfuerzo conjunto que significa la administración de gobierno y la generación de propuestas de cambio. En tales comunidades, los recursos humanos e institucionales son lo suficientemente escasos como para ser necesario integrar a todos ellos en el tratamiento de las cuestiones públicas.

Por otra parte, la participación comunitaria es también un mecanismo de estimulación social de la solidaridad, sin la cual difícilmente logre romperse el círculo autoalimentado entre deterioro de los recursos, dependencia de soluciones externas y primacía de las estrategias individuales.

Finalmente, la estrategia de desarrollo posible en la zona combina lo inmediato con el largo plazo, lo puntual con lo global y las acciones de mejoramiento de situaciones con las de transformación estructural de sus bases productivas y sociales. Ante este panorama complejo la participación de las distintas instancias comunitarias se hace ineludible en el marco de una conciencia de trabajo común donde las distintas demandas y propuestas de cada instancia pueden ser integradas paulatinamente en un proceso de desarrollo asumido por la misma población.

De lo dicho se deduce que se requiere una importante tarea organizativa de las instituciones comunitarias para lo cual el estado tiene un papel fundamental en el aporte de recursos humanos, asesoramiento y estímulos a la participación social. Ello no suprime, por supuesto, su responsabilidad en otros

ámbitos, inclusive reforzando sus aportes al mismo tiempo que racionalizando su uso. Pero su accionar, necesariamente, se debe articular con una creciente trama participativa de la comunidad, en la cual la exposición de demandas, la realización de diagnósticos puntuales sobre temas específicos, la formulación de propuestas, la reunión de esfuerzos para su consecución y la concepción de parámetros globales de desarrollo se constituyan en pautas permanentes tendientes a independizar paulatinamente a la comunidad de la tutela absoluta del estado, a fortalecer las expectativas de crecimiento colectivo como alternativa a la primacía de las estrategias salvación individual y a la autogeneración del desarrollo.